

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES



LA INFANCIA EN RIESGO:  
ENTRE LA CARIDAD Y LA CIUDADANÍA.

*Un estudio de caso sobre la gestión de la infancia y la  
adolescencia en riesgo en la Argentina contemporánea: La Plata, 2000-2003*

Lic. Angela Graciela Oyhandy Cioffi

**FLACSO**

..... SEDE ACADEMICA DE MÉXICO .....

T  
344.0327982  
0989i

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS  
SOCIALES**

**Sede México**

**MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES.**

**LA INFANCIA EN RIESGO:  
ENTRE LA CARIDAD Y LA CIUDADANÍA.**

*Un estudio de caso sobre la gestión de la infancia y la  
adolescencia en riesgo en la Argentina contemporánea: La Plata, 2000-2003.*

**Lic. Angela Graciela Oyhandy Cioffi**

**Directora: Mtra. Sara Makowski**

**Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias Sociales  
XIV Promoción, 2002 – 2004  
Seminario de Tesis: Cultura e Identidades  
México, D. F. Mayo, 2004.**

Se agradece el auspicio de la Secretaría de Educación Pública para la realización de este postgrado.

**INTRODUCCIÓN**.....5

**Capítulo 1: La construcción de la minoridad**

como objeto de estudio.....10

    1.1.- Aproximaciones analíticas al estudio de la minoridad .....12

    1.2.- ¿Porqué estudiar el problema del cálculo del riesgo?.....27

    1.3.- Presentación del Patronato de Menores.....30

**Capítulo 2: La emergencia del campo de protección**

**a la niñez en riesgo : una reconstrucción**

**histórica**.....37

    2.1.- Genealogía del campo de protección a la infancia.....38

    2.2.- El campo de protección a la infancia en riesgo en la actualidad.....53

**Capítulo 3: La justicia de**

**menores**.....64

    3.1.- Introducción.....65

    3.2.- Diseño Metodológico de la entrevista.....69

    3.3.- Análisis de las entrevistas .....71

    3.4.- ¿Cómo se construye un diagnóstico de riesgo en el expediente judicial?.....95

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 3.5.- Conclusiones..... | 102 |
|-------------------------|-----|

#### **Capítulo 4: Como en tu propia casa.**

##### **Análisis de las entrevistas a directivos y**

|  |            |
|--|------------|
| <b>personal de las instituciones de internación.....</b> | <b>105</b> |
|--|------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 4.1.- Introducción..... | 106 |
|-------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| 4.2.- Los significados de la institución..... | 110 |
|---|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 4.3.- El ingreso en la civilización..... | 124 |
|--|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 4.4.- Trabajar en Menores..... | 128 |
|--------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 4.5.- Todo para que se sientan bien..... | 129 |
|--|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 4.5.- Conclusiones..... | 133 |
|-------------------------|-----|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b><u>Conclusiones.....</u></b> | <b>135</b> |
|---------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b><u>Bibliografía consultada.....</u></b> | <b>146</b> |
|--|------------|

## **Introducción.**

Esta tesis se dedica a explorar la dimensión cultural de las instituciones de protección y asistencia de la infancia y la adolescencia en riesgo en la Argentina contemporánea. Su objetivo es situar en primer plano algunos aspectos poco problematizados, muchas veces soslayados, de la gestión estatal del riesgo infantil. Si gracias al aporte de valiosas investigaciones conocemos en detalle los aspectos jurídicos de este entramado institucional, ciertas lógicas organizacionales y tenemos alguna información acerca de su impacto en las vidas de los niños y adolescentes, poco sabemos acerca de su carácter de instituciones productoras de diagnósticos de riesgo.

La literatura especializada ha enfatizado el amplio arbitrio con la cual la ley del Patronato de menores (en la provincia de Buenos Aires, la actualmente vigente 10.067) habilita al juez de menores para intervenir en la vida de niños y adolescentes. Con base en este argumento se torna relevante conocer cómo se construye una declaración judicial de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones que llegan a un juzgado de menores? ¿A partir de que técnicas y procedimientos se convierten en un “caso”? ¿Cuál es el significado socialmente construido de la intervención judicial? Se trabajará en un estudio de caso, el Departamento Judicial La Plata, provincia de Buenos Aires en un período de tiempo que se recorta entre el año 2000 y 2003. Para ello, se ha recurrido al análisis de los discursos que circulan al interior del llamado Patronato de Menores, complejo institucional cuyo objetivo consiste en la protección y tutela de todos aquellos menores de 18 años de edad que se encuentran en situación de peligro “material o moral”, según reza el ambiguo texto de la ley<sup>1</sup>. El Patronato de menores es ejercido en forma concurrente por el poder judicial (concretamente el fuero de menores) y por el poder ejecutivo.

Este estudio parte de un fuerte presupuesto teórico que se pondrá a jugar a lo largo de la investigación: la actividad de los jueces de menores en el proceso de evaluación de la infancia y la adolescencia en riesgo no se agota en la aplicación de las normas legales al caso concreto. Del mismo modo no cabe reducir las prácticas de las instituciones de internación como simples ejecuciones de una orden judicial. En toda decisión judicial y administrativa se despliega una

---

<sup>1</sup> Se trata del decreto ley 10.067 del año 1983 (emanado en los últimos meses de la dictadura militar) actualmente vigente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

actividad interpretativa que excede el texto legal y los procedimientos técnicos y que esta atravesada por valores, creencias, representaciones, en suma, significados culturales. Esta investigación pretende ser un registro de esta dimensión interpretativa, a partir del análisis de estas matrices de significado mediante las cuales la institución clasifica y gestiona con la autoridad de la nominación oficial a la infancia “en riesgo”. Esto supone un abordaje cultural de las instituciones sociales, basado en la afirmación de que toda interacción, aún aquella racionalmente reglada como un procedimiento judicial, sólo puede ser comprendida en relación a las producciones simbólicas actualizadas en discursos y prácticas.

Este problema de investigación se sitúa en una coyuntura histórica particular. Actualmente en la Argentina existe un profundo debate político, social y teórico acerca del problema de la infancia “delincuente” y “riesgosa”. En el marco de un proceso de crisis económica y social sin precedentes, ha operado un proceso de visibilización pública de la infancia peligrosa: los adolescentes y niños asaltantes y homicidas son convocados en el discurso para legitimar un reclamo de aplicar el castigo penal desde edades más tempranas.<sup>2</sup> En pugna con este discurso y a la retaguardia en la opinión pública, existen proyectos para reformar el actual sistema legal de la minoridad en un sentido inverso: dotar a los adolescentes en conflicto con la ley penal de todos aquellos derechos constitucionales y garantías procesales de los cuales carecen en la actualidad. Sin la espectacularidad y la presencia mediática de este debate, desde hace aproximadamente una década existen proyectos que buscan reformar el actual sistema de asistencia a la infancia en riesgo, sacando de la órbita judicial la gestión de los casos. La consigna apunta a “desjudicializar la pobreza” y encauzar la gestión de la infancia en riesgo hacia organismos estatales de asistencia social.

Esta investigación ha desplazado el foco de interés desde el problema de la imputabilidad y el castigo hacia otros territorios menos transitados y discutidos, como son los mecanismos institucionales de evaluación y tratamiento, con fines de protección, de la infancia y adolescencia

---

<sup>2</sup>Actualmente la edad de inimputabilidad se extiende hasta los 18 años y para el caso de delitos graves hasta los 16 años. Hasta los 18 años los jóvenes en conflicto con la ley penal no tienen acceso a un debido proceso legal, ya que el procedimiento en la justicia de menores carece de todas las garantías procesales. Además al ser un derecho penal de autor, más que de actos, la internación se decide en función de las necesidades de protección del menor de edad y no de la comprobación técnica del delito.

en “riesgo”. La protección de los menores de edad víctimas de maltrato o de abandono suele recurrir a la tecnología de la internación en instituciones asistenciales con el objetivo de cesar un estado de peligro o riesgo y otorgar seguridad, protección, bienestar. En definitiva, el fin superior de resocializar y conducir a un futuro provechoso orienta ambos encierros (el penal y el asistencial) de la infancia y la adolescencia, el penal y el asistencial. La justificación de trabajar en el análisis de la construcción de “situaciones de riesgo” radica en la importancia de esta clasificación institucional tanto para los menores de edad con causas penales como asistenciales. El énfasis de la investigación se ha centrado en las causas asistenciales ya que se considera que faltan en la literatura sobre la justicia de menores análisis empíricos capaces de describir como el dispositivo de control-protección (los jueces de menores se dedican tanto de las causas penales como de las asistenciales) clasifica y gestiona a las infancias desprotegidas. Como hipótesis de trabajo se sostiene que en los discursos sobre el niño en riesgo y su tratamiento subyace una definición de la ciudadanía y de la integración social. Definición que esta investigación pretende reconstruir a partir del registro de las batallas simbólicas, agazapadas o explícitas, por el sentido legítimo de la protección del riesgo infantil.

El objetivo es describir y analizar el proceso mediante el cual un juzgado de menores produce un diagnóstico de riesgo de un niño o de un adolescente, y luego cómo intervienen para cesar el riesgo y otorgar seguridad las instituciones de internación. Específicamente las preguntas de la investigación apuntan a describir y analizar el proceso institucional de construcción de un menor “en riesgo”, atendiendo a los mecanismos institucionales a partir de los cuales se identifican estos casos y a las significaciones sociales inscritas en este cálculo. En suma, se pretende avanzar en el conocimiento de las imágenes de riesgo, seguridad, protección, inscritas en las prácticas y discursos institucionales y que como tales constituyen una producción colectiva. Producción colectiva que sólo puede entenderse a partir de una matriz de dominación más amplia, que incluye al estado pero que lo trasciende al difundirse por toda la vida social. Por eso se recurrirá al concepto de gubernamentalidad acuñado por Michel Foucault (Foucault: 1999;175) que tiene la capacidad de captar esa táctica de poder característica del estado moderno. Esta trama de dominación convierte en temas de estado las pequeñas sublevaciones hogareñas, los niños “ingobernables” pero también transforma en preocupación estatal la moralidad y la integridad física de los menores de edad que, como elemento privilegiado de la población, deben ser fijados

en un expediente primero, y luego en alguna tecnología de rehabilitación. Hay una definición de esta táctica de dominación de nuevo cuño que identifica Foucault que se vuelve reveladora para este trabajo:

“ Gobierno es la recta disposición de las cosas de las que se hace un cargo para conducirlos a un fin conveniente (Foucault:1999; 185)

En síntesis, toda esta tesis puede pensarse como un intento por responder a la pregunta ¿Cómo es definido el “fin conveniente” hacia el cual deben ser conducidos los niños en las instituciones públicas encargadas de su protección ? Y luego ¿cómo son efectivamente conducidos a este fin? Para ello es necesario transitar una serie de caminos. En el capítulo 1 se reseñan algunas obras de las ciencias sociales que aportan preguntas e inspiración a este trabajo. Luego, se trabaja sobre una cuestión teórica fundamental, como es la consideración del problema del riesgo en esta investigación. Por último se presenta una breve caracterización del Patronato de Menores de la provincia de Buenos Aires en la actualidad.

En el capítulo 2 se presenta una genealogía del Patronato de Menores en atención a la relación entre instituciones de asistencia a la infancia y políticas sociales en el marco de las transformaciones socioeconómicas que sufre la Argentina durante el siglo XX. Se dedica especial atención a la descripción del campo de la protección a la infancia en la Argentina contemporánea en la actualidad, fundamentalmente al conflicto suscitado en la provincia de Buenos Aires por el cambio normativo.

En el capítulo tercero se presenta el diseño metodológico de la investigación que se enfoca en un estudio de caso, el Departamento Judicial La Plata. A partir de un abordaje cualitativo se analizan entrevistas semi-estructuradas realizadas a los actores de mayor jerarquía en la pirámide institucional (jueces de menores y directores de instituciones de internación). Se trabaja con un total de 16 entrevistas y se complementa este análisis con el estudio de documentos institucionales, leyes y declaraciones publicadas en revistas. Tras esta presentación el capítulo se detiene en el discurso de los jueces de menores y en el análisis de un expediente judicial perteneciente a una causa asistencial. El objetivo es describir aquellas producciones simbólicas

que circulan en la actividad cotidiana de asistir a la niñez en riesgo al interior de este complejo institucional.

En el capítulo 4 se presenta una semblanza de la gestión de la niñez en riesgo a partir de los discursos de referentes institucionales, se ha trabajado con seis instituciones a las cuales la justicia de menores encomienda el cuidado de niños y adolescentes en riesgo. Tres de ellas son instituciones del estado y las otras tres organizaciones no gubernamentales incorporadas a la gestión estatal. En estas instituciones se han entrevistado a sus directivos y en algunos casos a las personas encargadas del cuidado de los niños y a los integrantes del equipo técnico. En total se ha trabajado con 10 entrevistas en este capítulo.

Por último se presentan las conclusiones de la investigación. Por un lado se exponen algunas reflexiones críticas que analizan los resultados de la investigación a partir de una problematización de los enfoques teóricos utilizados, intentando esbozar una propuesta teórica para el abordaje de este tipo de instituciones. Finalmente se presentan algunos aportes de esta investigación al esfuerzo colectivo de repensar las políticas públicas de infancia y adolescencia en la Argentina contemporánea.

## **Capítulo 1: La construcción de la minoridad como objeto de estudio.**

## **Introducción.**

Construir un objeto de estudio implica realizar un proceso de abstracción desde la complejidad de lo concreto, hacia un dispositivo teórico que limite, circunscriba, constriña. Por ello, de la vastedad de experiencias y significados que configuran la prácticas institucionales de protección a la infancia se trabaja únicamente con el proceso de clasificación y gestión de una situación riesgosa que realizan los actores institucionales. Este capítulo pretende aportar una justificación de esta elección teórica y metodológica.

En primer término se comentan algunos estudios sobre el problema de la minoridad, señalando puntos de contacto y de ruptura con el abordaje que aquí se propone. Más que un inventario exhaustivo de los estudios sobre el área se propone una selección organizada en función de los propios intereses teóricos y de los compromisos valorativos con estos textos. Luego se discute la centralidad del problema de la construcción de un diagnóstico de riesgo para emplazar culturalmente el tema de la protección de la infancia. Por último, se describe al Patronato de Menores para conocer la materialidad de las instituciones que se analizarán posteriormente en su dimensión cultural. La presentación de los anclajes teóricos y conceptuales, no se agota en este capítulo aunque pretende constituirse en un punto de partida que ayude a presentar el marco interpretativo a partir del cual se analiza el problema de la investigación.

Como punto de partida es importante señalar que la minoridad es una categoría producida en el marco del gobierno de la población y constituida en el cruce de los procedimientos institucionales de control-protección de la infancia. La minoridad remite a las interpelaciones a una infancia escindida, desde principios de siglo y hasta la actualidad, entre niños y menores. El menor es definido mediante la carencia de los atributos constitutivos de un niño: fundamentalmente su inserción en una vinculación filial y su condición de alumno. Por ello, los estudios seleccionados que se presentan a continuación comparten la característica de analizar aquellos “otros” procesos de sujetación social alternativos a la familia, ya que la tarea de proteger a la infancia se ha realizado en forma hegemónica durante el siglo XX bajo la forma de la institucionalización de los menores.

## **I.-Aproximaciones analíticas al problema de la minoridad.**

En este apartado se presentan algunos trabajos a partir de los cuales se construye el problema de investigación. Los textos elegidos reflejan el acervo de conocimiento en el cual se recorta esta tesis. No obstante lo cual es preciso aclarar que se omiten importantes trabajos que desde la psicología y la antropología han contribuido al conocimiento de este tema. La reseña se ha limitado a la discusión con investigaciones realizadas desde la sociología y la ciencia jurídica, ya que el objetivo de esta tesis es explorar a la luz de la sociología de la cultura un ámbito de la vida social tradicionalmente estudiado a partir de su dimensión jurídica, como es la gestión estatal de la infancia en riesgo. Más que impugnar esta perspectiva se trata de proponer un nuevo abordaje, a fin de completar y complementar los estudios existentes.

### **1.- Los estudios marxistas sobre el origen de la cárcel.**

¿Cuál es el sentido de incluir a los estudios marxistas sobre la cárcel en esta sección? El aporte que se pretende rescatar es la inauguración de una reflexión que intenta vincular la existencia de ciertas instituciones de reclusión obligatoria con la dinámica global de funcionamiento social, concretamente en el caso de la penitenciaria moderna al modo de producción capitalista. Por ejemplo, en el trabajo de Massimo Pavarini y Darío Melossi (1980) sobre los orígenes del sistema penitenciario en Italia y en Estados Unidos, se concluye en la necesidad de pensar a la cárcel en correlato con los modelos económicos de organización social existente. Sin detenemos en las significativas diferencias que existen entre estos 2 casos históricos, la cárcel es conceptualizada como “productora de hombres” ya que transforma al delincuente en un sujeto disciplinado para el trabajo en las fábricas.

Para los autores existe una imbricación sustantiva entre modo de producción capitalista y surgimiento de la prisión que cristaliza en la equiparación entre el modelo formal del contrato de trabajo y el concepto de pena como retribución, abstracciones ambas de la lógica de funcionamiento capitalista. (Es importante no perder de vista que la modalidad de castigo *prisión* se caracteriza por la cuantificación en tiempo según la gravedad del delito). La organización

social a partir de un proceso de construcción de equivalencias ( entre mercancías, entre trabajo y salario, entre delito y tiempo de reclusión) constituye la circunstancia histórica que permite la emergencia de la prisión como forma central de castigar los delitos. Trabajo y reclusión constituyen en *Cárcel y Fábrica*, las maneras históricas a partir de las cuales se reguló el mercado de trabajo en un momento determinado y se “enseñó a ser trabajador” a las masas campesinas desplazadas por la disolución del mundo feudal.

Para Melossi y Pavarini instituciones como las casas de trabajo y luego la prisión, responden a la necesidad de la formación de un proletariado industrial, en la óptica de estos autores a lo largo de las distintas transformaciones del modo de producción capitalista las reformas que ha sufrido la pena de prisión constituyen una respuesta a las necesidades del régimen de producción de capital. A partir de esta descripción es importante destacar que el espíritu de esta investigación sobre las instituciones de asistencia a la niñez en riesgo pretende problematizar esta especie de “funcionalización transhistórica” de la prisión. Si bien el objetivo del análisis es vincular la tecnología Patronato de Menores con el ámbito más amplio de las políticas sociales y luego con los discursos de la integración social, se asume la necesidad de describir la especificidad del campo de protección a la niñez en riesgo, más que deducir su lógica de funcionamiento a partir de su subordinación a las necesidades del régimen de acumulación de capital.

En este sentido, se considera imprescindible destacar en la emergencia del Patronato de menores en las primeras décadas del siglo XX las resonancias de un proyecto hegemónico destinado a la homogeneización y control de una población, con vistas a la consolidación del llamado modelo agroexportador oligárquico. Control y homogeneización que incluyeron desde la educación de la población mediante el establecimiento de la obligatoriedad de la escuela primaria, hasta medidas de corte netamente represivo. La literatura consultada coincide en destacar la relación entre el surgimiento del Patronato de Menores en 1919 y una estrategia destinada a la construcción de un orden social. Pero una vez asumida esta relación, se vuelve necesario analizar en cada circunstancia histórica el significado de este complejo institucional en un contexto social más amplio. Por ello, en el capítulo 2, se presenta una caracterización histórica a partir de las vinculaciones entre el Patronato de Menores, las políticas sociales predominantes y el contexto social más amplio.

A pesar de estos señalamientos críticos la inclusión de *Cárcel y fábrica* entre los antecedentes de este estudio, se justifica porque interesa rescatar de esta perspectiva teórica la búsqueda de pensar a la penalidad y, al encierro en general, en sus relaciones con la estructura social. Si bien esta investigación trabaja en un nivel más cercano al funcionamiento de las instituciones, podría decirse en un nivel “micro”, se considera necesario no perder de vista la dimensión macro-social.

## 2.- Goffman y el estudio de las instituciones totales.

La decisión de incluir el clásico trabajo de Erving Goffman *Internados*, entre los antecedentes de esta investigación se fundamenta en un doble propósito. Por un lado, interesa rescatar de este estudio aparecido en la década del 60' el análisis de ciertos procesos típicos de la dinámica de funcionamiento de las instituciones totales. En segundo término las críticas de Goffman ocupan un lugar destacado en la construcción de un imaginario social acerca de las consecuencias negativas de la institucionalización de los niños y adolescentes. Así, se combinan dos referencias a esta obra, la referencia teórica del concepto de institución total y por otra, su apropiación por parte del discurso crítico que intenta reformar el sistema estatal de tutela y protección de menores.

La definición de una institución como total se basa en su capacidad de absorción de las esferas públicas y privadas de un individuo. Se anula la diferencia entre lugar de trabajo y lugar de residencia, de vivienda y de estudio y se restringen al mínimo los espacios de autonomía personal. Exhiben una tendencia totalizadora de las vidas de sus “internos” expresadas en los obstáculos que interponen a las interacciones con el exterior. En esta caracterización Goffman incluye hospitales psiquiátricos, prisiones, monasterios, campos de concentración. El ingreso y el egreso no voluntario es un rasgo fundamental señalado por el autor que presentan las instituciones de asistencia a niños y adolescentes que se analizarán en el capítulo 4.

Otro proceso analizado por Goffman que resulta particularmente interesante para el caso de estudio es la subsunción de la vida cotidiana de los internos bajo el marco de referencia del tratamiento institucional.

“Casi todas las disposiciones vigentes a través de las cuales el paciente se va relacionando en su rutina diaria pueden ser modificadas por el psiquiatra a voluntad, si se le proporciona una explicación psiquiátrica”(Goffman:1961;352)

Si cambiamos la palabra psiquiatra por juez de menores o director de instituto, encontramos que esta característica de las instituciones totales es un atributo distintivo de la práctica de asistencia a niños y adolescentes en situación de riesgo. El fin superior de protección de la integridad física y moral habilita prohibiciones y restricciones de derechos. Cuando la protección aparece como “la” clave de lectura, “el” marco de referencia a partir del cual se asiste a los niños, todo el despliegue institucional se justifica para evitar que los riesgos se actualicen en el futuro. Goffman señala que lo paradójico es que estas instituciones no son capaces de cumplir las metas que se proponen, así los hospitales psiquiátricos que estudia no curan a sus enfermos y esto por varias razones. Por un lado las dificultades que ocasiona el marco de la institución total para el diagnóstico, tratamiento y resocialización de los internos. Difícilmente se puedan adquirir habilidades para la vida social anulando las relaciones con el exterior. También el estigma que producen estas instituciones atenta contra este proceso. En definitiva, las coacciones al mantenimiento de un yo y en el caso de niños de construcción de un yo. Otra crítica sustantiva se detiene en el criterio de ingreso, es decir, ¿están en el hospital psiquiátrico aquellos que necesitan estar allí? Goffman concluye en su estudio sobre el hospital psiquiátrico que en muchos casos son otros (jueces, vecinos, parientes) lo que “necesitan” que determinados sujetos estén internados, afirmando que son éstos los verdaderos intereses que resuelven estas instituciones. En definitiva se trata de preservar el orden social de sujetos que amenazan vulnerarlo. Y este “diagnóstico” se tiñe fundamentalmente de prescripciones morales y éticas acerca de conductas ajenas.

Todas estas críticas han pasado a formar parte de un amplio consenso acerca de las desventajas de la institucionalización como medio para dotar de habilidades sociales a sujetos especialmente indefensos o en situaciones de riesgo. Consenso que en el caso de estudio es ampliamente compartido ya que hasta los jueces de menores que internan para proteger, señalan que se trata de aplicar “el mal menor” en casos de extrema gravedad. Por todas estas razones, las críticas a la

instituciones totales realizada por Goffman, constituyen un acervo de conocimiento de las ciencias sociales de vital importancia para la crítica de las instituciones de asistencia a la infancia en la Argentina contemporánea.

### **3.- Los Salvadores del Niño.**

Este trabajo de Anthony Platt data del año 1969 y realiza una descripción en términos sociológicos de los hombres y mujeres (mayoritariamente mujeres) protagonistas del movimiento que a fines del siglo XIX en Estados Unidos contribuyó a la creación de los primeros tribunales para menores del continente. Suscribiendo a la teoría del etiquetamiento analiza el fenómeno de la delincuencia juvenil a partir de su construcción social como tal.

Platt opone a la versión oficial dedicada a celebrar el humanismo filantrópico de estos reformadores, una mirada focalizada en los efectos sociales provocados por estas instituciones de bien público: la creación de una categoría de niños y adolescentes controlados con la finalidad de defender a la sociedad de los males de la futura delincuencia adulta. El objetivo de estas instituciones era la corrección de estos jóvenes y su transformación en sujetos respetuosos de la leyes, para ello, la crueldad de la prisión debía ser reemplazada por instituciones capaces de imitar un ambiente familiar y propiciar el contacto del niño con la naturaleza. En síntesis, se podría caracterizar a la consigna de este movimiento como la búsqueda de sustraer a los menores de edad del castigo penal, para transformarlos en ciudadanos útiles para la sociedad.

El autor coincide en una de las críticas que luego será retomada con firmeza por el movimiento constitucionalista norteamericano: ya que los salvadores del niño actúan en procura de “lo mejor para los niños” el derecho penal es despojado de las limitaciones al arbitrio estatal: la reclusión por tiempo indeterminado y la ausencia de garantías procesales se justificaba (al igual que actualmente en los juzgados de menores de la provincia de Buenos Aires) por las necesidades de la resocialización y reeducación del niño-adolescente. Las prácticas de estos hombres y mujeres pertenecientes a las clases media y alta norteamericanas se convalidaban en nombre de los avances de la ciencia y del amor a los niños, juntamente con la caridad religiosa. La falta de

distinción entre infractores y no infractores se explica en el discurso de los reformadores en la necesidad de sacar a estos niños y adolescentes de las tentaciones de la delincuencia. Esto tanto valía para aquellos que habían transgredido la ley como aquellos en situación de vagancia, mendicidad, inmoralidad, en suma aquellos niños sin familia o pertenecientes a hogares deficitarios de acuerdo a los códigos de moralidad y bienestar predominantes.

Platt afirma que este control de las familias se dirigió exclusivamente a los sectores populares. Así, la acción del movimiento creó una serie de controles y coerciones dedicadas a la juventud que devinieron en un crecimiento del poder estatal sobre las libertades de los niños y jóvenes pobres. La principal meta fue asegurar valores tradicionales como la familia y la religión, en un contexto de urbanización creciente e inmigración. Una de las características que distingue el trabajo de Platt es la atención dedicada al perfil sociológico de los “salvadores del niño”: su pertenencia de clase, familiar y los imaginarios a partir de los cuales realizan sus prácticas “benéficas”. El imaginario de la ciudad “fermento de la maldad” versus “la pureza de la vida rural”, constituye uno de las representaciones centrales en el discurso de este movimiento. Es interesante destacar la importancia otorgada por estos reformadores a la corrupción del espíritu que provocaban los burdeles, cines, cantinas y la preocupación por la moralidad de la juventud y la necesidad de garantizar el control a través de la reafirmación simbólica de la familia mediante la actividad de los jueces (padres de familia) y de las mujeres de la beneficencia que resignificaban el rol tradicional de la mujer, “trabajadora social innata”. Así, estas mujeres profesionales salían al mercado laboral reforzando estereotipos de mujer conciliando los intereses de reformistas y conservadores en la defensa de la sociedad y de los niños al mismo tiempo. Interesa destacar la importancia otorgada por el autor a las funciones simbólicas en la presentación pública de estas mujeres como valuartes de la familia y de la maternidad en la tareas de asistencia a la infancia.

El Estudio de Platt ilumina un campo de problemas teóricos en el cual converge la presente investigación como es el papel de ciertos movimientos sociales y luego, de los dispositivos institucionales en la identificación de ciertos fenómenos y su transformación en “problemas sociales” que requieren ser atendidos por las agencias estatales. Esta perspectiva constructivista se evidencia en el propio subtítulo del libro *“la invención de la delincuencia juvenil”* que alude

al trabajo de construcción de una nueva categoría por parte de los “Salvadores del Niño”. En esta investigación la pregunta por la definición institucional del riesgo de los niños retoma esta perspectiva constructivista.

#### **4.- Michel Foucault : entre las disciplinas y la gubernamentalidad.**

##### **4.1-Vigilar y Castigar y la extensión de las tecnologías disciplinarias.**

Desde su aparición en el año 1975, *Vigilar y Castigar* se ha convertido en una cita obligada a la hora de estudiar cárceles, reformatorios, hospitales, en suma, instituciones totales en el lenguaje goffmaniano. La presente investigación recoge cierta inspiración foucaultiana en su intento de abandonar las tradicionales definiciones del poder como pura coerción, negación o supresión. Por el contrario, se parte de una caracterización positiva como poder de constitución, de producción de sujetos y objetos.

Dice Foucault que la constitución de una fuerza de trabajo libre (requisito indispensable para el desarrollo del capitalismo) sólo es posible si el cuerpo se halla inserto en un sistema de sujeción que tiende a su docilidad y utilidad. Entonces, se descubre la relación entre la llamada dulcificación del derecho penal situada aproximadamente a mediados del siglo XVIII y el nacimiento del capitalismo. El planteo marxista reseñado en las páginas anteriores, explicaba este proceso histórico a partir de una subordinación del derecho y los proyectos reformistas a una estrategia de clase. En Foucault, esta imbricación entre el avance de la prisión como castigo moderno por excelencia y trabajo asalariado se insertan en una compleja táctica de poder, resultado de la coincidencia de varias y contradictorias luchas que luego son subsumidas y articuladas bajo una trama de dominación. Dice el autor en *Vigilar y Castigar*:

“Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el “privilegio” adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder por otra parte no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición, a quienes “no lo tienen”; los invade pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos del mismo modo que ellos mismos en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos” (Foucault:1976;33)

Considero que si bien ambas lecturas (la marxista y la foucaltiana) conducen a buscar los vínculos entre idénticos procesos ( el castigo penal y la construcción de la sociedad capitalista) al mismo tiempo prescriben diversas maneras de construir estos vínculos. Foucault inhibe la búsqueda de la causalidad mecánica, de la lógica única que organiza la totalidad social. Si bien la tesis desarrollada en *Vigilar y Castigar* ha dado lugar a diversas y contradictorias interpretaciones, aquí interesa rescatar la potencialidad de este abordaje para conocer la racionalidad de una tecnología disciplinaria de nuevo cuño que en la perspectiva del autor se extiende por diversos espacios de la vida social (cuartel, fábrica, escuela) y es capaz de caracterizar a las modernas sociedades como sociedades disciplinarias. Uno de los desarrollos más originales de *Vigilar y Castigar*, es el análisis de los efectos disciplinarios sobre el cuerpo. Así se labora en la clasificación y en la ordenación del individuo en el espacio. Para nuestro caso de estudio la internación de los niños en riesgo sería susceptible de ser conceptualizada como una tecnología disciplinaria. Siguiendo a David Garland (1999;211) podría interpretarse el tópico foucaltiano del avance de las tecnologías disciplinarias en sintonía con la descripción weberiana del proceso de avance de la racionalidad instrumental en las sociedades occidentales. La pregunta foucaltiana se interroga por el sentido de este tránsito en el cual la ciencia y el cálculo se convierten en tecnologías de dominio desplazando a los sentimientos de venganza y a las tradiciones punitivas.

El autor describe un juego de constitución de subjetividades en el cual la normalización de las conductas a partir de la combinación de la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen se despliegan en la escuela, el hospital y la prisión. Pero indagar en la lógica disciplinaria no implica suscribir a la tesis de su eficacia normalizadora. Foucault identifica el momento histórico en el cual el poder disciplinario se constituye en uno de los mecanismos centrales de organización y control del espacio social, lo cual no conduce automáticamente al establecimiento de su infalibilidad. En este punto se comparte la tesis de Roger Chartier:

“Hay pues un “envés” de la historia de los dispositivos disciplinarios –un envés tejido de resistencias, de desvíos, ilegalidades. En oposición a las lecturas reductoras de su trabajo Foucault recuerda la fuerza de

las prácticas rebeldes que responden de diversas maneras a las microtécnicas de constricción” (Chartier:1996; 44).

### El gobierno de la población.

Foucault describe el proceso histórico de extensión de las tecnologías disciplinarias que colonizan e invisten a instituciones medulares de nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo destaca la emergencia de una nueva racionalidad política que vincula el poder del estado con el bienestar de la población. Así, el llamado Biopoder se constituye de dos polos: el control del cuerpo y el control de la especie (Dreyfus-Rabinow:2001;168). El gobierno de la población requiere del conocimiento de las capacidades actuales y de las técnicas para acrecentarlas. El estado de bienestar se ocupa de la salud, la escolaridad, la moralidad, la sexualidad de la población con el objetivo de conducir a los individuos hacia un fin conveniente, que se define al mismo tiempo como lo mejor para el individuo y lo mejor para la sociedad. Foucault denomina al gobierno de la población, biopoder y lo define a partir de la absorción por el poder de una serie de fenómenos. Uno de ellos es la tendencia hacia la estatización de lo biológico. Los nacimientos, la reproducción y la muerte se constituyen en objetos de regulación a partir de los cuales se consolida la medicalización de la población y la higiene como preocupación pública. El otro campo de intervención de la biopolítica es el de la identificación y manejo de los riesgos. En relación a estos fenómenos dice Foucault que la biopolítica introducirá instituciones asistenciales (invistiendo a muchas preexistentes) y otros mecanismos más sutiles de regulación social.

Este desarrollo teórico servirá en esta investigación para pensar al Patronato de Menores en la clave de poder disciplinario (cuerpos sujetos coactivamente) pero al mismo tiempo como gobierno de la población que busca acrecentar el bienestar general (proteger a los niños de situaciones riesgosas y conducirlos hacia un estado de seguridad). Foucault sostiene que estos conjuntos de mecanismos no son del mismo nivel lo cual les permite no excluirse y poder articularse uno sobre el otro. En los capítulos 3 y 4 se analizarán las potencialidades heurísticas de trabajar con uno u otro concepto y en su posible articulación para el caso histórico que aquí se estudia.

## **5.- Revisando la bibliografía argentina: algunos estudios sobre el Patronato de Menores**

### **5.1.-La denuncia del autoritarismo y la promesa despertada por el cambio paradigmático.**

Bajo este título se incluye a los trabajos que surgen a partir de la década de los ochenta, en la cual se visibiliza el problema de las instituciones de menores bajo un discurso de denuncia y con propuestas de reforma. Un trabajo clave es la compilación titulada *Ser niño en América Latina* publicada en el año 1991 que recoge una serie de artículos que se dedican al análisis de la legislación y las políticas públicas hacia la infancia en el continente. El libro compilado por Emilio García Mendez y María del Carmen Bianchi, aglutina distintas presentaciones realizadas en un seminario organizado por varios organismos internacionales entre ellos UNICEF y ILANUD<sup>3</sup> El subtítulo del libro “De las necesidades a los derechos” resume adecuadamente una de las tesis centrales compartidas por los autores: la Convención de los derechos del niño y del adolescente es expresiva de un cambio paradigmático en la conceptualización del niño en el derecho internacional.

El niño pensado por las legislaciones de fines del siglo XIX y principios del XX se construyó como objeto pasivo de cuidados e interdicciones. Por el contrario, el niño de la Convención es un sujeto de derechos y garantías individuales que deben ser respetados por los adultos. Así, se asistiría a un pasaje desde el discurso de la situación irregular hacia el discurso de los derechos. Otro aspecto a destacar teniendo en cuenta los fines de la presente investigación es el abordaje de la legislación y de las instituciones de menores a partir del concepto de *control social de la infancia*, que tiene puntos de encuentro con la teoría del “etiquetamiento” comentada en la obra de Anthony Platt. Dice García Mendez:

“La infancia constituye el resultado de un complejo proceso de definiciones, acciones institucionales y cambios sociales de los sentimientos...” “...la historia de la infancia es la historia de su control”. (García Mendez:1991; 11)

---

<sup>3</sup> UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la infancia) ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente).

En este control intervienen desde la escuela, la familia, la religión hasta la justicia de menores. Éste último control es selectivo y dirigido a los niños y adolescentes de los sectores populares: he aquí otra de las conclusiones del libro que se viene comentando. Este control social convierte a los niños que entran en contacto con el dispositivo institucional en menores, pretendiendo cumplir un papel de política social, a partir de la judicialización de las situaciones de riesgo. Durante la expansión del gasto social en la Argentina de los años 50', el mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores, resta numerosos "clientes" al control social represivo de la infancia. Por el contrario el estado autoritario de los 70' lo refuncionaliza y lo incluye como parte de la estrategia represiva global. En los años 80' siguiendo el derrotero señalado por García Mendez, los movimientos sociales que emergen con la apertura democrática interpelan a este sistema, apropiándose del discurso jurídico de la Convención de los derechos del niño, para denunciar estas prácticas que se caracterizan como estigmatizantes y violatorias de los derechos humanos.

En este libro se destaca un énfasis en la atención dedicada a los instrumentos jurídicos a partir de los cuales se define la problemática de la minoridad y el señalamiento de la potencia performativa de estos discursos legales, potencia que habilita a pensar en un cambio en las prácticas a partir de la introducción de un cambio en las normativas vigentes. El discurso de los derechos humanos permea estos planteos, si hay que cambiar la legislación de menores es básicamente porque vulnera los derechos humanos de los niños y ciertas garantías procesales mínimas reconocidas a los adultos en conflicto con la ley penal. Así se produce la paradójica situación que un niño en riesgo o sospechoso de cometer un delito tiene menores protecciones contra la privación de libertad que un adulto penalmente responsable por un delito. Incorporar las normativas de la Convención de los derechos del niño y del adolescente a la legislación vigente sería, siguiendo esta línea argumentativa, un paso previo a cambiar las prácticas a partir de las cuales se asiste a la niñez en riesgo. Éste presupuesto que anima el espíritu de *Ser niño en América Latina* es compartido por toda una serie de eventos y publicaciones que a instancias de los organismos internacionales, instituciones no gubernamentales y asociaciones de juristas otorgaron visibilidad pública al tema de la "minoridad" desde inicios de la apertura democrática.

## 5.2.- La persistencia del Patronato de Menores.

En el año 2001 se publica *La niñez ajusticiada* libro que es producto de la tesis doctoral de Silvia Guemureman y Alcira Daroqui. El objetivo del libro es describir en forma exhaustiva el funcionamiento de las instituciones que conforman el patronato de menores en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Este estudio tiene la virtud de realizar un trabajo de clarificación en términos estadísticos acerca de los alcances del discurso del Patronato: cuántos niños y adolescentes son “tocados” por el sistema, cuántos son institucionalizados y de que manera son nominados. Así aparece un dato crucial para entender la lógica de funcionamiento de este dispositivo: no existe la sistematización de los datos, las estadísticas que producen las dependencias públicas son incoherentes, erráticas e insuficientes. Pareciera existir una negación institucional, un borramiento de las propias prácticas y una irresponsabilidad (nadie es responsable por lo que no sabe) por la ineficacia del sistema de protección a la infancia.

*La niñez ajusticiada* describe las instituciones que organizan el control sociopenal hacia la infancia a partir de las leyes que las reglamentan, los organigramas y las producciones institucionales como documentos institucionales, estadísticas, sentencias y entrevistas a funcionarios judiciales. Las autoras concluyen en la afirmación de la persistencia de la ideología de la doctrina de la situación irregular en las prácticas institucionales a pesar del amplio consenso ganado en debates y foros académicos por el paradigma de la protección integral de derechos expresados en la Convención de los derechos del niño. Esta afirmación constituye un punto de partida en la presente investigación: documentada la persistencia de las prácticas del patronato de menores, se busca indagar en los significados culturales y en los mecanismos institucionales que sostienen esta persistencia a pesar de los duros embates teóricos librados contra el Patronato de menores.

En años recientes aparecen estudios que trabajan con el análisis de discursos como herramienta para acceder a una comprensión de las políticas públicas de infancia. Por ejemplo el artículo “Las infancias de la minoridad” de Mara Costa y Rafael Cagliano aparecido en el año 2000 en una compilación sobre políticas sociales y subjetividad. Este trabajo constituye uno de los antecedentes de trabajos que intentan establecer vínculos entre las prácticas y discursos institucionales y la producción de identidades. Interesa destacar algunas imágenes acerca de la

producción de la “minoridad” en la historia argentina. Una de ellas que se pretende retomar en el análisis es la falta de construcción de la diferencia entre vida pública y vida privada en las prácticas institucionales:

“Hay un mundo de los niños que transita por dentro de las familias, el mundo privado, cuyas fronteras externas son ocupadas por espacios públicos, donde pueden circular apropiándose de la mano del adulto que les enseña los códigos y con ellos mediatizan el vínculo. Para los menores, el mundo a explorar es la calle o el instituto; es un ámbito homogéneo, caracterizado por relaciones establecidas en el ámbito legal que controla sus acciones. Esta falta de espacio privado genera la ausencia de una vida compartida con otros en la comunidad familiar”( Duschatzky :2000;89)

En el estudio que se viene comentando se concluye en la persistencia del imaginario social *menor* a pesar de las grandes transformaciones sociales ocurridas desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Imaginario a partir del cual se instituyen políticas sociales excluyentes. En “*Las infancias de la minoridad*” se trabaja en el análisis de un programa alternativo, a partir de las voces de los niños y del análisis de documentos institucionales. Se concluye en la persistencia de una construcción que divide entre niño y menor, marcando los cuerpos, fijándolos y conduciéndolos por espacios que sellan la distinción. A estas alturas, la imposibilidad de trascender el estigma, de otorgar ciudadanía a partir de las intervenciones estatales aparece como una conclusión común a todos los trabajos revisados. Conclusión que se constituye en premisa de este trabajo que busca describir y analizar los discursos y prácticas de los actores institucionales que gestionan en la actualidad la construcción de la minoridad.

## **6.- Recapitulando.**

Hasta aquí se han puesto en evidencia algunas posiciones teóricas, a partir de las apropiaciones y las críticas a la obras reseñadas, en este momento se vuelve necesario explicitar la relación que se asume frente a este legado y los presupuestos que impone a este trabajo de investigación. En los trabajos citados es posible reconstruir ciertas imágenes acerca de estas instituciones de protección a la infancia, imágenes a partir de las cuales se ha teorizado y respecto de las cuales se vuelve necesario reflexionar acerca de sus implicancias para el presente estudio. Se postula la existencia de un trasfondo de sentido compartido que atraviesa todos estos trabajos a pesar de sus profundas

divergencias teóricas y sus diversos acercamientos metodológicos. Esta búsqueda de esa especie de trasfondo común, de acervo de conocimiento acumulado, se afina en una sociología del conocimiento que reniega de aquella imagen de una investigación como la producción individual de un sujeto aislado. Se intenta saldar una deuda con el mandato de interpelar a las relaciones existentes entre poder, conocimiento y discurso en la propia actividad del conocer.

Todos los trabajos citados y la mayoría que se han leído en el proceso de esta investigación conciben a las instituciones encargadas de gestionar a las infancias en riesgo, como aparatos de control social. De esta manera el aspecto iluminado por esta especie de idea-fuerza es la función que cumplen estas instituciones en la homogeneización de la población. Así, estos dispositivos institucionales funcionarían como una última barrera de contención con la cual se protegería al orden social, frente a la disfuncionalidad de aquellas instituciones encargadas del control social primario como la familia, la escuela, etc. Desde Foucault y la táctica general de poder que sujeta a los cuerpos para tornarlos útiles hasta los estudios sobre el origen del Patronato de menores en Argentina que describen la necesidad de prevenir la futura delincuencia de los hijos de familias desintegradas, se resalta la relación existente entre estas instituciones y el mantenimiento del orden social.

Además es posible identificar un discurso que asume la forma de denuncia, enfatizando el carácter autoritario y antidemocrático de este control social. Antidemocrático porque interviene en nombre de ciertos discursos socialmente legitimados, pero no es capaz de realizar en esos cuerpos los mandatos en nombre de los cuales se lo habilitaría a controlar, protegiendo, a la infancia. De este modo se pueden identificar desde trabajos que abogan por el ejercicio de un control social democrático hasta trabajos inspirados en una protesta libertaria sobre el control en sí mismo. Pero en todos ellos es posible identificar esta lógica de la denuncia. Además de esta centralidad otorgada al concepto de control social y de la forma denuncia que se ha identificado en este imaginario compartido, destaca un tercer elemento: la voluntad de reforma. Todos estos textos aportan elementos capaces de ser integrados en una crítica de las instituciones existentes, crítica que lleva implícita por lo menos como un imaginario, un proyecto de lo deseable, una imagen del cambio. Sería interesante realizar un análisis de estas imágenes en los autores revisados, análisis que excede las posibilidades de este trabajo. Sin embargo de manera

preliminar se ha identificado un contenido implícito en esta críticas que se pretende poner de manifiesto. Así, por ejemplo en los textos citados que propugnan el cambio paradigmático es posible distinguir un gran a priori: la apuesta por la capacidad de los textos legales para modificar lo existente. Por supuesto que estos autores no profesan una fe ingenua sobre la capacidad performativa de la ley, pero es indudable que focalizan sus estudios en la crítica y la propuesta de nuevos marcos normativos, a partir de los cuales construir instituciones democráticas.

Por el contrario en el caso de un trabajo como el de Foucault la crítica destroza la distinción sujeto-objeto y envuelve al estudioso. Más que postular un deber ser para las instituciones y en definitiva para la sociedad, se trata de un ejercicio de la libertad, en palabras de Foucault una “ontología histórica de nosotros mismos” Ya que “en la crítica de lo que somos es a la vez un análisis histórico de los límites que se nos han establecido y un examen de su franqueamiento posible” ( Foucault:1999;17). Sin embargo, se vuelve necesario poner en juego cierta tensión presente entre los conceptos de Michel Foucault citados anteriormente y el discurso de los derechos. En forma preliminar, ya que se volverá más adelante sobre este tema, cabe afirmar que la crítica foucaultiana al discurso de los derechos se fundamenta en el despliegue del poder disciplinario que el discurso de los derechos instiga. Más que discutir la legitimidad o ilegitimidad de estos derechos pretende describir como han permitido y naturalizado en su nombre el establecimiento de relaciones de fuerza. Para Foucault las disciplinas son teorizadas y codificadas en el inconmensurable lenguaje de los derechos. Pero a propósito de esta postura y pensando en las críticas al Patronato de Menores ¿Cómo se construye un pensamiento crítico del poder disciplinario más allá del lenguaje de los derechos? Pensando en nuestro objeto de estudio, la literatura revisada postula que la extensión y profundización de los derechos constituirá un punto de partida para democratizar la asistencia y protección a la infancia. ¿Cómo armonizar esta posición con la descripción foucaultiana de los derechos y las libertades jurídicas como trasfondo de la dominación disciplinaria? Esta pregunta atraviesa toda esta investigación y su dilucidación no pretende ser agotada en este momento. Sin embargo y siguiendo al propio Foucault no se trataría de denostar del discurso de los derechos, de minimizar su potencial liberador , sino de reinscribirlos en nuevos términos, de pensarlos en función de nueva posibilidades históricas.

preliminar se ha identificado un contenido implícito en esta críticas que se pretende poner de manifiesto. Así, por ejemplo en los textos citados que propugnan el cambio paradigmático es posible distinguir un gran a priori: la apuesta por la capacidad de los textos legales para modificar lo existente. Por supuesto que estos autores no profesan una fe ingenua sobre la capacidad performativa de la ley, pero es indudable que focalizan sus estudios en la crítica y la propuesta de nuevos marcos normativos, a partir de los cuales construir instituciones democráticas.

Por el contrario en el caso de un trabajo como el de Foucault la crítica destroza la distinción sujeto-objeto y envuelve al estudioso. Más que postular un deber ser para las instituciones y en definitiva para la sociedad, se trata de un ejercicio de la libertad, en palabras de Foucault una “ontología histórica de nosotros mismos” Ya que “en la crítica de lo que somos es a la vez un análisis histórico de los límites que se nos han establecido y un examen de su franqueamiento posible” ( Foucault:1999;17). Sin embargo, se vuelve necesario poner en juego cierta tensión presente entre los conceptos de Michel Foucault citados anteriormente y el discurso de los derechos. En forma preliminar, ya que se volverá más adelante sobre este tema, cabe afirmar que la crítica foucaultiana al discurso de los derechos se fundamenta en el despliegue del poder disciplinario que el discurso de los derechos instiga. Más que discutir la legitimidad o ilegitimidad de estos derechos pretende describir como han permitido y naturalizado en su nombre el establecimiento de relaciones de fuerza. Para Foucault las disciplinas son teorizadas y codificadas en el inconmensurable lenguaje de los derechos. Pero a propósito de esta postura y pensando en las críticas al Patronato de Menores ¿Cómo se construye un pensamiento crítico del poder disciplinario más allá del lenguaje de los derechos? Pensando en nuestro objeto de estudio, la literatura revisada postula que la extensión y profundización de los derechos constituirá un punto de partida para democratizar la asistencia y protección a la infancia. ¿Cómo armonizar esta posición con la descripción foucaultiana de los derechos y las libertades jurídicas como trasfondo de la dominación disciplinaria? Esta pregunta atraviesa toda esta investigación y su dilucidación no pretende ser agotada en este momento. Sin embargo y siguiendo al propio Foucault no se trataría de denostar del discurso de los derechos, de minimizar su potencial liberador , sino de reinscribirlos en nuevos términos, de pensarlos en función de nueva posibilidades históricas.

¿Cuál es la relación que se establecerá con los textos arriba reseñados? En primer lugar, se comparte la voluntad de ejercer una reflexión crítica y de comprender el funcionamiento concreto de un control social selectivo y estigmatizante. Pero al mismo tiempo se intentan iluminar otras aristas muchas veces opacadas por la centralidad de los aspectos represivos, por ejemplo, los significados culturales construidos en la actividad cotidiana de gestionar a la infancia en riesgo. Del mismo modo, se conceptualiza a las leyes como discursos y, cómo tales, el interés no se agota en la instancia técnica de aplicación de la norma, sino en la descripción y análisis de aquellas representaciones sociales a partir de las cuales es posible interpretar y actualizar un texto normativo. En definitiva, se concibe a este complejo institucional denominado Patronato de Menores como una realidad social compleja atravesada por varios y contradictorios discursos y prácticas (muchas veces en pugna).

## **2.-¿Por qué estudiar el problema del cálculo del riesgo?**

De las páginas anteriores se desprende la gran importancia que, en general, la literatura dedicada al estudio de las instituciones que asisten a la infancia en Argentina ha dedicado a la discusión de los aspectos jurídicos del actual sistema. Este énfasis también es compartido por organizaciones internacionales como UNICEF, que ocupa un lugar central en la organización de foros y debates en torno a esta problemática. La dicotomía entre la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las viejas legislaciones latinoamericanas suele hegemonizar el debate académico.

Dicotomía que se expresa a partir de la oposición entre el ejercicio de la protección a partir del reconocimiento del niño como sujeto de derechos humanos contra la protección del niño entendido como objeto de cuidados y tutela. Autores como Emilio García Mendez (1991), y Ernesto Doménech (2000) refieren la existencia de dos paradigmas en pugna. Esquemáticamente se presentarán a continuación un bosquejo de cada uno de estos paradigmas:

**Paradigma de la situación irregular:** Este entramado conceptual surge entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y es un hijo directo del positivismo jurídico. Uno de sus presupuestos es que el estado debe hacerse cargo de los menores en “situación irregular”. Esta es definida a partir del concepto de peligro material o moral que sufra o pudiera llegar a sufrir el menor. Las

legislaciones portadoras de este paradigma consagran esta vaguedad conceptual entronizando al juez como evaluador con capacidad para tomar medidas tan extremas como suspender la patria potestad o privar a un niño de su libertad. El niño es imaginado como menor, ya que su edad lo torna incapaz de comprender y decidir por sí mismo, por ello necesita de un tutor. El menor es un objeto de protección que precisa de un adulto capaz de definir su situación y ser responsable de su desenvolvimiento a futuro. La minoridad se construyó discursivamente a partir de la carencia, de la falta. Su posición social se define por la inscripción en un vínculo filial ilegítimo o deficitario que lo constituye en objeto de tutela estatal. Por ello no importa si el menor vaga por la calles, es maltratado por sus padres o comete un delito, todas estas situaciones habilitan la internación protectora que procura resocializarlo. Los jueces de menores cuyos discursos serán analizados en el capítulo 3 aplican una legislación, el decreto- ley 10.067 basada en este paradigma.

Paradigma de la protección integral de derechos: este paradigma surge denunciando las arbitrariedades que ha producido la aplicación del modelo anterior. Considera que el paternalismo y la vaguedad conceptual que habilitan la intervención estatal ha devenido históricamente en el control represivo de los niños y adolescentes de los sectores populares. En este nuevo paradigma se define al niño como sujeto de derechos que el estado debe garantizar y que operan como límites a una intervención. La palabra del niño como un elemento central en todas las actuaciones estatales que lo involucren y el parámetro del interés superior del niño como horizonte de toda política pública aparecen como los aspectos más visibles de este modelo, junto con el respeto por la identidad y la familia de origen. En el aspecto penal es fundamental el mandato de otorgar a los jóvenes en conflicto con la ley penal un debido proceso legal. Su consagración jurídica es la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989, que fue incorporada al derecho interno de la mayoría de los países latinoamericanos durante la década de los 90'. En Argentina tiene rango constitucional desde el año 1994.

El debate académico y jurídico suele estar hegemonizado por la contraposición entre estos dos modelos de relación entre el estado y la infancia en riesgo. En uno el niño como objeto y en el otro como sujeto. Sin dejar de señalar la trascendencia de avanzar en una reforma de la legislación de la infancia en procura del reconocimiento de sus derechos humanos, esta

investigación pretende inscribir este debate en el problema de la naturaleza interpretativa de las instituciones. ¿Qué imaginario colectivo puede ser movilizado en la actualidad a partir del concepto “interés superior del niño”? ¿Cuál es la imagen de “sujeto de derecho” presente en las instituciones de protección a la infancia en la actualidad? ¿Es correcto hablar de dos paradigmas<sup>4</sup> en pugna o se trataría de la contraposición entre un paradigma (el de la situación irregular) y un discurso que pretende convertirse en paradigma (el de la protección integral)?

Esta investigación al centrarse en el problema de cómo se construye un diagnóstico de riesgo al interior del Patronato de menores en la actualidad, pretende dar cuenta de las dimensiones culturales que adquiere esta lucha simbólica por la definición legítima. Por ello el riesgo es abordado como aquello que hay que indagar, describir, explicar. Si bien en la mayoría de los estudios sobre el tema y en las prácticas de las agencias estatales el riesgo es convocado como una realidad contundente que “esta afuera”, en este estudio interesa describir cómo se construye institucionalmente una situación de riesgo. Si el riesgo es definido como un conjunto de factores que determinan la posibilidad de que se produzca un daño o vulneración (Eroles:2001;63) ¿Quién selecciona los síntomas? ¿En base a qué creencias o teorías científicas? ¿Con qué métodos se calcula esta posibilidad? ¿La vulnerabilidad respecto a cuál estado ideal? A poco que se analizan las definiciones de riesgo, emerge este componente de indeterminación, esta apelación a un método objetivo de cálculo capaz de trazar el punto en el cual el riesgo surge o desaparece.

En esta investigación interesa posicionarse en la pregunta por el cómo los jueces de menores, designados por la ley para decir el riesgo de los niños, realizan sus evaluaciones y emiten sus definiciones. La relevancia otorgada a lo discursivo, en esta investigación, sin embargo no oscurece la centralidad del ámbito de las prácticas. Si estos diagnósticos precisan de técnicas, procedimientos, recursos humanos y materiales para calcular el riesgo, es necesario conocer la materialidad de estas instituciones. Para ello se recurre al análisis de expedientes judiciales con la finalidad de conocer la racionalidad de los procedimientos judiciales. Pero antes de iniciar este

---

<sup>4</sup> En la conceptualización de Thomas Kuhn, un paradigma refiere a la completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidos por los miembros de una comunidad dada (Kuhn:1975;269) Así cabría inferir que la existencia de dos paradigmas enfrentados como refiere la literatura señalada implicaría la existencia de dos comunidades separadas, con sus propios valores, técnicas, etc.

recorrido en el próximo apartado se describe brevemente al Patronato de Menores de la provincia de Buenos Aires.

### **III.-Presentación del Patronato de Menores.**

En este apartado se presenta brevemente al complejo institucional llamado Patronato de menores que constituye el objeto de estudio de esta investigación. El objetivo es proporcionar al lector una semblanza acerca del funcionamiento de este dispositivo, las instituciones que lo integran, las principales leyes que lo reglamentan y las características de las prestaciones que otorga en su carácter mixto de actividad jurisdiccional y productor de políticas sociales. Se presenta una descripción de aquellos mecanismos institucionales centrales para conocer el contexto en el cual se ejerce la protección de la infancia.

#### **El fuero de Menores de la provincia de Buenos Aires. El caso del Departamento Judicial La Plata.**

Resulta difícil entender el papel que actualmente desempeñan los tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires sin conocer la llamada Ley Agote del año 1919. Esta ley dictada en el ámbito nacional representa una temprana formulación de los principios rectores y las coordenadas ideológicas de la tutela de la infancia, en toda la Argentina. Una de las principales innovaciones que introduce en el derecho de familia es la modificación al Código Civil que habilita a la suspensión o la pérdida de la patria potestad en determinadas situaciones. En estos casos los niños quedaban bajo la tutela del Patronato de Menores, que se ejerce desde entonces por medio de los jueces nacionales o provinciales, con la concurrencia del ministerio público de menores. Éste último está integrado por los defensores públicos, asesores y fiscales.

A partir de la frase peligro material o moral y abandono material o moral se fija el amplio parámetro a partir del cual se habilita la disposición judicial de los menores de edad acusados o víctimas de delitos o portadores de alguna “irregularidad”. Esta disposición tiene el objetivo de proteger y tutelar a estos menores de edad, protección que habilita desde la decisión judicial de mantener a un niño con su familia, internarlo en una institución o dadas determinadas circunstancias disponer su adopción. Otro hito histórico a señalar es el año 1937 cuando se crean

los primeros tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires, y este hecho implica la aparición de una figura inédita en la tradición jurídico romano canónica, tradición caracterizada por numerosas limitaciones al poder judicial, que derivan en derechos y garantías del individuo frente al estado. Siguiendo la caracterización realizada por Ernesto Doménech (2001:23) las características de la institución juez de menores desde entonces y hasta la actualidad son las siguientes:

- El fuero de menores es unipersonal.
- Su competencia es en virtud de personas y no de actos. No importa que el menor esté involucrado en un problema penal o asistencial, todos estos asuntos son de la competencia del juez de menores.
- No hay partes que peticionen, aportes pruebas, no existe conflicto, por ello no hay fiscal ni defensor, sólo un asesor de menores que vela por el niño y la sociedad al mismo tiempo.
- No hay límites en la evaluación de la prueba, el criterio es la “convicción sincera” del juez.
- La posibilidad de recurrir a instancias de apelación de las decisiones de este juzgado son muy limitadas en la letra de la ley y en la práctica casi inexistentes.

Las distintas normas que se suceden en el tiempo no modifican este esquema institucional. Desde el año 1983 y hasta la actualidad el cuerpo normativo que regula la actividad del Patronato es el decreto ley 10.067, una de las últimas normas elaboradas por la dictadura militar que usurpó el poder en Argentina entre los años 1976 y 1983. Según los especialistas esta ley incorpora a las características arriba mencionadas una serie de tecnicismos que sin embargo no se traducen en una modificación de dos aspectos que serán centrales para el análisis a desarrollar en esta investigación: el carácter omnipotente del juez de menores y la ausencia de garantías procesales capaces de ampliar los derechos de los menores de edad, en su relación con este fuero.

Con la llegada de la democracia en diciembre de 1983 y en el marco de un proceso de demanda de respeto a los derechos humanos y de castigo institucional a sus violaciones, emerge en la

opinión pública el tema de los niños y adolescentes institucionalizados. Hacia los primeros años de la década del 90 y al calor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se conforma una corriente de opinión que aglutina organismos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, especialistas y funcionarios judiciales que abogan por un cambio normativo que se basa en dos grandes consignas:

-Reforma al proceso penal de menores para equiparar las garantías procesales de menores y adultos ante la sospecha de comisión de un delito.

-Desjudicializar la pobreza, terminar con el tratamiento por vía judicial de problemas sociales, que son incluidos en las llamadas causas “asistenciales”.

En el año 2000 y por un breve período de tiempo estuvo vigente en la provincia de Buenos Aires la ley 12.607, que fue presentada como la consagración de los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la legislación provincial. Inmediatamente el Ministerio Público representado por su máxima autoridad, el Procurador General, presenta una medida cautelar ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por la cual se pide la suspensión de la ley. Este pedido se fundamenta en la colisión entre esta ley y ciertas normas de la Constitución Nacional. Más que analizar los argumentos jurídicos esgrimidos en esta presentación (que se presentan en el Anexo 1) interesa destacar que el nudo problemático lo constituye el traspaso de competencias y facultades hasta el momento exclusivas del fuero de menores, (esto es del poder judicial) a la instancia administrativa dependiente del poder ejecutivo. Fundamentalmente el punto crucial es el retiro de las llamadas “causas asistenciales” de la órbita de la justicia para ser gestionadas como parte de las políticas sociales destinadas a la infancia en riesgo. Para finalizar esta breve cronología cabe afirmar que la ley aún continúa suspendida y sigue vigente el decreto ley 10.067. En el siguiente cuadro se presentan datos para una serie de años. El objetivo es situar al lector en la discusión acerca de lo que la nueva ley pretende retirar de la órbita judicial y pasar a la gestión de políticas sociales, típica competencia del poder ejecutivo y poder visualizar su relevancia cuantitativa. También poder dimensionar el número de niños y adolescentes que ingresan al sistema de menores.

| <b>Tipo de causas</b>                  | <b>2000</b>   | <b>2001</b>   | <b>2002</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Asistenciales</b>                   | 33.180        | 31.167        | 36.054        |
| <b>Civil</b>                           | 473           | 458           | 471           |
| <b>Penal</b>                           | 23.105        | 24.767        | 27.767        |
| <b>Víctima de delito</b>               | 16.040        | 15.908        | 16.961        |
| <b>Total de causas en la Provincia</b> | <b>72.798</b> | <b>72.300</b> | <b>81.285</b> |

Reelaboración propia en base a estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

De la lectura de este cuadro se desprende que las llamadas causas asistenciales representan aproximadamente entre el 44 y el 46 % de los casos que atienden los tribunales de menores entre los años 2000 y 2002. Estos datos que se presentan constituyen la realidad del fuero de menores de la provincia de Buenos Aires. Como ya se adelantó esta investigación constituye un estudio de caso del Departamento Judicial La Plata. El mismo está integrado por 5 jueces de menores, titulares de los 5 juzgados de menores. (ver en anexo jurisdicción de este Departamento).

#### **La Subsecretaría del Menor de la Provincia de Buenos Aires.**

Como se adelantó el Patronato de Menores se ejerce en forma conjunta por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Al momento de escribirse esta tesis el organismo técnico administrativo encargado de la regulación y financiamiento de las instituciones internativas (lugares donde los niños viven por disposición judicial) y otros programas destinados a los niños en riesgo es la Subsecretaría del Menor dependiente del Ministerio de Trabajo. Esta subsecretaría trabaja en forma coordinada con el fuero de menores, su tarea específica consiste en la supervisión de las instituciones en las cuales los niños y adolescentes son derivados judicialmente. Las instituciones de internación dependientes de esta subsecretaría se dividen entre asistenciales y penales. También existen programas alternativos para aquellos casos en que a partir del diagnóstico del juzgado de menores se puede evitar la internación y trabajar a partir de una modalidad alternativa que en líneas generales consiste en trabajar con la familia y el entorno comunitario las

soluciones a los problemas que motivaron la intervención judicial. Sin embargo, aproximadamente el 94 %<sup>5</sup> de los recursos de la Secretaría se ocupan en el sistema interativo.

De hecho se produce una clara separación institucional entre las prestaciones que el estado provincial otorga a los niños en situación de riesgo por medio de la ayuda a su familia (vía Ministerio de Familia, Acción Social) y de estas políticas destinadas a los niños institucionalizados. Emilio García Mendez (1991) ha denominado como políticas sociales supletorias a esta función del poder judicial que en su lectura hace una “ilusión de política social”. Al relevar los programas que ejecuta la Subsecretaría del Menor (Anexo 2) se puede concluir en su casi exclusiva dedicación a la atención de los niños y adolescentes que ingresan al fuero de menores y la subordinación de su tarea a los diagnósticos que se efectúan en esa instancia. Retomando la descripción del dispositivo institucional, ha quedado establecido que la intervención del fuero de menores es motivada por el conocimiento de la existencia de lo que a partir de aquí en adelante se denominará un menor en riesgo. Se presentaban tres situaciones prototípicas: la primera la existencia de un menor en conflicto con la ley penal, segundo un menor víctima de un delito y por último un menor de edad en situación riesgosa. Citemos el texto del decreto-ley 10.067, artículo 10:

Inciso a, cuando aparecieran como autores o partícipes de un hecho calificado por la ley como delito, falta o contravención menores de 18 años de edad.

Inciso b, cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de edad se hallare comprometida por actos de conducta, contravenciones o delitos de sus padres, tutores, guardadores o terceros; por infracciones a las disposiciones legales referentes a la instrucción y al trabajo; cuando por razones de orfandad o **CUALQUIER OTRA CAUSA** estuvieran material o moralmente abandonados o corrieren peligro de estarlo, para brindar protección y para sancionar, en su caso la inconducta de los padres, guardadores, tutores o terceros, conforme a las leyes que rigen en materia de minoridad y a las disposiciones de la presente.

Inciso c, para disponer de todas aquellas medidas que sean necesarias para otorgar certeza a los atributos de personalidad de los menores bajo su amparo, y lograr su más completa asistencia. En tal sentido podrán ordenar, entre otros actos, el discernimiento de tutela, la concepción de guarda, la inscripción de

---

<sup>5</sup> Según datos publicados en el libro La niñez ajusticiada de Daroqui y Guemureman, Editores Del Puerto, año 2001, página 128.

nacimiento, rectificación de partidas, obtención de documentos de identidad, habilitación de edad, autorización para viajar dentro o fuera del país, ingresar a los establecimientos educativos o religiosos o ejercer determinada actividad.

Inciso d, en las causas referentes al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; adopción y venia supletoria de los menores amparados por el juzgado.

Inciso e, cuando actos reiterados de inconducta de menores de edad, obliguen a sus padres, tutores o guardadores a recurrir a la autoridad para corregir, orientar y educar al menor.

Inciso f, en las contravenciones ejercidas por adultos en perjuicio de menores, con auxilio o en compañía de ellos.

De la lectura de este artículo se desprende la variedad de situaciones susceptibles de quedar subsumidas bajo la competencia de un juzgado de menores. De todas ellas, esta investigación investigará específicamente en la producción de las llamadas causas asistenciales. Respecto a las causas penales que se definen en el citado inciso a es necesario aclarar una serie de supuestos. Primero los menores de 18 años y en algunos casos de 16 no son imputables por delitos. Por ello, quedan exentos de ser juzgados según los parámetros del código penal pero no así de comparecer frente al juez de menores. En estos casos y siempre teniendo en cuenta el fin superior de la protección se puede disponer la internación en un instituto penal si se considera que esta en situación de riesgo. Así se desenvuelve un proceso institucional de etiquetamiento de un menor como “causa penal” a partir de un proceso jurisdiccional que no reúne las garantías mínimas de un “debido proceso”. A la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, esta circunstancia constituye una violación a normas de rango constitucional. No obstante, la lógica de la protección de los menores en riesgo produce en las prácticas institucionales el establecimientos de recurrentes estados de excepción en los derechos de los niños. De este modo se puede observar que también en las causas penales es central la construcción de un diagnóstico de riesgo para decidir el futuro del niño o adolescente.

Esta investigación se propone describir y analizar el proceso mediante el cual un juzgado de menores produce un diagnóstico de riesgo de un niño o adolescente y cómo esta situación riesgosa es luego gestionada por las instituciones de internación. Se trabajará específicamente con los casos citados en los incisos b, d y e. Si observamos la vaguedad y la aparición de frases como

“cualquier otra causa” o “actos de inconductas” se torna relevante la pregunta acerca de cómo son actualizados en los discursos de los jueces de menores estos términos.

## Capítulo 2:

### La emergencia del campo de protección a la niñez en riesgo : una reconstrucción histórica .

"El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) reitera: Su exhortación a los órganos responsables del gobierno provincial a la implementación urgente de la ley 12.607 "de Protección Integral de los Derechos del Niño y del Joven"

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires rige desde el año 1983 el decreto-ley 10.067/83 de la última dictadura militar: una de las normativas más violatorias de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del país, que parte de considerarlos como objetos, meros depositarios de las políticas represivas- asistenciales del gobierno de turno y castigadora de los más jóvenes y sus familias excluidos. El sistema creado por esta ley centraliza en la figura del juez de menores la solución a las cuestiones asistenciales, civiles y penales de las personas menores de edad y sus familias; negándoles el pleno respeto de sus derechos y garantías, e incluso pudiéndoles aplicar medidas restrictivas de derechos (como la internación) con el pretexto de supuesta "protección", sin posibilidad de defenderse o cuestionar tal decisión. Por ello, se ha tornado imperioso derogar el sistema institucional (judicial y administrativo) organizado por esta normativa, y crear un nuevo sistema para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia"

(Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños)

## **1. Genealogía del campo de protección de la niñez en riesgo.**

La inauguración del segundo capítulo con esta cita pretende ubicar la reconstrucción histórica que aquí se presenta en el marco del contexto conflictivo en el cual emerge el problema de investigación. Ya que es en el espacio definido por el conflicto por el sentido legítimo de la gestión estatal de la niñez en riesgo que pueden ser comprendidos los discursos y las prácticas que se analizarán a continuación. El imperativo lanzado por Foucault de estudiar al fenómeno del poder también a partir de las resistencias a ese poder, invitan a pensar al patronato a través del estudio de los intentos por criticarlo, por subvertirlo, por negarlo. A partir de la revelación de este punto de partida se trabajará en la descripción del contexto histórico en el cual emerge el patronato de menores como monopolio estatal en las primeras décadas del siglo XX.

Con esta finalidad se recurre al concepto de campo que acuña Pierre Bourdieu (1996;1990;2000) y que permite identificar la emergencia de un espacio social diferenciado estructurado en torno a la lucha por un capital común. En este segundo capítulo se postula la existencia del campo de la protección de la infancia como un conjunto de posiciones sociales recién a partir de la sanción de la ley de Patronato de Menores en el año 1919. La utilidad heurística de este concepto se revela en su capacidad para organizar los proyectos en pugna y los conflictos como el descrito en la cita que abre este capítulo. En las páginas que siguen se pretende reconstruir históricamente el derrotero seguido por el Patronato de Menores durante el siglo XX. Esta reconstrucción se realiza a partir de la identificación de tres niveles de análisis que se consideran cruciales para acceder a la comprensión del problema de investigación. Los tres niveles a partir de los cuales se realizará la reconstrucción histórica son los siguientes:

1.- Instituciones del Patronato de Menores. En este nivel se busca la descripción de los procesos institucionales encargados de la gestión de la protección a la infancia. Las variables a tener en cuenta serán:

- a.- Tecnologías de gestión.
- b.- Discursos.
- c.- Representaciones sociales.

2.- Políticas públicas. Aquí se busca la comprensión de los procesos de construcción del estado argentino en general y el de la provincia de Buenos Aires, en particular. Las variables a analizar en este nivel son:

- a.- Políticas sociales: magnitud, tipo, alcance.
- b.- Discursos hegemónicos sobre el rol de estado.

3.- Modelos de integración social. Con esta denominación se pretende captar el nivel macro. Se trata de registrar los distintos modelos socioeconómicos prevalecientes a nivel nacional a partir de las siguientes variables:

- a.- Régimen de acumulación de capital.
- b.- Discursos de la integración social.

Una vez identificados estos tres niveles de análisis el objetivo es, más que detenernos en una descripción minuciosa de cada uno de ellos, ponerlos a jugar en la historia del siglo XX en la Argentina con el propósito de trazar una matriz de relaciones desde la cual interpretar el papel del Patronato de menores en cada coyuntura histórica. Así, se identifican 3 coyunturas históricas seleccionadas en función de representar tres momentos claramente diferenciados entre sí y por ser una tipología histórica ampliamente aceptada por la literatura. Entonces los cortes que se realizarán son los siguientes:

- 1.- La construcción de la institucionalidad estatal (1880-1920).
- 2.- Consolidación del estado interventor. (1945-1970)
- 3.- Construcción de un modelo neoliberal (1976-2003).

#### 1.- La construcción de la institucionalidad estatal.

De esta manera se comenzará con la construcción de esta matriz de relaciones de fuerza a partir de la cual emerge en la Argentina del siglo XX *el Patronato de Menores* como un complejo institucional de protección-control de la infancia. Siguiendo la descripción realizada por Lucía Larrandart, (Larrandart:1991). debemos señalar que si bien ya en el derecho indiano existían

disposiciones relativas a la tutela de los nativos menores de edad y las mujeres solteras, la absorción total por parte del estado del monopolio del control social de la minoridad recién puede situarse en Argentina a fines de 1890 y comienzos del nuevo siglo. Este control social de los menores estuvo reservado hasta entonces a la familia y a la iglesia, a través de la religión y la enseñanza. A pesar de la centralidad histórica de la revolución de mayo de 1810 que declara la independencia de España, ésta (como la mayoría de las revoluciones) no provoca una ruptura radical y definitiva con el antiguo orden castellano-indiano, y la incipiente trama de dominación no logra constituirse como un estado centralizador sino hasta fines del siglo XIX.

Si se parte del análisis del nivel macro se trata de la construcción de un modelo económico agro-exportador basado en relaciones de producción capitalista que requiere una serie de tareas prioritarias: construir un mercado de tierras basado en el derecho de propiedad individual y un mercado de trabajo fundamentado en el salario. Es importante señalar que las causas estructurales en las cuales se sanciona legislativamente el control social de la minoridad en el año 1919 están ligada a las consecuencias de la crisis económico-política de 1890 y la llegada de las grandes olas inmigratorias. A los efectos de definir este espacio de relaciones de fuerza en el cual se emplaza el Patronato de Menores diremos que es en esa época en que la inmigración deje de ser planificada y regulada y que esta presencia cambia radicalmente el perfil de la población. Por ejemplo, entre los años 1895 y 1914 se duplica la población y el 58 % del total de habitantes son extranjeros. Estos grandes contingentes de recién llegados no logran ser incorporados al mercado de trabajo, agudizándose los conflictos sociales, la pobreza y el desempleo en el seno de una sociedad oligárquica en la cual el liberalismo económico se conjugaba con el autoritarismo político que practica una democracia fraudulenta y excluyente.

Brevemente diremos que el lema “gobernar es poblar” es la consigna con que los padres de la patria construyeron el mito de la nación desierta que recibe con los brazos abiertos a los trabajadores portadores de la civilización europea. Mito que se afianza en la exclusión de los nativos, de los criollos, los herederos de la barbarie, del legado colonial hispánico, del atraso. Y a estos poderes fácticos los inviste también el saber. En nombre del positivismo spenceriano se

justificó el genocidio que abrió la pampa a la economía agroexportadora.<sup>6</sup> El desencanto por la llegada de italianos y españoles y la ausencia de la cultura anglo-francesa provoca una nueva apelación al discurso del positivismo, esta vez en pleno auge del positivismo lombrosiano y del enfoque etiológico en una versión centrada en los factores ambientales, especialmente la familia. La familia inmigrante presentaba varios problemas en el imaginario de los sectores dominantes de la época, imaginarios que podemos rastrear en discursos, periódicos, proyectos de ley. Por un lado el desempleo causa pobreza, ésta hacinamiento y luego, degradación moral. La familia extranjera además de ser pobre, ésta desarraigada, existen diferencias de costumbres y hasta a veces de lengua entre padres e hijos. Los padres no son capaces de controlar a sus hijos, que deambulan por la calle, venden periódicos, delinquen, entran en contacto con bandas anarquistas.<sup>7</sup>

En este marco de un estado oligárquico, las políticas públicas estaban destinadas básicamente a la creación de infraestructura para la instalación de capital extranjero y las ya señaladas medidas para la creación de los mercados de tierra y de trabajo. Sin embargo destaca una ley dictada en esta época que tendrá gran importancia en el futuro para la creación de una legitimidad estatal: como es la Ley 1420 de Educación Primaria obligatoria del año 1884. A partir de esta medida la escuela pública argentina se convierte en la principal institución otorgadora de ciudadanía social. Sin embargo la amplia represión de la protesta social y la indiferencia estatal ante las paupérrimas condiciones de vida de los trabajadores sellan la impronta de las políticas sociales de este período. Es recién en 1919 cuando se sanciona la ley de creación del patronato de menores. Y a esta demarcación subyace la voluntad de inaugurar una nueva relación entre lo público y lo privado, entre la moral y el derecho. Esta frontera además de crear un nuevo órgano estatal encargado de la reciente potestad estatal (cuidar a los niños en peligro y castigar a los infractores) esta inaugurando un nuevo sentido acerca de los deberes y derechos de los padres hacia los hijos. Al tiempo que se constituye un nuevo límite avanzando sobre la patria potestad, se interpelan una

---

<sup>6</sup> Las llamadas “campanas al desierto” posibilitaron el despliegue de las tierras aptas para la actividad agropecuaria, mediante el exterminio de la población originaria.

<sup>7</sup> Con la etiqueta de “bandas anarquistas” se nomina bajo el signo de la criminalización a la fuerte presencia del anarquismo en la incipiente organización del movimiento obrero argentino, que desde las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX dio fisonomía a las huelgas, protestas y que aparecen como una de las consecuencias no deseadas de la civilización europea

serie de prácticas y discursos que se creían amenazantes de cierto proyecto de sociedad cuyo garante era el estado. La situación de peligro o de riesgo de los niños puede ser traducida en el riesgo para el orden social que se estaba construyendo. Este gobierno de los riesgos puede ser definido a partir de un movimiento de incorporación al espacio público de situaciones pertenecientes al mundo privado. Se construía un discurso público destinado a intervenir en la vida privada a partir de la cual se fundaba una nación.

Aquí se pretende introducir una inflexión en esta historia que se viene narrando de centralización del poder estatal de intervención en las vidas de las familias. El objetivo es difuminar la imagen de un antes y un después a partir de la creación del patronato de menores, a la manera de un parteaguas histórico. El poder del estado se construyó a expensas de otros poderes, pero más que una expropiación violenta la nueva esfera de lo público avanza lentamente apoyándose en unos para ganar espacio frente a otros y así sucesivamente. La capacidad de ejercer el monopolio de la violencia en todo el territorio, es una tarea excesiva para un estado joven que necesita de la complicidad de “las ruinas simbólicas del pasado” en palabras de Castoriadis para apuntalar el edificio de su legitimidad. Así, hasta la creación del patronato y el establecimiento de la obligatoriedad de la escuela pública el poder de controlar y castigar estaba exclusivamente en manos de la Iglesia y los jefes de familia, la confusión entre poderes públicos y privados, sujetaba a los menores y las mujeres respectivamente a sus padres y maridos. En el caso de los sectores populares, además la ley era impuesta por el estanciero o patrón o por las fuerzas milicianas. En el caso de los indígenas que sobrevivieron a las matanzas, tras el arrebato de sus territorios, eran entregados a las familias de la ciudad, posteriormente la Sociedad Beneficencia, (institución privada que se puede considerar un antecedente del patronato de menores) se encarga de esta “distribución”.

“Llegados el día y la hora indicados, se colocaba una mesa, generalmente en el atrio de una iglesia o en cualquier otro lugar análogo y en ella eran colocados en fila los individuos a repartir. Ubicados los indígenas comenzaban a acercarse poco a poco los interesados, que luego de elegir, se llevaban consigo alguno de esos individuos”( Cansanello:2002; 134)

Esta descripción remite a la convivencia de discursos y prácticas contradictorios, por un lado se había establecido un código penal<sup>8</sup> bastante adecuado a los principios liberales de la época y desde décadas se había establecido la libertad de vientres. Sin embargo todas estas libertades y derechos no entraban en colisión con la facultad que se reservaba a los amos, patrones y padres de familia de castigar a sirvientes, criados, aprendices y menores. Por estas razones es preciso desandar el vínculo entre el discurso liberal, la persistencia de estos poderes cuasi-patrimoniales y las instituciones de protección-control de estos cuerpos proscriptos

( niños, mujeres, indios, nómades) que deben ser sujetados, incluidos en el nuevo orden social que se está construyendo. Cuerpos que son uniformados a partir de esta protección que los niega en tanto partícipes de universos culturales diversos y los incluye a partir de una clasificación como seres inferiores, necesitados de tutela. Inclusión como subalternos que es capaz de aplacar la peligrosidad de sus existencias desancladas. Siguiendo la línea de trabajo que desarrolla Foucault se trataría de describir como las disciplinas reales y corporales se han convertido en el subsuelo de las libertades formales y jurídicas.

Una vez hecha esta aclaración, como se dijo en la introducción de este capítulo, se sostiene que a partir de la creación del Patronato de Menores emerge en el espacio social un campo diferenciado como es el de la protección de la infancia en riesgo. La existencia de un campo remite a la identificación de un sistema de relaciones sociales organizadas en torno a una lucha por el capital en juego en el mismo. En esta línea se verifica que a partir de la centralización de las prácticas de beneficencia privadas y religiosas y de su articulación bajo una lógica estatal se construye este campo que sin embargo sólo con el correr de los años, podrá definirse en su especificidad. En este momento inicial se mezclan los discursos caritativos de protección a los pobres y huérfanos con un discurso positivista de tutela de seres inferiores y/o enfermos. Sin embargo se puede identificar como hegemónico al discurso de alarma social en que se hipertrofia el peligro de la delincuencia y dentro de ésta a la infantil -juvenil por sí misma, pero principalmente por las posibles consecuencias futuras. La aparición de este campo de protección a la infancia tiene la particularidad de revestir la protección de los niños del saber- poder que reúne el capital de la

---

<sup>8</sup> El primer Código Penal se sanciona en 1887 antes el control social actuaba a través del Código Rural y de los edictos policiales cuestión que cambia cuando la ciudad se transforma con la incorporación masiva de inmigrantes.

ciencia y el estado y en función de ellos adquiere lo que Bourdieu denomina “el efecto razón de estado”.

“El efecto más típico de la razón de estado es el efecto de codificación que actúa en operaciones tan simples como el otorgamiento de un certificado: un experto, doctor, jurista, es alguien que está mandado para producir un punto de vista que es reconocido como trascendente en relación con los puntos de vista singulares, bajo la forma de certificados de enfermedad, de aptitud o ineptitud, un punto de vista que confiere derechos universalmente reconocidos al poseedor del certificado.” (Bourdieu: ;139)

Entonces sin desconocer las continuidades e inercias que atraviesan la vida social es a partir del otorgamiento a ciertos funcionarios del poder oficial de proteger a los niños en riesgo que situamos la constitución del campo de protección a la infancia como un espacio regido por sus propias leyes. La legalización de este capital simbólico lo sustrae de la relatividad de las opiniones y lo configura como un valor indiscutible, universal. Se trata de una etapa de incipiente construcción institucional, en la cual no quedan suficientemente delimitadas las barreras entre caridad y políticas sociales, donde la beneficencia privada y la religiosa dotan de significaciones e imágenes a unas prácticas que intentarán ser colonizadas por el lenguaje de la ciencia. La gestión de la minoridad más que concentrarse en el castigo, se desvelaba por la educación. En el marco de esta preocupación debe explicarse la necesidad de nuevos saberes que informan al juez de menores de las características del menor y de su familia. Saberes que imponen su propia lógica al aparato estatal. Aparece el informe ambiental, encargado primero a inspectores cuyo reclutamiento se confiaba a la Sociedad de Beneficencia y luego a los asistentes sociales profesionales. También el saber médico es incluido en los mecanismos institucionales y será uno de los pilares del diagnóstico y tratamiento del menor.

Se asiste al predominio de las macroinstituciones, con grandes pabellones y cientos de niños alojados bajo la supervisión de celadores, junto a los saberes científicos que observan y dirigen la resocialización. Lo cierto es que este ejercicio de la protección de los menores está cargado de itinerarios compartidos, de relevos, de superposición de miradas y autoridades. La criminología positivista, el modelo médico como matriz epistemológica común a varias prácticas profesionales, la pedagogía y la joven disciplina del trabajo social. La lógica de la observación,

clasificación, y tratamiento organizaba discursivamente las cotidianidades de las instituciones de encierro. La conjunción del positivismo con la lógica de la alarma social en las instituciones del Patronato de menores se insertaba en una trama de dominación en la cual las políticas sociales combinaban la integración al mercado de los sectores populares con la exclusión política y la criminalización de la protesta social. En este marco las prácticas del Patronato de Menores garantizan represivamente el control de esos niños y adolescentes que deben integrarse como sujetos útiles a una nación en construcción. La gestión estatal de la niñez en riesgo a partir de los discursos y prácticas de este nuevo campo operan a partir de la transformación de preocupaciones privadas en temas públicos.

## 2.- El estado interventor (1945-1970)

Si nos situamos nuevamente en el nivel de análisis de los modelos de integración social es necesario decir que la Argentina asiste al pasaje desde un modelo agrario-exportador de características oligárquicas a un régimen de acumulación basado en la sustitución de importaciones.<sup>9</sup> El estado tiene un activo rol tanto en materia de inversiones productivas y de infraestructura como en la expansión de los servicios colectivos. Así, el discurso de la “alianza de clases” y la entronización del estado como el garante de un orden social en el cual se amplían los sectores sociales integrados al mercado laboral pero también en la esfera política-social. En éste último se pasa desde un régimen oligárquico a una democracia de masas mediante la efectivización del sufragio obligatorio, secreto y universal. En un proceso que requeriría más de una tesis para ser descrito con justicia, el estado argentino, en tono con el signo de los tiempos, expande su lógica y sella inolvidables alianzas con el mundo del trabajo, con el capital y con los militares. Se trata del estado interventor que expande la seguridad social, regula el mercado de trabajo e instala un nuevo discurso de la integración social.

El estado argentino de fines del siglo XIX interpelaba a construir una civilización mediante la instalación de los pilares de una economía capitalista y buscaba la integración mediante la homogeneización de la población: fijar a los nómades, eliminar a los rebeldes, alfabetizar a los

---

<sup>9</sup> Este modelo tiene una serie de variantes. Siguiendo a Grassi, Hintze y Neufeld (1994;13) se trata del modelo peronista del 45 al 55; luego el modelo desarrollista de la década del 60'; y la versión autoritaria del Gobierno de Onganía 1966-1970.

inmigrantes. El nuevo discurso de la integración incluye a través del imaginario de un gran pacto social donde al amparo del estado, cada quien tiene su lugar y será recompensado salvo que pretenda salirse de él o cuestionarlo. Si hubiera que condensar en una única frase a este imaginario de integración social, seguramente sería nombrado como “el imaginario de la movilidad social ascendente”. Imaginario experimentado subjetivamente por generaciones y expresión de un anhelo colectivo que reforzaba el orden existente. Sin embargo,( y retomando el mandato de descubrir las grietas de la dominación), es al amparo de este imaginario que entre las décadas del 60’ y de los 70’ se gestan las confrontaciones más agudas a la lógica sistémica, confrontaciones portadoras de otro poderoso imaginario como fue el de la revolución social.

En el nivel de las políticas públicas y en correlato con lo señalado en el nivel anterior la expansión de las políticas sociales contrasta con la indiferencia estatal señalada para el período anterior. Se extienden las prestaciones estatales pero es importante no confundir este proceso con el desarrollo de los estados de Bienestar de tipo europeo: en Argentina la expansión de los derechos sociales está ligada a la constitución de la categoría de trabajadores formales (Grassi y otros:1994;15). Entonces la universalización de las políticas sociales que es un rasgo distintivo de este período se debe más a la amplitud de la categoría de trabajadores formales que a la ampliación de la ciudadanía. Así existe una superposición entre las categorías ciudadano y trabajador, superposición que trae como consecuencia el carácter residual de las prestaciones de tipo asistencial que se concebían para aquellos incapaces de integrarse al mundo del trabajo por incapacidades físicas o mentales o por desinterés en el trabajo. En este momento histórico de crecimiento del mercado de trabajo, el sujeto asistido era un “sujeto vergonzante” (Grassi y otros:1994;16). Una de las características que mejor pueden definir a las políticas de asistencia social de este período, y como se verá más adelante también de la actualidad, es su no exigibilidad jurídica. Si los derechos sociales del trabajo como jubilaciones, asignaciones familiares, etc. pueden ser reclamados jurídicamente, las “ayudas” subsidios, prestaciones en general de la asistencia social no. Aparecen como una “gracia” estatal al pobre que no se constituye en derecho.

Respecto al Patronato de Menores, citando a García Mendez (García Mendez:1991;14) se pueden establecer desde la emergencia de esta institución hasta aproximadamente 1960 dos grandes teorías respecto al tratamiento de la niñez. Por un lado las referidas visiones bioantropológicas, en las cuales la separación del niño de su ambiente y la medicalización aparecen como las estrategias de intervención. Hacia fines de los 40' la crisis de este positivismo, cede su lugar privilegiado a las explicaciones funcionalistas que privilegian las explicaciones estructurales en los sujetos. Como señala el autor ambas corrientes, devienen en la persistencias de las mismas tecnologías en la gestión de estas infancias riesgosas:

“ Ambas teorías asumen un carácter explícitamente etiológico y correccionalista. Es decir se presentan como enfoques diversos para explicar las causas y solucionar los efectos de las múltiples formas que asume la conducta desviada de los menores. La institucionalización segregadora como mecanismo incuestionable de las tareas de defensa de la sociedad y protección del menor abandonado-delincuente” (García Mendez:1991;15)

En el marco de las grandes transformaciones sociales que ocurrían en la Argentina, las instituciones encargadas de la gestión de la infancia en riesgo, como en general toda la asistencia social, tenía un carácter residual. Estas instituciones no sufren cambios institucionales sustantivos, el carácter progresista que se vislumbra en las políticas sociales ligadas al trabajo, se dedica más a la prevención generalizada a través del fortalecimiento de la salud, recreación, educación. En la provincia de Buenos Aires en el año 1937 se crean los primeros tribunales de menores. El juez de menores aparece como un evaluador sin límites legales tanto en la consideración de las pruebas como en la posibilidad de recusar sus decisiones. ¿Cuál es la función del juez de menores en esta nueva etapa? Si bien este estado tiene un rostro más amable con los sectores populares que el modelo anterior, es indudable que se profundiza y extiende el control sobre la vida cotidiana. Sin embargo, a nivel del funcionamiento concreto de las instituciones, es de destacar la introducción del trabajo con la familia y el entorno comunitario de los niños en el ámbito proteccional. El énfasis de la política social pasa por la escuela, la escuela-hogar y el barrio, no por los internados. El juzgado de menores conserva intacto su poder pero dada la profundización de las políticas sociales, su función adquiere carácter residual.

Las instituciones de internación tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el territorio argentino son pensadas como escuelas de trabajo y de ciudadanía, por ello entre sus pasillos se requiere la presencia del médico, del pedagogo, del visitador social. Un hito capaz de diferenciar este período del anterior régimen oligárquico lo constituye la intervención de la Sociedad de Beneficencia (de carácter privado) por la Fundación Eva Perón. Fundación que será desarmada por la llamada “Revolución Libertadora” de 1955 que derroca al gobierno de Juan Perón. En este período surge el Consejo Nacional de Protección del Menor y la Familia que intenta otorgar a todas las instituciones un carácter pedagógico. En el año 1967 bajo el gobierno de Onganía nuevamente (como en los gobiernos peronistas) el eje pasa a ser la prevención inespecífica (Eroles:2001;32) más que la prácticas internativas.

En síntesis se puede caracterizar a este período como la profundización de este movimiento de socialización de los riesgos y de asunción estatal de la gestión de la niñez en riesgo. El estado argentino expande su ámbito de intervención y gestiona los riesgos, del trabajo, de la vejez, de la infancia. Se trata de la construcción y gestión de un nuevo significado de lo público.

### 3.- La construcción de un orden neoliberal.

Como se enunció anteriormente, el desenvolvimiento del estado interventor, gestiona un mejoramiento general de las condiciones de vida de los sectores populares, y la categoría “menor” se convierte en residual. Entre los últimos años de la década de 1960 y mediados de 1970 se produce un cambio de signo en la estrategia de dominación que consolida un control exclusivamente represivo de la población apuntalado en el terrorismo de estado. El control social se generaliza hacia sectores sociales hasta entonces no seleccionados y la tecnología del patronato de menores es rearticulada en esta estrategia general de represión sobre la población. Al nivel del modelo de integración social es importante realizar una serie de distinciones.

En primer lugar es necesario marcar dos coyunturas: la dictadura militar que se extiende entre 1976 y 1983 que despliega un terrorismo de estado cuyo efecto de disciplinamiento social y eliminación de las organizaciones políticas y sociales se arrastra hasta la actualidad. Por el contrario, la reapertura democrática de 1983 inaugura un período de reconfiguración institucional, participación ciudadana y articulación de nuevas demandas políticas y sociales.

Sin embargo, en lo que respecta a las características del régimen de acumulación es posible hallar una línea de continuidad que se inicia en 1976 con el intento por dismantelar el aparato productivo orientado a la producción mercado internista, pero que se consolida recién hacia 1990 con la llamada “apertura al mercado externo”. Este proceso de apertura, tiene como consecuencia la emergencia de un nuevo régimen de acumulación basado en las exportaciones de materias primas, la centralidad otorgada al mercado financiero, la apertura de las importaciones. El estado se deshace de sus empresas y de aquellos entes típicos del modelo de sustitución de importaciones. Uno de los ejes alrededor de los cuales se articulan todas estas medidas es la llamada “convertibilidad”, política cambiaria a partir de la cual Argentina se convierte en un mercado atractivo para los inversores extranjeros. Este trabajo no ofrece la posibilidad de un análisis de los efectos profundos de la transformación del estado argentino en la década de los 90’. Pero baste decir que se pasa de una economía orientada “hacia adentro” con graves problemas fiscales a un modelo de apertura total, posibilitado por el desguace de las capacidades estatales capaces de supervisar (ya no de intervenir) y de imprimir una lógica a la economía. Privatizaciones en áreas claves para la supervivencia del sistema, y una desvinculación respecto á compromisos históricamente asumidos por el estado, constituyen el preludio de la famosa crisis argentina del año 2001.

Se produce un pasaje desde la anterior “alianza de clases” a un modelo de acumulación en el cual no se incluyen los altos niveles de empleo del modelo anterior ni el mantenimiento de los derechos sociales conquistados en las luchas obreras del pasado. A los fines de presentar algunas cifras es ilustrativo que mientras en el censo de 1970 se contabilizaban un 13 % de familias con necesidades básicas insatisfechas, a comienzos del año 2000 este porcentaje había subido a más del 30 % de la población.(Eroles: 2001;87). Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para diciembre del 2003, señalan que el 48 % de la población argentina es pobre.

En el rubro de las políticas sociales si el período anterior había sido de socialización de los riesgos, claramente los años 90’ deben ser descritos en el marco de una gubernamentalidad que tiende a la privatización de los riesgos. Así, un discurso de la conveniencia de la competencia para asegurar la calidad de los bienes y servicios nacionales se traduce en el corrimiento del

estado. Se construye en el discurso público una serie de imágenes que asocian negativamente las políticas sociales de alcance universal (básicamente las asociadas al mundo del trabajo) con la ineficacia, la corrupción, la crisis económica. Si los derechos sociales estaban asociados a la condición de trabajo, el retiro del estado de su rol de garante del empleo impacta en el acceso de amplios sectores de la población a estos derechos.

Se verifica un proceso de individualización de la fuerza de trabajo, es a partir del rendimiento personal en el mercado que se definen los ganadores y perdedores. Este nuevo discurso de la integración social no tiene las potencialidades de inclusión de su antecesor. Si bien el estado populista proponía una integración que homogeneizaba y que escondía las asimetrías estructurales (Grassi:1994;20) este nuevo relato no prescribe una instancia colectiva (pública) de inclusión sino que la relega a las posibilidades individuales de inserción en el mercado. En ese sentido el otro gran hecho que interesa destacar es el avance de una nueva tecnología de gestión de la vida social, de privatización del riesgo que crece a las sombras de los organismos internacionales de crédito y que penetra el discurso y las prácticas de las ciencias sociales, aún muchas veces de aquellos que deploran el neoliberalismo. En este punto se describen con más detalle las innovaciones institucionales ya que constituyen el marco en el cual se estructuran los procesos que serán analizados en esta tesis.

Interesa destacar la contundencia y radicalidad de este cambio de tecnología de gestión de lo social. Uno de los axiomas de este nuevo modelo de intervención es la erradicación de las políticas universales, primero por urgencias presupuestarias pero concebidas en sí mismas como una virtud por una economía política de la maximización de la utilidad. Sólo el más pobre entre los pobres debe acceder a una prestación social que asignada a un “pobre no tan pobre” puede fomentar su dependencia ante el estado y, peor aún, disminuir la competitividad. Pero claro que el descubrimiento del “campeón” entre los pobres demanda ciertos saberes, que las ciencias sociales están en inmejorables condiciones para ofertar. Se asiste a un discurso de la “necesidad” de hacer más eficiente el gasto público y hasta las intenciones más progresistas se ven convocadas alrededor de la “mejora del gasto social”.

Otra tecnología que se incorpora a las políticas sociales, es la gestión participativa. En ella, abandonando el paternalismo característico de las instituciones estatales se consulta a los beneficiarios y en muchos casos se les delega una serie de tareas, en la lógica de la descentralización y la participación. Este es quizás uno de los mejores ejemplos de la refuncionalización de ciertas prácticas progresistas, en una estrategia general de dominación orientada en este peculiar momento histórico a contener una situación social explosiva e inédita para la Argentina del siglo XX. Si es incuestionable la legitimidad de la crítica al paternalismo presente en la gestión participativa, su aplicación en un contexto de creciente pobreza y vulnerabilidad social, se confunde con una delegación de tareas por parte del estado en las organizaciones de la “sociedad civil” y en los propios beneficiarios.

La focalización de las políticas públicas aparece como otra de las grandes ideas fuerza de esta nueva tecnología. Focalización que en un caso como el argentino ha sido valorada como un remedio eficaz contra dos grandes males, por un lado la necesidad de eficiencia en el gasto público y al mismo tiempo para esquivar los clientelismos. Sólo una mirada técnica puede aprobar a quien le corresponde ser asistido por el estado. Intentando relacionar este nivel de las políticas sociales con el nivel macro de los modelos de integración social se vuelve necesario pensar a las políticas sociales en sintonía con los procesos de globalización:

“ Los programas sociales son la contracara de la globalización. Mientras ésta promete un consumo desterritorializado, aquellos representan una vuelta a la localización, al recorte de poblaciones homogéneas y ancladas territorialmente. Los programas sociales van al encuentro de aquellos que no pueden despegar del “lugar” (Duschatzky:2000;16)

Entonces, es posible entender como una consecuencia de la inclusión de Argentina como un país periférico y dependiente en la globalización capitalista el reemplazo de las políticas universalistas (con las limitaciones ya señaladas) por los programas sociales focalizados. La vuelta a la territorialidad, fija a los sujetos en sus barrios ya que el desempleo los desafilia de otros círculos de pertenencia. Estas consecuencias del aumento del desempleo en la década del 90' a cifras inéditas ( rondando el 20 %) y de la implementación de las políticas focalizadas en tomo a los

hogares, provoca sin embargo consecuencias no previstas. Por un lado, una refuncionalización de la lazos clientelares y por otro el surgimiento de movimientos de trabajadores desocupados (los piqueteros) y de toda una red de economía solidaria en torno al territorio. Cuando se habla de territorialización de la política se alude al descentramiento de la política de ejes como el sindicato o el partido nacional y al proceso de rearticulación entorno a la pertenencia barrial.

Al margen de estas resistencias, de estas luchas contradictorias entre sí y que laboran en distintos sentidos ( por ejemplo el clientelismo y las organizaciones autónomas) si se tiene que caracterizar a esta nueva gestión de la población constituida en y por el predominio de las políticas neoliberales, se la podría definir con Nicolás Rose como una “privatización del riesgo” (Rose:1996) en la cual cada individuo es convocado a gestionar su propia seguridad social y el estado sólo acudiría ante aquellas situaciones de riesgo calificadas por los expertos como tales. Esta afirmación se apoya en una serie de supuestos que se pasa a explicitar. Primero que los niveles de riesgo socialmente tolerados son una construcción social y que las tecnologías de intervención neoliberales promueven un discurso tendiente a la aceptación de la absorción individual de los riesgos. Si se ubicaba a finales del siglo XIX un proceso de apropiación estatal de poderes desparramados entre corporaciones y familias, este fin de siglo presencia una devolución coactiva de facultades del estado hacia los individuos. Cada quien debe gestionarse su vejez, su salud, se promueve la toma de riesgos como un espacio de libertad y aventura, frente a la monótona seguridad social del estado. Claro que este discurso no es apropiado sin más por los sectores populares, que sin embargo son conducidos a fijar sus cuerpos en las políticas focalizadas por la brutalidad del desempleo, los recortes salariales, el deterioro de la seguridad social en general. Antes de aterrizar nuevamente al nivel de análisis del campo de la gestión de la infancia en riesgo, quisiera traer una metáfora, que patentiza todo lo que hasta aquí se ha estado diciendo:

“Los programas sociales, en el mejor de los casos, son sogas de auxilio, jamás pasaportes a las oportunidades sociales, económicas y culturales que ofrece-aunque más no sea a la visibilidad- el nuevo orden mundial” (Duschatzky:2000;16)

Así, se trata de intentar pensar en el imaginario de integración social que se despliega en esta nueva tecnología. Esta imagen pareciera enfocar un espacio de consumo ilimitado y autodeterminación personal para aquellos capaces de “entrar”, los mejores, los más competitivos. También destina un espacio para los que no llegan a este ideal, los cuales deben ser provistos de capital social, para que algún día este espacio sea lo más chico posible. Más que una imagen de la integración, es un imaginario de la exclusión transitoria. Mientras tanto el masivo proceso de empobrecimiento y deterioro de los servicios públicos empuja a más niños y adolescentes a las categorías sociales capaces de ser captadas por las agencias de control social selectivo, dentro de las cuales destaca el Patronato de Menores.

Ha llegado el momento de describir el impacto de lo reseñado para este período en el nivel más específico del campo de protección a la niñez en riesgo. Dada la centralidad que tiene este punto para el problema de investigación se dedicará un apartado especial a analizar este proceso.

## **2.2.- El campo de protección a la infancia en riesgo en la actualidad.**

La década de los 80' y luego la de los 90' constituyen períodos de innovaciones en la gestión de la infancia en riesgo al mismo tiempo que de intensas luchas por el capital simbólico en este campo. Sin desconocer la pluralidad de hechos que ocurren en estas décadas, en este apartado interesa enfocar la atención en tres procesos:

1.- La construcción de una importante corriente de opinión encaminada a la crítica y transformación de las instituciones del Patronato de Menores. En el marco de los movimientos sociales que reaparecen en la escena pública a partir de la reapertura democrática de 1983 las demandas por el respeto de los derechos humanos alcanzan a la problemática de los niños institucionalizados.

2.- El otro fenómeno que impacta en las instituciones de menores es la incorporación de ciertas modalidades de gestión capaces de flexibilizar el carácter represivo de la tecnología de “encierro-protector” de los niños. En este aspecto han influido, esto se enuncia a la manera de hipótesis ya

que es un aspecto poco documentado en la bibliografía, tanto las organizaciones no gubernamentales con su discurso y prácticas alternativas como la introducción de las anteriormente señaladas tecnologías neoliberales en las políticas sociales.

3.- La aparición en la escena pública de arduos combates por el capital simbólico en el campo de protección a la infancia en riesgo. Se evidencia una disputa por la clasificación legítima de lo que es competencia del poder judicial y en última instancia por el sentido de la protección estatal a la infancia que se expresa tanto en y por los canales previstos como sentencias, acordadas, fallos de la Suprema Corte de Justicia como por los medios masivos de comunicación, protestas callejeras, manifestaciones.

Estos tres procesos deben ser interpretados a la luz de los profundos cambios ocurridos en este período histórico. Fundamentalmente interesa destacar el impresionante aumento y profundización de las pobreza, fenómeno que es imposible desvincular del aumento de las causas que llegan a los tribunales de menores. Además otro hecho que interesa enfatizar es la visibilidad pública que adquieren los delitos protagonizados por los menores de edad. Así se combinan un aumento en el número de los delitos de menores con un tratamiento por parte de los medios de comunicación que coloca en primer plano el tema de la delincuencia juvenil. El hecho que destacan los medios es la aparición de una violencia inusitada en los delitos provocada por la inmadurez de estos niños y jóvenes. Así, los medios construyen agendas públicas sobre el delito de los menores a partir de estereotipos del joven pobre, drogadicto, marginal sobre el cual se monta un discurso de la “mano dura”. Este discurso vincula el aumento del delito de menores con la inimputabilidad de los menores de 18 años y procura elevar la edad de imputabilidad, aumentar las penas para ciertos delitos, en suma ampliar el control represivo sobre los menores de edad. En el señalado contexto de empobrecimiento y exclusión social creciente, este discurso construye un imaginario de la inseguridad en el cual el “otro” temido tiene rostro de joven, pobre y delincuente. En esta conflictiva trama debe situarse la tematización pública del tratamiento a la niñez “en riesgo” y el debate en torno a los derechos de los niños y adolescentes.

### **1.- El movimiento social por los derechos de los niños.**

En el año 1987 algunos representantes de organizaciones no gubernamentales se aglutinan en el conurbano bonaerense con el objeto de aunar esfuerzos en la construcción de un movimiento capaz de instalar en la agenda pública el problema de la infancia. Fundamentalmente se trata de dirigentes de organizaciones que venían trabajando con los llamados “niños de la calle” a partir de modalidades alternativas a las instituciones estatales. Particularmente a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 1989, estas organizaciones sociales empiezan a construir un discurso crítico de la llamada “judicialización de la pobreza” que operaría a partir del tratamiento vía juzgados de menores de las causas sociales que explican la presencia de los niños en las calles y del estado de “abandono material o moral”. Pero además de esta demanda específica, este discurso se dirige fundamentalmente a la crítica de un “modelo de país” que provocaba pobreza, desempleo y destruía instituciones capaces de garantizar cierta equidad social como la escuela pública. El movimiento nacional de los Chicos del Pueblo, centra su discurso en dos grandes ejes. El principal énfasis está puesto en los procesos de exclusión social que provoca la llegada de cada vez más niños a las instituciones de control social como el Patronato de menores. Una consigna que levanta el movimiento afirma que sin un cambio en el proyecto de país no puede haber solución al problema de la infancia institucionalizada. Por ello también participan en organizaciones como centrales sindicales <sup>10</sup> y asociaciones intermedias.

El segundo foco es el reclamo por mayores garantías jurídicas y respeto de los derechos humanos que se cristaliza en la defensa y difusión de la Convención Internacional de los derechos del Niño y en la provincia de Buenos Aires en la lucha por derogar el decreto-ley 10.067. En este punto participan públicamente con organismos de derechos humanos, académicos y organismos internacionales como la UNICEF.

Sus dirigentes más visibles, el sociólogo Alberto Morlacheti y el sacerdote Carlos Cajade, son al mismo tiempo directores de hogares en los cuales se albergan a niños y adolescentes. Estas instituciones se caracterizan por un intento de democratizar las relaciones entre niños y adultos y

---

<sup>10</sup> El Movimiento de los chicos del Pueblo participa en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y ha participado en el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO). Además tiene una vinculación fluida con la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA).

romper con el carácter estigmatizante y represivo de las instituciones de menores. La presencia en el espacio público del Movimiento de los Chicos del Pueblo, a través de marchas, recitales, revistas, conferencias ha instalado el tema de la infancia pobre e institucionalizada en la opinión pública. Idéntico efecto ha tenido la difusión de la Convención de los Derechos del Niño y la aparición de Defensorías de los Derechos del Niño al amparo de instituciones como Colegios de Abogados, Universidades y asociaciones de la sociedad civil.

## **2.- La transformaciones en la tecnología de “encierro-protector”.**

Se podría afirmar que la gestión de la infancia en riesgo tal como se practica actualmente en la provincia de Buenos Aires combina, por un lado, la permanencia de la autoridad omnipotente del juez de menores en la clasificación de un niño como “en riesgo” con la introducción de nuevos criterios de abordaje. Uno de los trabajos que se ocupan de la materia (Doménech:2000) documenta la emergencia de una nueva tecnología de gestión de los casos por parte de los juzgados de menores de la provincia de Buenos Aires. Básicamente se trata de la incorporación de un criterio de trabajo que incluye a la comunidad y a la familia del niño o adolescente como una opción preferible a la internación. Esta práctica que emerge tímidamente entre los juzgados del fuero, es apropiada a partir del contacto con organizaciones no gubernamentales y de la incorporación en los equipos técnicos de los juzgados de profesionales como asistentes sociales o psicólogos que han sido formados en un discurso crítico hacia las instituciones totales.

Sin embargo, es en el organismo técnico administrativo dependiente del Poder Ejecutivo donde es posible encontrar las mayores innovaciones. Por ejemplo se identifican en forma preliminar (el análisis documental y de los discursos pretende aportar información novedosa en este sentido) dos grandes transformaciones en la gestión de los niños en riesgo. Por un lado el desmantelamiento de las macroinstituciones estatales y su transformación en instituciones que imitan el funcionamiento de un casa, con una población máxima de veinte niños. Este cambio, es el producto por un lado de las críticas a los modelos de instituciones totales y a la comparación con el funcionamiento de pequeños hogares de las O.N.G.s, que eran capaces de otorgar una mejor calidad de vida a los niños y adolescentes. Constituye por una parte una reapropiación estatal de una modalidad de trabajo surgida en la sociedad civil.

Por otro lado, y a tono con toda la política social nacional (y latinoamericana) se incorporan a los llamados “actores de la sociedad civil” , en calidad de agentes sociales a la gestión estatal de la niñez. Así, las organizaciones no gubernamentales son masivamente incorporadas como “oferta internativa” dentro del organismo técnico administrativo. A cambio de un financiamiento, que le permite al estado grandes ahorros<sup>11</sup>, los jueces de menores pueden enviar a los niños que han sido clasificados como en “peligro material o moral” a estas instituciones, que rápidamente son preferidas por jueces y funcionarios en general por el “clima humano” que reina en ellas. Este proceso será trabajado en páginas siguientes, pero en esta caracterización del patronato de menores, pretende mostrarse como un doble proceso contradictorio. Por un lado registra el avance y la legitimidad de ciertos movimientos progresistas organizados en torno a estos pequeños hogares de las O.N.G.s., al mismo tiempo el reciclamiento de estos recursos de la sociedad civil que son incorporados en esta nueva tecnología.

| <i>Año</i> | <b>Causas iniciadas en la provincia de Buenos Aires</b> |
|------------|---|
| 1989       | 37.328  |
| 1990       | 39.019  |
| 1991       | 38.344  |
| 1992       | 45.512  |
| 1993       | 46.621  |
| 1994       | 52.978  |
| 1995       | 52.063  |
| 1996       | 56.842  |
| 1997       | 63.490  |
| 1998       | 67.101  |
| 1999       | 70.076  |
| 2000       | 72798   |
| 2001       | 72300   |
| 2002       | 81285   |

Estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

<sup>11</sup> A fines de los años noventa se decía que en una institución estatal cada menor “costaba” 1000 pesos mientras que el estado provincial pagaba 250 pesos por niños a las organizaciones no gubernamentales que financiaba.

Se considera necesario encuadrar estas innovaciones institucionales en el marco del impresionante aumento registrado en los últimos años de las causas que ingresan a los tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires. En 13 años se verifica un crecimiento del 100% de las causas que ingresan a los tribunales de menores en la provincia de Buenos Aires. Como ya se ha visto en el capítulo 1 de este total entre un 46 y 43 % (varía según los años) pertenecen a las causas asistenciales, objeto de estudio de este trabajo. Este dato nos permite contextualizar la introducción de nuevas modalidades de gestión en el marco de una creciente llegada de niños y adolescentes en riesgo al sistema del Patronato de Menores. ¿Cómo gestionar este aumento de la población del Patronato con los crecientes problemas fiscales del estado provincial? Si bien la participación de la sociedad civil en la gestión estatal de la niñez en riesgo, habilita la posibilidad de pensar en una democratización y en la construcción de nuevas prácticas y significados a partir del cual pensar la protección de la niñez, también es posible concebirla como una solución a los problemas presupuestarios. Este último elemento se considera que no puede ser subestimado a la hora de explicar este proceso.

En los años 90' la literatura (García Mendez:1991, Doménech:2000) refiere el advenimiento de un cambio paradigmático en la gestión de la infancia, cambio que se asentaba en la incorporación de la Convención de los derechos del Niño a la legislación nacional y a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En general la literatura, asocia de manera virtuosa esta imbricación estado- sociedad civil. Antes de comenzar con la descripción del funcionamiento de las instituciones del patronato en la actualidad para el caso del Departamento Judicial La Plata, se pretende problematizar la incorporación de la sociedad civil en la gestión de lo social. Más bien se intenta cuestionar el carácter esencialista con que se plantea el supuesto efecto virtuoso que la incorporación de la sociedad civil produciría mecánicamente. En el señalamiento de las bondades de esta alianza virtuosa, coinciden discursivamente tanto los apologistas del estado mínimo como aquellos interesados en el desarrollo social.

Norbert Lechner (Duscahtzky:2000;30) identifica en el concepto de sociedad civil dos campos semánticos, uno que alude a la dicotomía sociedad civil-estado interventor y en torno a la cual se organizan los discursos neoliberales que deploran de la intervención estatal. Por el contrario, la contraposición sociedad civil-sociedad de mercado constituye el horizonte de sentido de los

partidarios de la participación y democratización social por medio de una repolitización de la sociedad. Luchas contradictorias (nuevamente) cuyo derrotero se pretende trazar a partir del análisis de las instituciones del patronato de menores en la actualidad. El balance de este proceso para el concreto caso de estudio, pretende ser incorporado en las conclusiones.

### 3.- Las luchas al interior del campo de protección a la infancia en riesgo.

Como se dijo en los apartados anteriores, el Patronato de Menores sólo con el correr de las décadas emerge como un campo diferenciado en el espacio social. Se considera que en las décadas del 80' y de los 90' se puede registrar el desenvolvimiento de una lucha en la cual la visión del campo de los dominantes deja de ser percibida por muchos actores como la manera "natural" del ser de las cosas en el campo, como lo que siempre ha sido y es conveniente que siga siendo así. Al calor del discurso de los derechos humanos y de la proliferación de discursos críticos tanto contra la "judicialización de la pobreza" como de la violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, surge una importante corriente de opinión encaminada a la reforma de las instituciones existentes.

El hito señalado al comienzo de este capítulo es la promulgación de ley de Protección Integral de Derechos del Niño y el Adolescente de la provincia de Buenos Aires en el año 2000 (12.607) y su posterior suspensión por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Este conflicto es capaz de expresar una lucha por la definición legítima de la protección a la infancia en riesgo. A partir de ciertas opiniones publicadas en un medio gráfico (La Pulseada) se analizan las posiciones identificadas, por un lado quienes propugnan el cambio legislativo y por otro quienes se oponen a él.

En el discurso de los defensores del *statuo quo* se argumenta a partir de la construcción de ciertas metáforas que, más que resaltar las virtudes del sistema que se pretende cambiar, acentúan los problemas y riesgos de una innovación. En este punto es necesario destacar la eficacia argumentativa de potenciar y recrear discursivamente las resistencias al cambio institucional en un contexto altamente burocratizado como es la administración de Justicia. Se apela a la construcción de un "nosotros" basado en la defensa de atribuciones "irrenunciables":

“Con la 12.607, la competencia del juez de menores queda muy acotada. Al chico se lo coloca en un carrousel donde lo más probable es que después de dar varias vueltas, regrese al mismo lugar de donde había llegado con su conflicto”

“Yo pregunto: ¿Quién permitiría que un órgano administrativo te saque de tu casa, decida sobre tu pertenencia familiar para ir a otra familia o para ir a una internación sin la disposición de un juez? Para nosotros es un extremo” (Asesora de Menores de la Provincia de Buenos Aires, declaración a la revista La Pulseada, La Plata, Julio 2003)

En la afirmación de que lo más probable es que después de dar varias vueltas regrese al mismo lugar con su conflicto se apela a una memoria común de reformas institucionales fallidas. Así, como miembro del poder judicial se construye como defensora de estos niños que no encontrarán solución a sus conflictos fuera del marco del poder judicial. Pero además de esto que se dice, interesa detenerse en lo que no dice este discurso. Cuando refiere a “¿quién estaría dispuesto a que lo saquen de su casa?”, se ocultan una serie de circunstancias. Por un lado que los actuales “clientes” del juez de menores tampoco están dispuestos, en la mayoría de los casos, a que los saquen de su casa, pero como toda disposición judicial esta medida no es voluntaria. Además se difumina un aspecto central en este debate ya que si algo caracteriza al funcionamiento actual de la justicia de menores es la falta de recusabilidad de sus decisiones y la ausencia de garantías procesales. Lo que le falta a la justicia de menores es aquello que sería capaz de distinguir a una medida judicial como un procedimiento más garantista que un acto administrativo. Del mismo modo, con la metáfora del carrousel se caracteriza a la gestión administrativa de la infancia en riesgo que la suspendida ley 12.607 propugna. La existencia de varias instancias de decisión y la posibilidad de apelar contrastan con la autoridad omnímoda del juez. Resuena en esta imagen cierta crítica contra las lógicas deliberativas, en la cual por oposición, la concentración de facultades en una persona deviene en la eficacia de las medidas. El carrousel en el cual no aparece la solución al conflicto se opone a una administración de justicia que sí soluciona los conflictos. ¿cuáles son estas soluciones? El fin de la controversia: la invisibilización del conflicto. La internación, la adopción, la restitución del niño con su familia de origen. En esta metáfora anida una concepción positiva de la gestión de la niñez en riesgo como el otorgamiento de soluciones definitivas y unilaterales a los estados riesgosos, aunque los principales interesados no tengan la posibilidad de discutir y apelar estas decisiones.

Este discurso que intenta preservar la autoridad del juez de menores se ha consolidado institucionalmente en la medida judicial a partir de la cual se suspendió la ley 12.607. Si bien el trabajo de campo es ejemplo de la diversidad de puntos de vista entre los funcionarios de la justicia de menores, existe una lógica del campo por la cual cristaliza este tipo de discursos como “el dominante”. Lógica que permite que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pueda decir, justificando la emisión del pedido de inconstitucionalidad de la ley 12607:

“todos los asesores de la Provincia me lo pidieron....ya que si hay una persona en la organización del estado que tiene conocimientos de los problemas de los menores, es el Asesor”.... “Nosotros impugnamos toda la transferencia, que se hacía en esa ley de facultades que son propias y naturales del Poder Judicial en todos los regímenes del mundo” (Procurador de la S.C.J.P.B.A., en la revista La Pulseada, La Plata, Julio 2003)

En el “todos los asesores me lo pidieron” se construye institucionalmente una homogeneización institucional, que sin embargo no es capaz de expresar las discrepancias personales. Éstas o se silencian o se transforman en prácticas contestatarias que sin embargo no gozan del efecto de “punto de vista oficial” que garantiza la nominación legal. La experiencia, el conocimiento de los asesores constituye la fundamentación de la medida restauradora. La apelación a las “facultades que son naturales del poder judicial en todos los regímenes del mundo”, tiene un doble efecto. Primero naturaliza un acto político (y como tal inscrito en lo social y cultural) como es la asignación de poderes a un órgano del aparato estatal. Luego, como si la apelación a la naturaleza no bastara, busca apoyo en el consenso de los gobiernos del orbe, apoyándose en un criterio un tanto más mundano. La naturaleza y la mayoría constituyen los criterios de legitimación de este discurso.

Por el lado de las posiciones que intentan subvertir este estado de cosas e imponer una nueva definición acerca de cómo trabajar en la asistencia de los niños en riesgo, luchan por cambiar la distribución del capital simbólico, redistribución que arrastra consigo también una redistribución de los capitales económico y social. ¿Cómo definir al capital económico en un campo como el de la “protección hacia los niños”? En primer lugar, los recursos estatales, los aportes privados, los

edificios y la infraestructura de las instituciones. Por el lado del capital social las relaciones sociales tejidas alrededor de las posiciones dominantes. El discurso del cambio articula las experiencias de manera muy distinta al discurso conservador. Más que a la experiencia como “autoridad en la materia” se recurre a un análisis del pasado en virtud de ciertos principios que la organizan:

“ Bajo el pretexto de sacar al chico de las rigideces del derecho penal , en realidad lo que se hizo fue sacárselo al juez penal y crear la figura del juez de menores que directamente no tiene en cuenta el derecho, porque tiene en cuenta lo que es el chico y no lo que hizo. Entonces ya arrancamos mal arrancamos en un campo que no tiene nada que ver con el derecho”. (Secretario de un Juzgado de Menores, en La Pulseada La Plata, julio 2003)

Los argumentos se basan en ciertos principios propios del derecho liberal, del discurso de derechos y garantías individuales . La experiencia de la actividad desarrollada por la justicia de menores es criticada en función de un deber ser de las instituciones democráticas y del sistema republicano de gobierno:

“Los hospitales no tienen gasas.¿vamos a dar gasas en el Juzgado? Si por algún motivo la escuela de mi hijo le niega la educación, la solución por vía judicial es que yo meta un amparo para obligar al Ejecutivo a que esa escuela abra y le da clases, no que le den las clases en el poder Judicial” (Secretario de un Juzgado de Menores, en La Pulseada La Plata, julio 2003)

En este párrafo se argumenta a partir de una reducción al absurdo. El relato apunta a presentar la irracionalidad de la permanencia de las funciones asistenciales del juez de menores. Subyace en este discurso el discurso republicano de la división y control de poderes. A diferencia de la metáfora del carrousel, el eje aquí no pasa por la eficacia de la intervención judicial. No aparece una problematización acerca de si el sistema propuesto en la reforma será capaz de cumplir con los objetivos que incumple el actual. La lógica argumentativa refiere a cierta racionalidad institucional que se supone en sí misma virtuosa. Es bueno que el poder judicial no aplique

edificios y la infraestructura de las instituciones. Por el lado del capital social las relaciones sociales tejidas alrededor de las posiciones dominantes. El discurso del cambio articula las experiencias de manera muy distinta al discurso conservador. Más que a la experiencia como “autoridad en la materia” se recurre a un análisis del pasado en virtud de ciertos principios que la organizan:

“ Bajo el pretexto de sacar al chico de las rigideces del derecho penal , en realidad lo que se hizo fue sacárselo al juez penal y crear la figura del juez de menores que directamente no tiene en cuenta el derecho, porque tiene en cuenta lo que es el chico y no lo que hizo. Entonces ya arrancamos mal arrancamos en un campo que no tiene nada que ver con el derecho”. (Secretario de un Juzgado de Menores, en La Pulseada La Plata, julio 2003)

Los argumentos se basan en ciertos principios propios del derecho liberal, del discurso de derechos y garantías individuales . La experiencia de la actividad desarrollada por la justicia de menores es criticada en función de un deber ser de las instituciones democráticas y del sistema republicano de gobierno:

“Los hospitales no tienen gasas.¿vamos a dar gasas en el Juzgado? Si por algún motivo la escuela de mi hijo le niega la educación, la solución por vía judicial es que yo meta un amparo para obligar al Ejecutivo a que esa escuela abra y le da clases, no que le den las clases en el poder Judicial” (Secretario de un Juzgado de Menores, en La Pulseada La Plata, julio 2003)

En este párrafo se argumenta a partir de una reducción al absurdo. El relato apunta a presentar la irracionalidad de la permanencia de las funciones asistenciales del juez de menores. Subyace en este discurso el discurso republicano de la división y control de poderes. A diferencia de la metáfora del carrousel, el eje aquí no pasa por la eficacia de la intervención judicial. No aparece una problematización acerca de si el sistema propuesto en la reforma será capaz de cumplir con los objetivos que incumple el actual. La lógica argumentativa refiere a cierta racionalidad institucional que se supone en sí misma virtuosa. Es bueno que el poder judicial no aplique

políticas sociales al margen de toda consideración sobre su eficacia. Se trataría de un problema de arquitectura institucional.

En esta contraposición, en definitiva, se disputa la distribución del capital en el campo. El eje de la controversia pareciera poder sintetizarse a partir de la definición del papel de los jueces de menores en las causas asistenciales, es decir en aquellas en que se evalúa el riesgo “material o moral” de los niños y adolescentes. Los defensores del cambio se encuentran a favor de una redistribución de los capitales, en la cual la justicia sólo se encargue de los menores en conflicto con la ley penal y de aquellos con derechos controvertidos. Se trata de una posición que identifica en la constitución de partes debidamente asesoradas el funcionamiento ideal de la justicia. Para esta posición la gestión de la infancia en riesgo exige un tratamiento diverso al judicial que se articula en el slogans de las “políticas públicas” o “no judicializar la pobreza”. Por el contrario, los defensores del mantenimiento de la competencia de los jueces en los casos asistenciales, apelan en su discurso a la insuficiencia actual de las políticas públicas y al peligro de dejar a los menores de edad sin protección.

En síntesis lo que esta en disputa en este campo es inseparablemente cognitivo y valorativo, ya que entraña tanto a las representaciones sociales de lo que debe ser un juez de menores como a la manera en que se percibe y se define la situación actual. Esta lucha que aún continua inconclusa, ya que se suceden los recursos y las apelaciones por la vigencia o no de la ley 12067, no puede ser reducida a una disputa por quién ejerce el poder: el poder judicial o el poder ejecutivo. La hipótesis de trabajo sostiene que aquello que esta en disputa en este campo puede ser comprendido a partir de los significados que los actores institucionales construyen en sus prácticas y discursos. En el próximo capítulo descenderemos en el nivel de análisis, ya no se analizará al campo de asistencia a la infancia en riesgo, como el espacio social capaz de aglutinar a legisladores, jueces, organizaciones sociales, sino que nos detendremos en el funcionamiento concreto de la justicia de menores. Desde el campo de las luchas materiales y simbólicas por la definición legítima bajaremos a la instancia de clasificación y gestión de la infancia en riesgo.

### ***Capítulo 3: La justicia de menores.***

## INTRODUCCIÓN.

### La Justicia de Menores como dispositivo.

En el capítulo anterior se describió al complejo institucional Patronato de Menores a partir del concepto de campo. Concepto que nos permitió entender su especificidad y adentrarnos en la dinámica de las relaciones sociales que lo constituyen. Concepto que también tiene la ventaja de ayudarnos a pensar la articulación entre los campos, y analizar las interdependencias escapando al recurso del “reflejo” o del “impacto”. De este modo, sabemos que en la actualidad existen posiciones consolidadas en este campo, disposiciones adquiridas (*habitus*) que permiten a los sujetos que pertenecen al mismo interactuar entre sí y desenvolverse de un modo “adecuado”, aún cuando mantengan posiciones antagónicas. También pudimos conocer la existencia de discursos enfrentados en una lucha por lo que “debe ser” el campo. La pertenencia al campo de protección a la infancia en riesgo, como vimos, no implica uniformidad de puntos de vista, ni adscripción automática a ciertos valores. Pero el efecto de “punto de vista oficial” sanciona como obligatorios ciertos discursos: la perspectiva dominante sobre el sentido del campo.

Sin embargo, a fin de cumplir el objetivo de analizar las prácticas y discursos que operan cotidianamente en la gestión del riesgo infantil, consideramos necesario trabajar en este capítulo en otro nivel de análisis. Un juez de menores puede participar en un foro manifestando su posición a favor del cambio normativo, pero ¿Cuál es la relación entre esta posición y el modo en que desempeña su rol como juez? ¿En qué sentido interpreta el texto legal vigente (al que cree necesario cambiar) cuando emite sus decisiones? Para obtener las respuestas a estas preguntas en este capítulo se focalizará el análisis en la actividad concreta de evaluar y clasificar el riesgo tal como lo hacen los jueces de menores. Para ello recurrimos al uso del concepto de dispositivo tal como lo utiliza Michel Foucault (Dreyfus-Rabinow:2001;151). Este concepto abarca tanto las prácticas discursivas como las no discursivas, constituye una “grilla de inteligibilidad”, un conjunto de relaciones flexibles que se fusionan en un único aparato con el objetivo de aislar un problema histórico específico. Se trata de una elección teórica-metodológica que permite reunir elementos heterogéneos como discursos, instituciones, enunciados científicos y disposiciones arquitectónicas.

La decisión teórico-metodológica de utilizar el concepto de dispositivo, se fundamenta en una serie de hipótesis de trabajo. La primera hipótesis afirma que en el nivel de funcionamiento concreto del Patronato de Menores, las tecnologías de identificación y evaluación de los casos, marcan claros límites y constreñimientos a las interpretaciones judiciales. Sin embargo, y a tono con la impronta constructivista de esta investigación, se asume que más allá de estas limitaciones los jueces, secretarios y asesores involucran en sus decisiones interpretaciones sobre el sentido de su actividad y sobre el alcance de estas tecnologías. De este modo, se intenta acceder a un análisis de la construcción de diagnósticos de riesgo integrando estos dos aspectos, el carácter interpretativo de las decisiones judiciales que se despliega en el seno de ciertas tecnologías.

### De Prácticas y Discursos.

Si cómo se dijo más arriba, un dispositivo incluye elementos discursivos y no discursivos es necesario acudir a un marco conceptual capaz de abordar esta complejidad. Se trabajará con la definición de discurso tal como es entendido por la escuela francesa de análisis del discurso que siguiendo a Julieta Haidar (Haidar:1992;143) permitiría la integración de las siguientes tres dimensiones o materialidades :

- 1.- La dimensión lingüística-textual que habilitaría al estudio de las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas.
- 2.- La relación discurso-extra-discurso , en la cual el funcionamiento discursivo se pone en relación con sus condiciones de producción, circulación y recepción.
- 3.- Concebir a los discursos como prácticas discursivas, esto es recuperar la capacidad performativa de ciertos discursos que como en el caso de estudio, son discursos del poder.

Esta posición inhibe la posibilidad de pensar al lenguaje como un medio a partir del cual se expresan ideas, sino que es el ámbito de producción, de constitución de significados socialmente compartidos. En esta posición el origen del enunciado no es visto como una forma de subjetividad sino como un lugar en el que pueden hallarse distintos/distintas enunciadores sustituibles entre sí ( Iñiguez Rueda:1996;111) Entonces, el discurso será analizado como una

forma de acción social que está constreñido por ciertas condiciones de producción y que tiene unos efectos concretos. El discurso no emerge en un vacío social, sino que se estructura dentro de un espacio socio- histórico como un conjunto de prácticas de producción de significados. En este punto se rescata la aproximación de ciertos textos de Foucault al problema de la relación entre lo discursivo y lo no discursivo.<sup>12</sup> En contra de pensar a Foucault a partir del postulado “no hay nada fuera del discurso”, se sigue a Roger Chartier:

“Contra estas formulaciones, Foucault.....ayuda a recordar la ilegitimidad de la reducción de las prácticas constitutivas del mundo social a la “racionalidad” que gobierna los discursos. La lógica que comanda las operaciones que construyen instituciones, dominaciones y relaciones no es aquella, hermenéutica, logocéntrica, escrituraria, que produce los discursos”(Chartier:1996;50)

Al amparo de esta perspectiva que postula la irreductibilidad de las prácticas a los discursos, se concibe una articulación entre prácticas y discursos más no una homologación. En esta investigación se trabajará con el discurso jurídico y con discursos profesionales, que deben ser considerados como discursos del estado, del poder. El discurso jurídico presenta una serie de características que lo distinguen de otro tipo de discursos. En él se superponen y confunden verdad y validez, sólo será discurso jurídico el que emane de los procedimientos autorizados. En el marco de cualquier acto jurídico (desde un contrato hasta una declaración ante un tribunal) la palabra circula jerárquicamente y en forma ritual. La ley prescribe los turnos y las maneras de hablar y hay palabras vedadas para ciertos sujetos en ciertas ocasiones. Lo dicho fuera de la ceremonia jurídica, no fue dicho para el derecho. Lo dicho por el juez en una sentencia no equivale a lo dicho por un testigo. Otra de las especificidades del discurso jurídico en esta dimensión pragmática radica en que el contexto institucional vincula el acto de habla de un juez, por ejemplo, a los actos de otros sujetos de una manera predecible. Así, una declaración de un juez de menores acerca de la necesidad de internación de un niño para subsanar una situación preexistente de abandono material o moral, obliga a una serie de movimientos dentro del

---

<sup>12</sup> Si bien se puede identificar en ciertos textos del autor ,como *Las palabras y las cosas* (1966), una preeminencia de las prácticas discursivas sobre otras prácticas, se considera que en textos posteriores de Foucault como *Vigilar y Castigar* (1975) e *Historia de la sexualidad* (1976-1984), ya no se lo puede considerar como uno de aquellos autores que piensan a la realidad social como constituida exclusivamente por y en el lenguaje.

dispositivo que, por ejemplo, deben culminar en el ingreso de ese sujeto a una institución interactiva. Estas operaciones de clasificación y etiquetamiento de niños y adolescentes que realizan los jueces si bien serán analizadas en su dimensión cultural, no pueden desligarse de su naturaleza violenta y coercitiva. Esta consideración debe ser considerada a partir de 3 características del discurso jurídico analizadas por Robert Cover (2000)

- 1.- Toda interpretación de un juez es una actividad práctica, está diseñada para generar efectos concretos sobre unos cuerpos.
- 2.- Esta última propiedad alude a la necesidad de un contexto institucional, a una organización en el marco de la cual pueda ser desplegada esa interpretación.
- 3.- Esta necesidad de una institucionalidad es capaz de evitar que la aplicación de la violencia sea el producto de la interpretación de una voluntad solitaria.

El concepto dispositivo tiene la ventaja de ayudarnos a reconstruir las relaciones entre poder y saber. En esta investigación se sostiene que el significado del derecho, de tal o cual norma jurídica excede el momento de la interpretación “técnica” que puedan hacer los órganos autorizados. Toda tradición legal es parte de un “mundo normativo” que además de incluir a un cuerpo de leyes y a los órganos autorizados para su interpretación y aplicación, remite a un universo de significados socialmente contruidos. Ahora bien, cómo conceptualizar adecuadamente la complejidad de lo cultural en un contexto tan altamente constreñido por las prácticas formalizadas como es la justicia de menores. Cómo calibrar la influencia del poder y de la ideología en la construcción de sentido. La reconstrucción de los discursos y las prácticas ha tenido en cuenta la complejidad de factores que intervienen en esta construcción social de un universo de sentido.

## **II.- El Diseño metodológico de la investigación.**

La presente investigación se basa en un estudio de caso, específicamente se trabajará con el Departamento Judicial La Plata. Los jueces, secretarios, asesores de menores y funcionarios judiciales corresponden a esta localización jurisdiccional. Las entrevistas han sido diseñadas para obtener una información insustituible en esta investigación, como son las producciones discursivas institucionales. Si se ha postulado el carácter interpretativo de la tarea judicial de aplicación de la norma al caso concreto, es necesario conocer y analizar los discursos de los jueces de menores. Se han realizado 6 entrevistas a funcionarios judiciales del Departamento Judicial La Plata. De los 5 Jueces de menores existentes en este departamento judicial se han entrevistado a 3; además a 2 Secretarios y a una de las dos Asesoras de menores del fuero. Es importante señalar que la muestra fue elaborada en función de los roles institucionales que desempeñan estos sujetos más que a características personales o de identidad. Las entrevistas han sido semiestructuradas y la duración aproximada ha sido de 45 minutos por entrevista.

Los distintos funcionarios entrevistados comparten una posición en el campo de la protección a la infancia, ya que todos ellos están encargados de la actividad de evaluar la situación del niño y decidir en función de este diagnóstico las medidas adecuadas. Dentro de un juzgado el juez es la máxima autoridad y el secretario aparece en segundo lugar. Respecto al asesor de menores cumple un papel promiscuo al representar al niño (una especie de defensor oficial) al mismo tiempo que actúa como defensor de los intereses de la sociedad (a la manera de un fiscal). A la hora de utilizar estas entrevistas como un conjunto de discursos a analizar es fundamental no descuidar el requisito de comparabilidad que deben cumplir estos discursos. Los elementos invariantes están dados, por un lado por la posición similar ocupada por estos sujetos en el campo de protección a la infancia y por el lugar de la enunciación fuertemente anclado en las características institucionales que constituye el invariante clave de estos discursos. Otro elemento que permanece constante es la realización de las entrevistas por la misma persona y la utilización del mismo guión de entrevista. Sin embargo, la singularidad de la situación de entrevista merece ser considerada a la hora de presentar el análisis.

La situación de entrevista es una interacción social y como tal es necesario reflexionar acerca de sus efectos en la producción de los discursos. En primer lugar es necesario aclarar que es una entrevista realizada en el lugar de trabajo de estos funcionarios, hecho que facilita una mayor compenetración con el rol. El despacho judicial con sus armarios repletos de causas, carpetas, códigos, la bandera argentina en el escritorio enmarcan la situación de entrevista. También es central la escasa disposición de tiempo que los funcionarios se encargan de remarcar en el momento en el cual acceden a la entrevista, a pesar de que muchas veces, olvidan este premura y se producen entrevistas de una hora y media de duración. Quizás esta insistencia en la “falta de tiempo” pueda pensarse como parte del despliegue de un rol.

A los efectos de comprender estos discursos enunciados en una entrevista, el propio estereotipo de la entrevistadora frente a los jueces debe ser objeto de reflexión. En este terreno sólo se puede trabajar con conjeturas, pero es legítimo hipotetizar la centralidad que la pertenencia al mundo académico puede estar jugando en los entrevistados. La presentación de la entrevistadora como “una estudiante de posgrado realizando su tesis” puede haber introducido en la entrevista la presencia de un interdiscurso<sup>13</sup> que aparece como implícito. Ese “otro” discurso es el de la doctrina de la protección integral de derechos cuya máxima expresión es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La situación de lucha en el campo y el cuestionamiento que los jueces de menores han sufrido en el marco de este debate, no pueden ser ignorados a la hora de analizar estas entrevistas.

En este sentido cabe suponer que opera una identificación de la entrevistadora con aquellos discursos críticos de la ideología del Patronato de menores, por la circunstancia de que este discurso aparece como hegemónico en la literatura de corte académico. El trabajo de campo es un claro testimonio de la legitimidad que ha alcanzado el discurso de la protección de derechos en su crítica al paternalismo, a la arbitrariedad judicial. Sólo uno de los jueces se declara abiertamente en contra de estos planteos y describe despectivamente a los intentos de reforma del decreto-ley 10.067. Todos los demás entrevistados se identifican con los conceptos de los derechos y

---

<sup>13</sup> Si sostenemos que en el mundo académico la doctrina de la protección integral de derechos es la hegemónica, ésta actúa como interdiscurso, contaminando con sus conceptos a los otros discursos presentes en el campo.

garantías e intentan posicionarse como partidarios de la Convención de los derechos del Niño. Sin embargo, veremos más adelante, esto no implica que construyan los diagnósticos de riesgo e intervengan cotidianamente a partir de estos conceptos. Así, aparece la necesidad de distinguir entre un saber teórico o reflexivo, profundamente influenciado por este interdiscurso y ese saber pre-reflexivo a partir del cual gestionan cotidianamente el riesgo de la infancia. Con esta finalidad, el primer paso será un acercamiento a la construcción discursiva que realizan estos funcionarios acerca de las características de la actividad de un juez de menores.

### **III. Análisis de discursos y prácticas en el fuero de menores.**

#### **¿A qué se dedican los jueces de menores?**

Preguntar por la función específica de un órgano del poder judicial podría ser una pregunta absurda si no estuviera situada en el marco del conflicto por la definición de la competencia que se está librando en el campo de la protección a la infancia en riesgo en la provincia de Buenos Aires. Como señala una de las juezas entrevistadas:

*“Esto es un tribunal de menores, por lo tanto el objetivo es la justicia, no queda otra. Es un órgano del poder judicial. Ya está establecido cuál es la finalidad, aunque está pregunta que vos haces deviene a que nosotros estamos actuando en áreas donde es difícil interpretar la labor del poder judicial.” (Juez 2)*

La ambigüedad presente en estas “áreas donde es difícil interpretar la labor del poder judicial” constituye el eje de las críticas a las amplias facultades del juez de menores que provoca su descripción en términos de “un buen padre de familia”. En el contexto del conflicto que se está librando en el campo ¿Cómo nominan los jueces de menores las actividades que realizan? ¿Cuáles son las situaciones que habilitan su competencia? ¿Cómo construyen los escenarios de la protección? La protección judicial de los niños en situación de riesgo o peligro material o moral, entroniza al juez de menores como el encargado de evaluar y realizar la clasificación oficial. Sin demasiados parámetros legales (capaces de erigirse como límites) elabora un diagnóstico y actúa en función de él. Esta intervención, salvo casos excepcionales, no es revisada por ninguna otra

instancia judicial, ya que la apelación de las decisiones de los jueces de menores no es una práctica de rutina en este fuero, como así tampoco la existencia de abogados defensores de la posición del menor de edad o su familia.

Por la centralidad que adquiere esta construcción judicial de un diagnóstico de riesgo en la vida de los niños y adolescentes que ingresan al circuito judicial, interesa conocer como se define el escenario peligroso o riesgoso en el discurso de estos funcionarios judiciales. En los discursos analizados se ha identificado la construcción de un orden de causalidad cuya integración final permite comprender la racionalidad de estos discursos. La descripción del contexto ocupa un lugar central en la definición del propio rol, contexto en el que si bien existe coincidencia en ser definido como una situación de crisis, esto es como un momento excepcional y particularmente conflictivo, cambian las atribuciones de responsabilidad y los aspectos acentuados. “La crisis que vive el país” tiene grandes repercusiones en el trabajo del fuero de menores. El juez de menores se encuentra en la actualidad más exigido por la cantidad de causas que llegan a su consideración. Se han identificado dos grandes tipificaciones a partir de las cuales se construye la escena de la intervención judicial: el escenario de la crisis ética y moral, y el escenario de la crisis social.

### 1.-La crisis ética.

Actualmente se vive en un contexto de crisis institucional provocada por la falta de autoridad. De este modo el gobierno se convierte en el principal incumplidor de la ley, la falta de ética corroe a toda la sociedad y la anomia baja desde el estado hasta los individuos:

*“ la falta de autoridad se traduce en el colapso, la crisis o el desmadre del sistema republicano que es lo que estamos viviendo ahora. La autoridad es el derecho de mandar que yo entiendo que se efectiviza o se traduce en el poder de hacerse obedecer y uno se hace obedecer no a través de una credencial o un diploma uno se hace obedecer a través de la capacidad de conducir a través de ejemplos, de ejemplos que sean éticos y morales, pero por eso yo señalo que la problemática no es económica” ( Juez 1)*

Una concepción organicista subyace en este discurso, el gobierno del estado aparece como la cabeza de la sociedad, cuyo colapso enferma al cuerpo. Al mismo tiempo una visión jerárquica en la cual la falla en las autoridades desordena la vida social, que se queda “sin ejemplos”. La

imagen de una cadena de mando rota, desarticulada, parece estructurar este discurso a partir del cual se interpretan y se evalúan las historias de vida que llegan al juzgado de menores. Entonces pareciera que hasta que no se restituya la autoridad, no aparezca la “conducción ejemplar” no se podrán atacar los factores que provocan la masiva llegada de causas a un tribunal de menores. Esta percepción de la crisis actual como crisis de valores construye una escena de la intervención que se enfrenta a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, miembros de familias patológicas, de pobreza delincuentes, niños explotados por sus familias, abandonados. Todos víctimas de la destrucción del tejido social a causa de la crisis axiológica. En este escenario el juez poco puede hacer: las soluciones estructurales jamás podrán aparecer de una autoridad debilitada. Respecto al trabajo sobre los efectos de esta crisis, el conjunto de medidas sugeridas van desde bajar la “delictuosidad” mediante la reducción de la edad de inimputabilidad, hasta los 14 años, pero para esto previamente deben existir institutos capaces de formar a estos jóvenes. En este aspecto se produce un interesante desplazamiento, al equiparar conceptualmente la reducción de los delitos con la disminución de la edad de imputabilidad:

“Ahora sí me preguntan a mí si hay que bajar el índice de delictuosidad yo digo que sí, pero tendría que estar en un contexto porque si ahora no hay institutos que haría yo con un menor a quien declaro imputable a los 14 años” (Juez 1)

Capacitar al personal de los institutos, crear escuelas como aquellas en las cuales se forman los empleados de las cárceles para adultos. Una gran utopía del encierro educador es reciclada en este discurso: reemplazar a las familias patológicas, corregir a los jóvenes delincuentes mediante el encierro y la formación. Pero claro, esto sólo se podrá transformar en realidad cuando la cadena de mando ética sea restablecida. Ahora bien, se han identificado las formas mediante las cuales se semantiza a la infancia judicializada, pero ¿cuáles son los efectos de este discurso? En el presente, en la gestión cotidiana de la protección este discurso deviene en la criminalización de la competencia y en la impotencia. Criminalización porque la construcción de un escenario de anomía y patología reclama la asepsia de un encierro reparador. Impotencia para pensar la gestión de la niñez en riesgo a partir de alternativas al encierro y al reemplazo de estas familias “desechables” cuyos hijos ingresan al circuito judicial :

“ J: se utilizan alternativas a la internación pero reitero no se lo puede tomar como alternativa de manejo uniforme, constante. No porque todo eso es a fuerza de voluntad propia o del accionar excepcional.

E:¿ Porqué excepcional ?

J: porque no es sistémico porque hay situaciones que a veces se dan en el choque con la realidad como imposibles de practicar. Primero: porque hay un marco social de un alto grado de conflictividad, hay un gran individualismo .La inseguridad que se esta viviendo ahora es inédita, entonces se traduce en el temor de la gente.....es la gente a la que uno acudiría buscando familias sustitutas.....” ( Juez 1).

La percepción involucra aspectos cognitivos y valorativos y genera efectos prácticos: la crisis moral cimienta la impotencia del trabajo a favor de la llamada re-vinculación familiar y en las prácticas alternativas al encierro de los niños y adolescentes. En este discurso subyace la metáfora del contagio propia del discurso de la peligrosidad social. La internación preventiva es el instrumento preferido, capaz de neutralizar los efectos negativos de la crisis ética en las jóvenes generaciones. El gran imaginario epidemiológico predominante entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX sigue latiendo en este discurso.

## 2.- La crisis social y económica.

Este otro gran escenario de la intervención se ha reconstruido a partir del análisis de discursos que a pesar de mantener fuertes diferencias entre sí en varios puntos, comparten la conceptualización del presente argentino como de una crisis socioeconómica sin precedentes. Esta situación provoca el aumento de los casos que llegan a los juzgados de menores, fundamentalmente se destaca el crecimiento de las denominadas causas asistenciales. El fuero de menores es definido como “una caja de resonancia de lo social”. ¿Cuáles son las imágenes a partir de las cuales se construye este discurso de la crisis social ? Fundamentalmente son postales de la pobreza, una pobreza inédita para la Argentina y riesgosa para los niños. Una pobreza que “asusta” a los funcionarios de la administración de justicia:

“E:¿En el caso de las causas asistenciales y las que me mencionabas como causas de derechos vulnerados, cuáles son las que más han aumentado en los últimos años?

A: Tenemos casos de desnutrición, los informes asistenciales cuando vienen te asustan ver que el propio asistente social del tribunal se asusta. Yo lo único que hago es leerlo y solamente con leerlo me impresionan con lo que ponen.....Vos te encontrás con informes ambientales que describen dentro de

una villa donde es un ranchito de chapa de 2 por 2 donde en una misma cama duermen 8 personas, los padres con los hermanitos, no tienen agua potable, por supuesto no tienen luz, no tienen necesidades básicas pero nada” (Asesora de Menores)

La impresión y el susto son provocados por el hacinamiento, por las necesidades básicas insatisfechas, testimonios todos de la pobreza, que si bien siempre fueron territorios privilegiados de la gestión de la niñez en riesgo, en la Argentina contemporánea han adquirido una extensión y profundidad inéditos. A la pregunta por las causas que más han aumentado en los últimos años se responde con una semblanza de una situación que, además de riesgosa o peligrosa para los menores de edad, podría también ser conceptualizada como una negación de las condiciones mínimas de vida definidas por la cultura occidental contemporánea para cualquier ser humano. ¿Cuál es el proceso de construcción social por el cual este tipo de situaciones pueden llegar a ser definidas como “causas” de un juzgado de menores. Es decir ¿cuáles son los mecanismos institucionales capaces de provocar que una situación de pobreza devenga en un diagnóstico de riesgo infantil registrado en un expediente judicial?

Para responder esta pregunta es importante no perder de vista que en Argentina, como se señala en el capítulo segundo, la pobreza aparece en la esfera pública como un problema de estado recién en la década del 90'. Históricamente la pobreza se construyó discursivamente como una situación vergonzosa vinculada exclusivamente a la responsabilidad individual. En este discurso los inválidos y los niños empujaban a la caridad. Frases como “en este país no trabaja el que no quiere” son testimonio de ciertos significados profundamente anclados en el sentido común. Ahora bien el análisis de los discursos de las crisis social ha permitido reconstruir dos maneras distintas de tematizar la pobreza y el riesgo de los niños. Tematizaciones que entrañan diversas maneras de percibir y valorar este fenómeno social. Mientras que en algunos discursos se enfatiza en la responsabilidad pública, en la falta de respuestas de las instituciones del estado, en otros resurge la responsabilidad familiar, privada, por el riesgo de los niños.

En este primer discurso que se denominará como de *la construcción pública de la pobreza*, la crisis social y económica que vive el país victimiza a los niños y adolescentes, que necesitan de la existencia de un órgano judicial para que se le restituyan sus derechos vulnerados. En algunos

pasajes de las entrevistas pareciera que también sus padres son victimizados por la crisis, pero esto no es algo que pueda ser visualizado con la contundencia de la imagen del niño víctima.

“la pregunta que habría que hacerse es porque tenemos que judicializar un niño cuando es víctima de una situación social ...porque él tiene que estar en carátula y no.....no ser algo que se puede tratar desde otros niveles con políticas tendientes a dotar al niño de todo lo que debe ser la Convención .....porque con la intervención del tribunal a través del asistencialismo lo que estamos haciendo es judicializar a muchísimos niños que son víctimas de una cuestión social.” (Jueza 2)

Pareciera que existe un responsable que debiera estar en carátula que no puede ser nombrado: ¿los responsables de la situación social? ¿sus padres?. En este discurso se deplora de la intervención del juez de menores en las llamadas causas asistenciales, se lo equipara a asistencialismo y la aparición del niño en un expediente judicial se concibe como un castigo que no se merece, quizás como un estigma. Pareciera imposible despojar a la gestión judicial, aún en las causas asistenciales, de cierta impronta de penalización: en un expediente se es nombrado como culpable o como víctima. ¿Cuáles son los efectos pragmáticos de esta construcción? El enunciador de este discurso que es un juez de menores, se posiciona frente a estas imágenes en el lugar de la denuncia: la gente encuentra *“las puertas de las instituciones cerradas” acude a los hospitales y no hay medicamentos, no existen política sociales adecuadas (Asesora)*. Entonces, ante estas circunstancias el juez de menores interpela a las instituciones públicas mediante recursos judiciales (amparos) para que “se cumplan los derechos”. En este discurso de la construcción pública de la pobreza se socializan tanto las causas del riesgo o el peligro infantil como la necesidad de que el Estado brinde respuestas y soluciones.

Por el contrario, anida en algunos de los discursos de los entrevistados una construcción privada de la pobreza. Sin dejar de desconocer que la crisis socioeconómica arrastra a muchas familias a la pobreza y que no existe una respuesta adecuada del estado frente a los desafíos de la situación social, enfatizan en el papel de la familia. La pobreza por sí misma no empujaría al riesgo infantil:

“ hay situaciones que ya están colonizadas desde hace mucho tiempo, si no yo no vería porque tenemos que judicializar la pobreza .Porque hay familias que son pobres, pero le dan a sus hijos dentro del marco de los que pueden amor, alimentación, salud, escolaridad y hay otras familias que no...” (Jueza 3).

La enumeración parece equiparar al amor con la alimentación y la escolaridad, podría hipotetizarse que es el déficit de amor lo que estaría influyendo en las dificultades para alimentar a sus hijos y garantizarles los derechos a la salud, escolaridad. La atribución de responsabilidades a las propias familias que no pueden atender a sus hijos está implícita en este pasaje. Opera por parte de los jueces un proceso de atribución de un “plus de responsabilidad” a estas familias cuyos hijos llegan a los tribunales de menores. Por ello se puede inferir que aún cuando esto nunca es nombrado por los jueces existe un gran implícito en este discurso: la especificidad de la competencia del fuero se relaciona con la incapacidad de los padres (por ausencia, acción u omisión) en el riesgo de los hijos:

“E:¿Me podrías poner un ejemplo de una causa asistencial?

A: una causa asistencial es por ejemplo cuando vienen acá las maestras a informar que un chico falta a la escuela, se hacen los informes desde la misma escuela y la madre dice que el chico no puede ir porque tiene un montón de hermanitos y qué tratan de llevarlos a un comedor sólo para comer o bien que no pueden ir porque no tienen zapatillas, no tienen ropa como para ir a la escuela, no nos corresponde judicializar, llamar a los padres y considerar que los padres son lo que no eh hacen cumplir al chico la obligación. O sea: no van porque no pueden ir, no tienen los medios necesarios” (Asesora de Menores)

No corresponde judicializar porque no son los padres quienes están negando el acceso al derecho. Surge como una hipótesis la presencia de un discurso de la culpabilización, en la cual sólo las paternidades deficitarias, responsables de la negación del derecho, habilitan la judicialización de estas situaciones. Discurso implícito en pasajes como los que aquí se cita pero que también puede rastrearse en la manera en que se realizan diagnósticos de riesgo y en la soluciones que se prescriben cómo veremos más adelante. La gran paradoja es que esta especie de *individualización* de la pobreza es construida a partir de una muy particular y restringida oferta institucional. Este discurso de la pobreza privada coloca al juez en la posición de evaluador de las capacidades familiares. Entonces, se recurrirá a informes que den cuenta de las aptitudes de

los progenitores u otros miembros de la familia: su salud física o mental, grado de contención afectiva o capacidad para la puesta de límites.

Estas familias que llegan ante la mirada del juez de menores quedan insertas en una trama de observación de cuestiones pertenecientes a la vida privada que se tornan en asuntos de interés público ante el riesgo de los menores de edad que ingresa a la órbita judicial. Desde un presunto abuso sexual denunciado por una maestra a las situaciones de desnutrición referidas más arriba, pasando por aquellos casos en los cuales los padres acuden ante el juez al no poder controlar a sus hijos adolescentes: la técnica privilegiada es la observación y evaluación de los cuidados familiares. En los itinerarios institucionales relevados se observa el despliegue de unas tecnologías de identificación del riesgo entre las cuales predomina la inspección psicológica y social de la familia por parte de peritos pertenecientes al fuero de menores. Ahora bien, es interesante analizar cómo opera este proceso de calificación de una situación como riesgosa o peligrosa para el niño y de otorgamiento institucional de certidumbre, ya que el mismo se organiza en una institución de tipo judicial, bajo el signo de la impartición de justicia y con el respaldo de la fuerza pública de cada una de estas decisiones. Uno de los procesos identificados es la producción institucional de diagnósticos de abandono.

#### *El abandono como una escena privilegiada de la privatización del riesgo.*

El abandono de los niños es actualizado recurrentemente en los discursos de los jueces entrevistados como una de las situaciones típicas que habilita la competencia del juzgado de menores. Interesa presentar en este apartado las escenas del abandono y el contexto discursivo en el cual emergen, ya que al no tratarse de una pregunta de la entrevista, es sintomática la manera en que la referencia al abandono emerge en ellas. Así, es posible establecer la siguiente secuencia: se habla de adopciones cuando se pregunta por las medidas alternativas a la internación en las causas asistenciales y de allí se pasa a la descripción del abandono. En ciertos fragmentos se equipara conceptualmente al niño internado por orden judicial con el niño abandonado, operación discursiva con efectos muy concretos: se le atribuye acción e intención a sujetos que muchas veces son receptores de una construcción institucional. Se borra el diagnóstico judicial que afirma y constituye (a través de la potencia performativa de la ley) a un niño como abandonado. Sin embargo, en las entrevistas y en el análisis de documentos

institucionales se revela que la mayoría de los niños internados tienen familiares y que a la declaración de abandono antecede un diagnóstico acerca de la existencia o no de una vinculación positiva entre el niño y su familia. Nuevamente, se oscurece la producción colectiva del abandono y se realiza un proceso de atribución de responsabilidad individual: este niño ha sido abandonado por su familia. Sin embargo en algunos momentos de las entrevistas surge el imperio de la voluntad institucional en el tema de las adopciones:

“me quedan dos chicos en Casa Cuna una nena que tiene múltiples malformaciones que la voy a sacar en adopción. Voy a encontrar una familia porque todas son superables, y otro nene que tiene una mamá débil mental que por más que la mamá quiere no puede desempeñar el rol. Entonces voy a intentar un período de re-vinculación en un instituto que trabaja con las mamás, y si fracasa también lo dará en adopción” (Juez 3).

En esta referencia a la mamá que quiere pero no puede desempeñar el rol, aparece la afirmación de la autoridad judicial: hay intención expresada de mantener el vínculo pero el juez afirma que no puede. La ley establece un límite a los derechos de los padres a criar a sus hijos y ese límite es, el peligro o riesgo que este vínculo puede representar para los niños. Sin embargo, esta operación técnica y política se presenta como una actividad de confirmación: el niño ha sido dejado a su merced, el estado debe encontrarle personas aptas para su crianza. El abandono es presentado discursivamente como algo que sucede “allí afuera” y que el poder judicial constata y repara. No se explicita que la determinación del riesgo o de peligro para el niño es una operación que involucra criterios técnicos, morales y políticos. Este diagnóstico de riesgo designa cuáles son los factores que causan el riesgo y cuáles son las prioridades a tener en cuenta a la hora de prevenir el riesgo. Mary Douglas (1992) afirma que en toda declaración de riesgo están presentes las valoraciones morales y políticas de quien tiene la capacidad de declararlo. Desde su punto de vista, en la percepción del riesgo se ponen en juego distinciones sociales acerca de lo que es bueno o malo, puro o impuro: el riesgo opera como una barrera para distinguir entre un “nosotros” y un “otros”.

Ahora bien, esta operación de declaración del abandono opera al interior de un dispositivo concreto como es el Patronato de Menores que tiene específicos instrumentos de observación,

medición y clasificación del riesgo. Sin embargo, en los discursos analizados esta tecnología de identificación, cálculo y administración del riesgo es oscurecida, por la contundencia de los “hechos”. Será dificultoso en la entrevista indagar en las técnicas de investigación de la situación del niño y su familia, ya que existe en los entrevistados una especie de naturalización de las propias prácticas que vista desde afuera tiene parecidos de familia con el interrogatorio policial. En general, todos los entrevistados afirman que toman las decisiones a partir del trabajo en equipo y en forma interdisciplinaria. Sin embargo en aquellos pasajes de las entrevistas en que se relatan algunos casos, aparece otra imagen que remite más que a la lógica interdisciplinaria, a una lógica de “pruebas” que el juez sopesa y en función de las cuales toma las decisiones:

“El juzgado con el cuerpo interdisciplinario opera en función de la información que debe recibir el juez de parte del médico, de parte del psicólogo, con el informe del asistente social y a partir de ello se efectúa una diagnosis, una prognosis de cada uno de los casos y el juez debe advertir coincidencias, concordancias y divergencias de parte de cada uno de los dictámenes de los profesionales, toma la determinación a través de un fallo, una sentencia, una resolución”

La descripción de este modo de evaluar los casos entraña un significado particular del concepto “interdisciplina”, en la cual unos saberes aportan “información” y otro, el del juez, “decisión”

Para que un niño sea dado en adopción un juez de menores debe declarar su estado de “abandono”. Existen casos en los cuales se desconocen quienes son los familiares del niño, cuando existe alguna presencia familiar el estado de abandono deviene en un proceso de descalificación del vínculo. Eva Giberti analiza el deslizamiento ideológico que opera en el uso del término abandono en el marco de los procesos judiciales de adopción, afirmando que las ideas de abandono del niño remiten a alguien que abandona, como un sujeto activo que produce un estado de indefensión de otra persona; construyendo un sujeto “abandonante”. Conjuntamente emerge el niño abandonado caracterizado a partir de su pasividad. Según la autora estas dos ideas de abandono se conjugan de un modo no ingenuo. A partir del análisis de los casos de la madres que dan sus hijos en adopción se equipararía el caso de aquellas madres que dejan a un niño en un descampado, esto es abandonados, indefensos, con aquel otro gesto como es el de aquellas madres que dejan a sus hijos al cuidado de las instituciones públicas (Giberti:1996). La autora

denuncia en la construcción judicial de la madre “abandonante” las huellas del discurso patriarcal de la maternidad que responsabiliza exclusiva y unilateralmente a la madre por el destino de sus hijos.

En los discursos que se vienen analizando el abandono pareciera ser un acto de estas familias (en principio no puede distinguir la diferencia entre padres y madres) cuyos hijos quedan internados.

La equiparación se realiza entre el abandono que deja al niño librado a su propia suerte, y las múltiples situaciones por la cuales un niño puede estar internado por orden judicial. ¿Cómo interpretar esta extensión del significante abandono? En principio pareciera aplicarse a toda una serie de situaciones que colocan bajo examen la capacidad de ciertas familias para socializar a sus hijos. Capacidades e incapacidades que se constituyen como el origen del riesgo o de la seguridad de los niños. Un padre o madre que no puede otorgar seguridad a sus hijos se coloca en posición de perder un derecho. De manera lateral opera una sanción sobre su derecho que se enuncia como la contra-cara del derecho del niño:

“ Desde el momento que un chico es abandonado, está internado el conflicto ya está, lo que pasa es que hay que verlo. El conflicto ya está entre los intereses de los chicos y los intereses de los padres” (Juez 3)

Estas infancias pobres, victimizadas, son visualizadas por las instituciones públicas como el producto de un vínculo familiar defectuoso, de una responsabilidad familiar no cumplida. A la pregunta nunca enunciada de ¿Cuáles son los factores causantes del estado de riesgo? La declaración judicial de abandono responde con la atribución de responsabilidad a la familia de origen. Se ocultan las responsabilidades públicas que se exaltaban en el discurso del estado interventor que incluía entre sus deberes el derecho de las familias a la educación, salud, recreación y trabajo. Las familias que abandonan son aquellas incapaces de socializar a sus hijos según los parámetros legítimos, buenos, puros. Pero al mismo tiempo, si bien se niegan determinados derechos a las familias, el estado a través de los jueces de menores sigue asumiendo la responsabilidad de proteger a los niños en riesgo. Un estado inimputable por las causas del riesgo pero que, sin embargo, sigue siendo convocado por los niños abandonados.

Estos discursos tienen ciertos parecidos de familia con la filantropía oligárquica de principios de siglo que apostaba al rescate de las jóvenes generaciones. Así, desaparece del ámbito de lo público la protección universal de la familia, pero a través del juez de menores se gestiona caso por caso el riesgo de los niños y adolescentes. Hemos visto las tematizaciones del riesgo que circulan al interior del dispositivo y las construcciones del contexto de crisis, a continuación se describe cómo se relacionan en los discursos estas imágenes y a partir de esto cuáles son las posiciones institucionales que asumen estos sujetos. En principio y en contra de algunas caracterizaciones de los miembros de la justicia como una corporación homogénea, podemos concluir que existen diversos discursos del riesgo infantil.

### *El significado de ser juez de menores.*

El presupuesto del cual parte este estudio afirma que la actividad desarrollada por los jueces de menores se entiende mejor como el despliegue de una actividad interpretativa que como la aplicación de los textos legales vigentes. Interpretación que no responde a la voluntad solitaria de un sujeto sino que se halla inscrita en las matrices de significado que estamos explorando. En los discursos analizados es posible reconstruir cierto orden de causalidad a partir del cual los entrevistados justifican su desempeño al tiempo que construyen la imagen del niño en riesgo y la respuesta judicial con la que pretenden otorgar amparo. A partir del análisis hasta aquí realizado se han podido reconstruir tres grandes campos semánticos <sup>14</sup>.

### *El juez de menores como "bombero".*

Un bombero es aquel que apaga el fuego, rescata a las víctimas, acude ante la emergencias. El juez de menores en esta concepción otorga soluciones a problemas acuciantes que no siempre parecen estar directamente relacionados con la violación de un derecho o el conflicto entre partes por un derecho controvertido. La definición del contexto como de crisis social justifica la necesidad de su actuación:

---

<sup>14</sup> Un campo semántico puede ser definido como el conjunto de empleos de una palabra. Para delimitar estos empleos se hace la suma de todas las relaciones que conoce la palabra en un texto dado. (Robine, Estudios de Historia Social, N. 2-3, Año 1977, Julio-Diciembre)

“Nosotros actuamos sobretodo en los turnos cuando ya la situación está consumada, cuando el maltrato ya está, cuando la pobreza es tal que si uno no interviene los chicos corren serios peligros de que se vean afectados sus derechos a la salud, sus derechos a la escolaridad, a una vivienda digna. Somos, yo siempre digo, como bomberos que salimos a solucionar situaciones que ya están colonizadas desde hace mucho tiempo, mucho tiempo” (Jueza 2).

Como todo bombero el juez de menores puede intervenir tanto cuando el daño ya se ha consumado (cuando el maltrato ya está) como cuando aún se pueden prevenir daños mayores (si uno no interviene los chicos corren serios peligros). Interesa trabajar en las implicancias de esta analogía entre el tipo de función que desarrolla el juez de menores y la de un bombero. Por un lado las situaciones en las cuales se interviene son percibidas como urgencias, esto es como episodios que requieren una respuesta inmediata y contundente, a los fines de contener, por lo menos, los efectos dañinos:

*“J: la internación es la última medida, pero estamos internando muchos chicos.*

*E:¿ Sí?*

*J: Sí. a pesar de todo y sí porque nos encontramos con que los padres no pueden sostener la situación, con que no hay familia extensa y después con altos niveles de pobreza donde al chico si no lo sacas de ese lugar se muere.....el otro día interné, ya hace bastante que interné un bebé en la Casa Cuna porque se me moría” (Jueza 1)*

Entonces, en un contexto de empobrecimiento creciente la gravedad de la situaciones estarían obligando a los jueces a tomar medidas de alto impacto como en este caso la separación de un bebé de su familia a efectos de recibir una atención que su grupo familiar no le puede brindar. Ahora bien, como se dijo más arriba, es importante no perder de vista que todo riesgo (“se me moría”) es una construcción social y que aún en los casos en que existen indicadores fácilmente cuantificables (bajo peso, enfermedades, maltrato) en cada una de estas decisiones existe un proceso de atribución de responsabilidades. Todo diagnóstico de riesgo implica una definición acerca de quién es el responsable por la situación y qué es lo que debe ser preservado y con qué costos. En este caso el valor vida se presenta como la prioridad en las intervenciones del juzgado que dirige esta jueza.

La presentación discursiva de este “salvataje” oscurece la evaluación realizada que determina el riesgo para el bebé de permanecer con su grupo familiar. Se le atribuye la responsabilidad a la pobreza, sin embargo, el vínculo entre esta pobreza y el riesgo para la vida no es deducible automáticamente. No había otras opciones: vida o muerte. Una interpretación plausible es que esta familia por su pobreza es incapaz de gestionar privadamente el riesgo en que se encuentra el niño, pero ¿esto determina necesariamente la necesidad de internación? Lo que no se dice es que en toda separación de un niño de su familia existe una afirmación que relaciona el riesgo con la permanencia del niño con su familia.

Otro elemento que no aparece en el relato de este episodio es la manera en que se sopesan costos y beneficios: la contundencia de la situación de vida o muerte oculta la existencia de opciones. Por ejemplo apoyar a la familia económicamente, supervisar el tratamiento médico del niño, mejorar las condiciones de la vivienda. Pero además, el ejemplo de la situación extrema funciona como un mecanismo de disolución de responsabilidades, más que una decisión de una dependencia estatal se construye la decisión de internar como una respuesta “necesaria”, mecánica. Más que la opción capaz de prevenir los daños que permite conjeturar la situación de riesgo de los niños, el recurso a la internación parece imponerse por la propia gravedad de la situación:

*“Jueza :¿ que hago le sacó a esta madre todos los chicos, es una disyuntiva para mí, terrible. Estoy exponiendo a estos chicos a riesgos grandísimos. Qué hago los interno y los sacó de su medio familiar, la familia que les tocó, no tengo una tercera alternativa, no tengo una alternativa son muy difíciles.*

*Entrevistadora: ¿cómo se resuelven esas disyuntivas ?*

*Jueza: Con cada caso en especial, con cada caso en especial. Con esta niña que esta en 7 y 32<sup>15</sup> corriendo, jugando entre los autos que la misma asesora me pidió que tome medidas, porque ya esta pasando los limites, realmente sin cuidado de ningún adulto esa criatura. Las resuelvo, las resuelvo así como van surgiendo, viste y no hay parámetro fijo” (entrevista a Jueza 2).*

En este fragmento se cuele el cálculo de riesgos (la familia o la integridad física de la niña) y la responsabilidad personal por la decisión. En este fragmento se sintetiza un aspecto que aparece en

---

<sup>15</sup> Las calles en la ciudad de La Plata se encuentran numeradas, la niña aludida corre en la intersección de la calle 7 con la calle 32.

todas las entrevistas: la inexistencia de mecanismos institucionales de cálculo de riesgo. Es decir no pareciera existir una producción colectiva de criterios ni la elaboración sistemática de una casuística o estadística de opciones. Más bien, se trabajaría desde la experiencia del juez y del equipo técnico, pero las evaluaciones de éste último son de carácter consultivo para el juez, es decir no lo obligan a fallar en el mismo sentido. En el caso particular de la jueza autora de este fragmento se exagera su papel a la hora de tomar decisiones, marcado por el uso de los pronombres. En este sentido se podría pensar en la existencia de distintas maneras de construir un diagnóstico de riesgo, aunque no deja de ser central el hecho de que estos estilos están sujetos al arbitrio personal del juez de menores, ya que la arquitectura institucional habilita el despliegue de el personalismo. En este *“las resuelvo como van surgiendo”* se sintetizan un conjunto de respuestas que abonan en la aparente falta de reflexión sobre cuáles son los criterios institucionales a partir de los cuales se construye el riesgo.

El juez bombero interviene para paliar situaciones extremas, si bien es conciente de lo tardía de su llegada a los casos, asume como una tarea irrenunciable la competencia en las causas asistenciales. La presencia del tribunal es insustituible, el auxilio se organiza desde su despacho y los otros actores involucrados (familia, comunidad, otras instituciones) son convocados a “colaborar”, más que a intervenir activamente en la solución de los casos:

*“yo lo que noto es que acá se trabaja muy bien pero cuando vamos al afuera nos encontramos que nos falta la red, la red de contención. O sea el trabajador social trabaja mucho pero con poca red, la escuela no es un referente muy válido en este momento es cómo que se lava las manos muchas veces te trae el problema al tribunal y basta....y la familia por supuesto, contamos con muy poco apoyo de las familias”*  
(Jueza 1)

En este fragmento pareciera invertirse cierta lógica y las familias son las que deberían apoyar al juzgado y no a la inversa. A tono con esta inversión otra característica propia del discurso del juez bombero es el involucramiento personal en los casos. Los niños se le mueren; no tiene familias con fuerte contención; los chicos se le fugan. El análisis de los pronombres en el discurso permite afirmar que en el tratamiento de los casos la figura del juez bombero no es un tercero que evalúa y toma medidas, sino un protagonista central, en quién repercuten

directamente los sucesos del caso. Además las dificultades en el trabajo parecen centrarse en el “afuera”. Así, las reflexiones críticas sobre el desempeño institucional no parecen tener cabida en este discurso.

### El juez policía.

En este segundo campo semántico identificado aparece una negación de la materia asistencial: se eluden las preguntas que refieren a este punto, se minimiza su importancia y se exagera la centralidad del aumento de la participación de menores de edad en hechos delictivos. En el primer capítulo se presentaron estadísticas de la Suprema Corte de Justicia en las cuales se observa que si juntamos las causas asistenciales con la de menores víctimas, éstas representan casi el doble que las causas penales.<sup>16</sup> Por ejemplo para el año 2002, las causas penales ascendían a 27.767 y la suma de asistenciales y víctimas llegaba a 53.015 causas. Sin embargo, en este discurso todas las preguntas referidas a la competencia del tribunal, a los aspectos a reformar, en suma, todo el discurso se construye a partir de la centralidad otorgada a los ilícitos de los menores:

*“ toda la actividad que de ilícita puede tener el quehacer delincuencia de los menores en esa lamentable carrera de horror que se está viviendo en este momento en la Argentina” (Juez 2)*

*“hay pobreza que son honrosas, que son dignas y hay otras que caen en el marco de la actividad delictiva, después se hace muy difícil la recuperación, muy difícil, los institutos se sabe que son academias del delito” (Juez 2)*

Ante la pregunta por el objetivo de la intervención judicial el énfasis está puesto en la defensa de la comunidad, en el mantenimiento del orden social mediante la protección y neutralización de aquellos seres indefensos pero que al mismo tiempo son peligrosos. Esto es posible porque la reeducación, la resocialización en los institutos de menores constituye el objetivo hacia el cual se dirige la actividad judicial. Esta función específica de los institutos de menores, es pensada como la formación de uno de los elementos constitutivos del estado: la población. Claro que esta

---

<sup>16</sup> Existen numerosos autores que agrupan las causas asistenciales y las de menores víctimas y construyen una categoría a la que denominan “asistencial”.

formación transcurre por un canal institucional diverso al de los niños “no indefensos”, pero esto no aparece en el discurso. Se borran los posibles conflictos entre los derechos de los niños y los del estado, una concepción organicista de la sociedad enmarca este discurso:

*“ la política es eso acercar la libertad con la autoridad esa es la finalidad que debe tener el que ejerce funciones como mandatario.....si eso fracasa de ahí tenemos el principal elemento de descomposición....la sociedad advirtiéndole esta fenomenología nefasta se hace individualista al no confiar en las instituciones se empieza a resquebrajar el tejido social se alejan cada vez más del cuerpo de la comunidad, de las preferencias valorativas, se descompone la sociedad y el otro elemento que compone el tríptico es la familia que adopta las patologías más diversas”. (Juez 2).*

En el marco de esta concepción de la sociedad, la intervención del juez de menores pasa estrictamente por poner a los niños y adolescentes en riesgo en situación de ser reeducados, siendo el recurso a la internación el privilegiado en este discurso. Si el juez bombero se definía a partir de una visualización del proceso de empobrecimiento y exclusión social creciente que viene sufriendo la Argentina que reclamaría su presencia, el discurso de la criminalización de la competencia minoril se construye en otro contexto. La crisis argentina es eminentemente una crisis de valores que provoca inseguridad material, reducir esta inseguridad pareciera ser el objetivo del juez de menores, a través *del control, seguimiento, prevención y represión legal de los delitos de los menores (juez 1)*. En este discurso y en clara contraposición con el anterior el acento se desplaza desde el riesgo de los niños que llegan al tribunal de menores, hacia un estado de riesgo generalizado que vive la sociedad. Las soluciones pasarían por una reorganización disciplinaria de toda la vida social, por el establecimiento de un orden normativo que no existe. También en este discurso, al igual que en el caso del juez bombero, la autocrítica pierde importancia frente a la centralidad de los problemas macro-sociales. Los intentos de reforma son definidos como pretextos y pérdida de tiempo, más que cambiar la vieja ley del Patronato de menores se trata de poder cumplir adecuadamente con ella.

### *El juez de menores como un aplicador de normas.*

Este tercer campo semántico, refiere a un discurso crítico de la situación actual en los tribunales de menores de la provincia de Buenos Aires. Las críticas se focalizan en la atribución de amplias facultades para los jueces y en la existencia de una competencia ampliada que le permite un amplio margen de arbitrariedad al juez en la disposición de los menores de edad. En este discurso el juzgado de menores tal como lo concibe la ley 10.067 actualmente vigente, se aparta de las funciones propias del poder judicial, como es la resolución de conflictos entre derechos, para transformarse en contenedores de una situación social explosiva. A partir del concepto de asistencialismo se define negativamente la gestión de las causas asistenciales por parte de los tribunales de menores. Ésta es presentada como judicialización de las víctimas de la pobreza, de situaciones familiares conflictivas, a quienes se les responde con un castigo. En este discurso emergen los costos de la gestión judicial de la niñez en riesgo, que consiste en incluir en un procedimiento jurisdiccional al tutelar del bien jurídico que se desea proteger. Así se enuncia aquello que sacrifica la protección:

*“Internar es privar de la libertad directamente sea asistencial o penal, un chico que no está con su familia está privado de su medio natural” (Jueza 2)*

En este discurso se convoca el riesgo o el peligro que es capaz de producir el pronunciamiento de un diagnóstico de riesgo por parte de un juez de menores: la pérdida de otro bien jurídico como es la libertad o el derecho a no ser separado de su familia de origen. Esto último se presenta bajo el signo de la “naturalidad” del medio familiar. En este discurso, como en los otros existen víctimas, pero en este caso el propio proceso judicial se convierte en victimario. Por el contrario, se oscurece la atribución de responsabilidades: ¿quién o quiénes son los responsables de esta situación social victimizante? En este discurso se enfatiza en la responsabilidad del estado por el riesgo de los niños y el juez se constituye en la posición de interpelar a las instituciones públicas para que asuman su responsabilidad. En este marco aparecen como prioritarias las tareas de desligar a los juzgados de sus funciones supuestamente “protectoras” y fortalecer sus capacidades como aplicadores de la ley en los casos de menores que ven controvertidos o vulnerados sus derechos y en los de menores infractores de la ley penal. Se apela a una reingeniería institucional

en el sentido del afianzamiento de la división de poderes típica de la teoría republicana del gobierno:

“ E: si tuvieras la posibilidad de hacer reformas ¿ a qué apuntarías?

A: En la parte penal es necesario hacer reformas para la igualdad en el debido proceso, que esté representada la posición de la víctima, que exista el defensor y el fiscal de menores y un juez imparcial, porque en este momento no existe un juez de menores imparcial” (Asesora de Menores).

Todo proceso judicial representa una confrontación de puntos de vista singulares, inseparablemente cognitivos y valorativos, que concluye abruptamente mediante la sentencia solemne enunciada por una autoridad social representante de los intereses sociales (Bourdieu:1996;) Sin embargo esta bilateralidad, esta lucha entre miradas diferentes no existe en el fuero de menores. La desigualdad de condiciones en que se encuentran los menores se patentiza en la inexistencia de dos puntos de vista debidamente asesorados y en igualdad de posiciones en pugna, que deviene en la inexistencia de un tercero imparcial: el juez. En este discurso se deplora de una ley que define al asesor de menores “*en su carácter de representante del menor y de la sociedad*” (artículo 2, inciso b, decreto-ley 10.067). En esta definición operan una serie de invisibilizaciones. En primer lugar al erigir al asesor como representante de la sociedad, se concibe a ésta última como un todo armónico, se ocultan los conflictos que articulan la vida social y cuya existencia anula la posibilidad de que alguien pueda erigirse como el depositario de esta pretendida univocidad. Pero esta “única voz” parece un privilegio exclusivo de los niños: el niño necesitado de protección se define a partir de la identificación de sus derechos con los del estado, entre el estado-padre y el hijo no hay división posible: todo es continuidad. Por ello el agente estatal que defiende al niño también representa a la sociedad, que por supuesto, sólo quiere lo mejor para él.

En segundo término, se construye al niño en una comunión de intereses con la sociedad, o mejor dicho con este punto de vista que es el estatal. Si no existen conflictos entre el niño y el estado es porque el niño es imaginado como pura potencia, como destino nacional que será formado a través de las instituciones de socialización que darán “forma” a esta sustancia plástica. La denuncia de una racionalidad institucional que borra al niño como sujeto con atributos anteriores

e independientes de la existencia de un adulto “protector”, se convierte en central en este imaginario del juez como “aplicador” del derecho. Derecho que alguien (un niño) tiene y que genera obligaciones para las instituciones públicas. En este discurso, a diferencia de los anteriores, se argumenta a favor de cambiar los mecanismos institucionales de intervención. El papel que juega la escena de la crisis social no inhibe de criticar el estado actual de la justicia de menores y de identificar a ciertos elementos internos (a la justicia de menores) como negativos.

### Los usos de la ley.

En el discurso jurídico uno de los mecanismos de censura centrales está constituido por la distribución de los roles, a partir de los cuales se estructuran las formas de ejercicio del poder. El discurso jurídico ordena las jerarquías e identifica a aquellos legitimados a decir “que cosa es el derecho”. (Entelman:1982;96). Es por este motivo que interesa analizar los discursos de aquellos sujetos situados en la posición de decir cuándo un menor está abandonado, cuándo se encuentra en riesgo, cuál es la medida adecuada para protegerlo. Si partimos del reconocimiento de la dimensión interpretativa de la tarea judicial, siguiendo el planteo de Robert Cover (Cover: 2002) se asume que el significado del derecho está determinado por los compromisos interpretativos puestos en juego. Entonces es necesario pensar al derecho, concretamente las normas dedicadas a la infancia en sintonía con aquellos discursos que lo sitúan y le dan sentido. “Todo precepto legal exige ser situado dentro de un discurso –tener una historia y un destino, un comienzo y un final, una explicación y un propósito. Y toda narración exige imperiosamente un sentido prescriptivo, un mensaje moral.”(Cover:2002;16)

En los distintos discursos se construyen diversas relaciones entre la actividad de un juez y la ley. Aún frente a aquellas representaciones sociales del juez como un aplicador del derecho, se actualiza una creencia: la necesidad de proteger a la infancia a partir de reglas precisas, límites legales. Este recurso a la superioridad de la ley no inhibe al juez de su compromiso interpretativo: por más explícita que parezca una regla de derecho siempre tendrá que haber un sujeto que defina un caso particular dentro del ámbito de aplicación de una norma general. En este discurso el horizonte de la actividad judicial es el respeto y restitución de derechos. A diferencia de los otros discursos aquí emerge el niño como sujeto de derechos, a defender, ya no se trata de defender

criaturas desamparadas, de curar heridas, proteger niños, sino de proteger derechos de un niño. El niño y adolescente es construido como un sujeto de derechos ¿cuál es el sentido de esta definición? Primero, no se trata de preservar a un ser desvalido e incapaz por su condición de tal sino de la especialidad de un fuero que interviene en razón de la edad de los titulares de estos derechos. Luego, decir que alguien tiene un derecho implica como contrapartida enunciar que alguien tiene una obligación. Este discurso que reniega de lo ilimitada de la competencia del juzgado de menores es fundamentalmente un discurso del deber ser, que construye su relato en la permanente confrontación entre el ser actual y el ansiado tiempo del deber ser. La recurrente apelación a la falta de garantías jurídicas para los menores de edad en conflicto con la ley penal , y al deslinde y limitación de las facultades de los jueces de menores no debe inducirnos a pensar en la posibilidad de alcanzar un estado ideal de clausura interpretativa. Aún en este discurso subyace una construcción ideal de la justicia que excede la ciega aplicación de la norma:

“ te puedo decir que nosotros hemos trabajado más o menos siempre a conciencia, incluso en épocas muy terribles de nuestra sociedad donde los niños fueron desprendidos de sus padres por razones políticas. Nosotros como tribunal de menores aún sin Convención, sin nada, logramos buscar a las familias de origen. Tanto la doctora como yo estuvimos en esa época, no nos fuimos e hicimos frente a muchas situaciones no tuvimos miedo y nos fue bastante bien en esa época sin demasiados recursos legales”  
(Jueza 2)

En este pasaje se define una relación con la propia actividad, con el “ser juez de menores” que excede el cumplimiento automático de la ley (“sin Convención , sin demasiados discursos legales”) en la cual el origen o la motivación de una decisión judicial se expresaría como la consagración, la legitimación de unos principios que están en otro lado. En este discurso pareciera que ese otro lado, esta constituido por la existencia de derechos humanos al margen del tal o cual ordenamiento vigente, que habitan en la “conciencia”. Así, la sustracción de niños es un hecho condenable que hay que reparar en la medida de lo posible al margen de la existencia o no de un código que lo tipifique como delito.

En el discurso del juez bombero, también la relación con las normas demanda cierto ejercicio interpretativo, se podría decir que es un vínculo dotado de cierta contingencia:

“En el tribunal estamos trabajando muy bien en equipo, yo soy partidaria de la interdisciplina porque creo que en menores es fundamental la articulación entre la parte asistencial, la parte del equipo técnico y la parte jurídica yo creo que acá durante muchos años se ha trabajado de forma casera improvisando, si bien este es un fuero que da mucha amplitud para la creatividad yo creo que no nos tenemos que apartar del marco jurídico, tenemos mucho marco jurídico” (Jueza 1)

Este marco jurídico del cual “no nos tenemos que apartar” invita al despliegue de la creatividad: en esta invitación se exagera la centralidad de la figura del juez de menores en la resolución de problemas familiares, de conflictos sociales. Se deplora de un pasado de improvisación en la gestión de la protección infantil, ya que se debe ser juez de menores sin alejarse de la ley y, al mismo tiempo, siendo creativo. En este discurso si bien se reflexiona acerca de las carencias y problemas del fuero de menores se construye una imagen complaciente, en la cual no hay espacio para la autocrítica ni para reformas legales. La ley cumple la función de marco, pero la personalidad del juez de menores es la que estaría determinando la diferencia.

El juez policía se presenta a sí mismo como un servidor del derecho: “ la palabra de la ley es si se quiere la orden que recibe quien debe cumplirla” (juez 1). Pero al avanzar en la comprensión integral de este discurso emerge el carácter creativo de la actividad judicial, creatividad que lo ayuda a posicionarse estratégicamente para mantener la vigencia del decreto-ley 10067, en el entendimiento de que se quitan de la esfera del poder judicial facultades que le son “propias”. De este modo se observa que el derecho puede ser pensado como un puente que comunica una realidad pasada o actual con una alternativa imaginada. (Cover:2000) Alternativa imaginada que más, que el producto de una actividad solitaria, se encuentra profundamente vinculada con las luchas que se están librando en el campo de protección a la infancia en riesgo.

Las imágenes asociadas a los derechos del niño y la construcción de nuevos significados de la protección a partir de la Convención Internacional de los derechos del niño constituyó uno de los aspectos a indagar en estos discursos. Los resultados refieren una opinión unánime de aprobación a los contenidos doctrinarios de la Convención. Sin embargo, aparecen discrepancias en cuánto a la valoración de los cambios que este nuevo cuerpo normativo ha introducido en la manera de

pensar y actuar en la práctica cotidiana. En algunos casos la Convención no aparece como incompatible con el actualmente vigente decreto ley 10067, solamente lo complementaría y perfeccionaría en términos declarativos, pero no existe conflicto, ni por supuesto cambio. En otros discursos la Convención se asimila al trabajo “a conciencia”, en “proteger a los niños”. Los cambios conceptuales aparecen claramente en el caso de los menores de edad en conflicto con la ley penal, quienes requieren de garantías legales, fundamentalmente la bilateralidad en el proceso (que defensor y fiscal se constituyan como partes separadas). No logran emerger en estos discursos propuestas de cambio, de introducción de nuevas prácticas con respecto a los niños con causas asistenciales. Las referencias más concretas son aquellas alusivas a “que existan políticas públicas preventivas”, que “no se vulneren sus derechos”, o que “no se judicialice lo social”. Todos estos discursos argumentan a partir de la consideración de la complejidad de lo social, no existen planteos que asignen a los cambios institucionales la capacidad de generar, por sí solos, cambios en el respeto a los derechos de los niños. Así, se incluye la necesaria interdependencia entre la problemática de la infancia en riesgo y otros procesos sociales, fundamentalmente la crisis socioeconómica. Pero al mismo tiempo, se observa cierta impotencia para pensar en prácticas alternativas y en la construcción de nuevas significaciones sociales asociadas a los derechos de la infancia. En un solo entrevistado se puede reconstruir un discurso en el cual se diferencia tajantemente entre antes y después de la Convención, y en el cual su vigencia se distingue de las buenas intenciones. El cambio se sintetiza en este discurso en dos grandes principios, por un lado el interés superior del niño constituye el eje fundamental de las intervenciones judiciales y, por el otro, la búsqueda de mantener al niño en el marco de su familia de origen.

El trabajo con las entrevistas ha permitido concluir que el término “derechos de los niños” ha ganado amplia legitimidad entre los jueces del fuero de menores. El lenguaje de los derechos opera como el interdiscurso dominante capaz de aglutinar una serie de significados positivos. Sin embargo a la hora de analizarlos, observamos que muchos de ellos remiten a ciertas imágenes de la protección presentes desde principios de siglo en las prácticas del fuero. La protección de los niños (y nos sus derechos), la vigencia de la metáfora de la resocialización, nos hablan de la existencia de una nueva etiqueta para viejas prácticas. Al reconstruir los campos semánticos se vuelve dificultoso encontrar la especificidad que aporta al trabajo judicial este nuevo concepto,

expresado por ejemplo en la nula presencia de referencias a la palabra del niño en el proceso o a la necesidad de otorgar a los sujetos encausados recursos legales con los cuales poder revisar y apelar las decisiones que afecten sus vidas (tanto frente a un juez de menores como frente a una autoridad administrativa).

Como se ha visto en las páginas anteriores, más que un discurso homogéneo, un significado socialmente construido unitario y compacto de la protección de la infancia en riesgo, se han podido identificar tres campos semánticos. Las características de la muestra no nos permite hablar de una tipología, sin embargo nos ayuda a conocer ciertas heterogeneidad en la construcción de una trama discursiva y en el significado de la protección y del riesgo. También han aparecido distintos repertorios, ya no sólo de interpretación sino también de acción, profundamente ligados a las representaciones sociales a partir de la cuales definen la tarea de un juez de menores. El concepto de representación social (Jodelet:1989;36) y Abric( Abric:1987;64) nos permite asir a estas formas de conocimiento elaboradas en el seno de un grupo que concurre a la construcción de una realidad común. Toda representación se encuentra determinada tanto por efectos de contexto tanto discursivo como social. De este modo se entiende como las representaciones sociales de juez identificadas en estos discursos: bombero, policía y aplicador de la ley, son capaces de explicar el tipo de intervención privilegiada en cada discurso. De este modo los jueces de menores impresionan más que como autómatas que subsumen la ley aplicable al caso, como intérpretes que citan, critican o completan la ley a partir de aquello que creen que es la función de la justicia de menores. Así, en los discursos relevados, se revela un uso de la ley, más que una ciega aplicación. En el próximo apartado se explorará la tecnología judicial de atención a la infancia en riesgo en el momento de su funcionamiento. El objetivo es la descripción de los mecanismos institucionales y el análisis de las relaciones entre saber y poder en la justicia de menores.

#### IV.- ¿Cómo se construye un diagnóstico de riesgo en el expediente judicial?

En este apartado se trabaja en el análisis de un expediente judicial. El material recabado para esta investigación fue aportado por uno de los secretarios de un juzgado de menores entrevistado, previa ocultación de todos los registros de identidad de las personas involucradas en los expedientes. La muestra fue seleccionada por el propio funcionario judicial, con lo cual surge un sesgo en el tipo de información que se analizará. Como el propio funcionario lo expresó se trata de una actuación auto-evaluada como positiva. Este hecho torna más interesante su análisis ya que aporta un parámetro para definir aquello que es aceptado como una intervención positiva en el fuero de menores.

Se trata del caso de Ana de 15 años de edad quien acude en compañía de su madre ante el juzgado de menores, un día de mayo del año 2000 pidiendo ayuda ya que ambas afirman que mantienen una relación conflictiva entre sí. La primer hoja del expediente firmada por el secretario del juzgado describe que en un momento de la entrevista la joven irrumpe en llanto y dice que no quiere vivir más con su madre y que prefiere ser internada en una institución. Ana expresa que ha intentado suicidarse por esta situación. Por ello, el secretario califica a la situación como urgente y pide una entrevista para ambas con la psicóloga del juzgado. Luego, el juez ratifica este pedido en la segunda hoja. Hasta aquí, es posible observar que los propios interesados mueven a la maquinaria judicial a partir de un pedido de ayuda: por el momento no aparece rastro alguno de derecho controvertido, más bien se trata de una situación conflictiva entre madre-hija ante la cual, y en procura de una solución, se acude a un juzgado de menores. Una vez expresada la demanda dos funcionarios judiciales entrevistan en forma conjunta a madre e hija y a partir de la información recabada, el juez ordena ese mismo día la internación de la joven en un instituto para adolescentes con causas asistenciales. Ana ya es la titular de una causa asistencial. Resulta de interés reproducir la resolución de internación de la joven:

“La Plata, 24 de mayo de 2000

-----AUTOS Y VISTOS: Atento a las constancias de autos, lo informado por la psicóloga del tribunal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 inciso de la ley 10067, con citación de la Asesora. RESUELVO: disponer la internación de la menor x en un instituto acorde a sus características y a disposición de este tribunal. Notifíquese .Oficiese. Designese la audiencia del día 29 del actual a las

10.00 HS. Para que comparezca la menor, la progenitora, la abuela, a efectos de prestar declaración. Notifíquese.

En la orden judicial con la cual la joven ingresa a la institución se dice que Ana se encuentra a disposición del juez de menores de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 10067, por ello nos enteramos que la internación obedece a que se ha calificado su situación como de peligro o abandono material o moral: los presuntos intentos de suicidio y el estado de angustia se expresan en páginas posteriores como los elementos a partir de los cuales se comienza a construir el diagnóstico de riesgo. Otros elementos que surgen en el texto citados son palabras como notifíquese, oficiése, que indican los efectos pragmáticos de este discurso que al tiempo que es escrito instituye a una adolescente como un sujeto a disposición de un juez de menores, ordena a determinados empleados judiciales notificar a sus familiares, trasladar a la joven hacia un instituto. Otro proceso que inicia es el examen institucional sobre las capacidades familiares de contención de la menor. Otro personaje que entra en escena a partir de esta resolución es la policía: por intermedio de la institución policial serán informados los familiares de la joven acerca de las novedades de la causa, se trasladará a ella misma desde el juzgado hacia un instituto de menores. De este modo se puede observar cómo la situación de riesgo convoca una serie de mecanismos institucionales a los fines de cumplir el mandato de este juez.

En el informe pericial del día 26 de mayo la psicóloga recomienda la conveniencia de mantener a la menor internada: el gran motivo radica en la incapacidad de la madre para contener y controlar a su hija evidenciado en el presunto intento de suicidio que, la madre niega. Recomendaba terapia familiar que la familia acepta y que comienza a la brevedad. Unas hojas más atrás, nos enteramos que la madre fue llamada a declarar dos días después de la internación de Ana y que en esta oportunidad explicita el verdadero motivo de la presentación al tribunal: la joven mantenía una relación amorosa con un medio hermano por parte de padre. Interesa reproducir parte de este texto para detenernos en una especificidad de todos los escritos que integran el expediente: la palabra de los declarantes siempre se encuentra mediatizada por la interpretación de un funcionario judicial. Así, aquello que será relevante para el futuro de la joven se expresa a partir de los fragmentos escritos de un funcionario judicial: en este recorte se expresan los ejes

alrededor de los cuales se detiene la atención del dispositivo judicial en su tramitación de la causa: cómo construyen el diagnóstico, a partir de qué indicadores, con cuáles procedimientos.

La escritura de los informes que constituyen el expediente son reveladores de cierta racionalidad subyacente, en lo que dicen pero también en lo que no dicen se evidencia cierta manera de operar con los sujetos y definir la situación de los niños y jóvenes. Las citaciones por intermedio de la policía, el registro escrito de las actuaciones y sobretodo la posibilidad de respaldar con la coacción física las palabras escritas detrás del RESUELVO, recuerdan que estamos frente a un órgano de la justicia, frente a la autoridad de la ley. Sin embargo los temas de los cuales se hablan, los objetos de controversia cabalgan a medio camino entre el confesionario y la consulta psicológica:

“En la audiencia del 26 de mayo del 2000 comparece ante S.S. --, argentina, soltera de 33 años de edad, alfabetada, enfermera, domiciliada en -- MANIFIESTA; que es madre de la menor Ana--.que el verdadero motivo de la presentación de la dicente con su hija el día 24 del corriente, fue que la dicente pudo comprobar las sospechas que tenía desde marzo de que su hija mantenía una relación amorosa con su medio hermano X.---.Que la menor siempre ha sido tratada con demasiado afecto y tolerancia. Que al comprobarse lo narrado la menor no quiso permanecer en su hogar para no reconocer su falta y pidió ser internada o vivir con la abuela paterna...Que no es cierto que su hija haya intentado suicidarse y que esta dispuesta a someterse a tratamiento psicológico juntamente con el grupo familiar. PRESENTE en la misma audiencia comparece X, padre de la menor, argentino, casado, de 56 años, actualmente desocupado. EXPONE: Que se separó de la madre hace 13 años, manteniendo contacto permanente con sus hijos y siendo convocado por la madre cada vez que tenía problemas con alguno de ellos-Que siempre reprochó a la madre una sobreprotección con respecto a la menor.....”

El documento completo consta de 2 hojas pero se han seleccionado los fragmentos más significativos en función del aspecto que se desea destacar: si no fuera por las palabras descarnadas y opacas del ritual judicial los temas discurren por los problemas vinculares de una pareja divorciada con hijos. La presencia del juez y de la secretaria como sujetos interrogadores desaparece en el texto, el narrador es construido como un tercero que sólo escucha y registra lo que dicen los comparecientes. La presentación de aseveraciones y negaciones nos ofrece una estructura narrativa en la cual podemos adivinar un interrogatorio. Interrogatorio en el cual la

palabra de quién o quienes preguntan se presupone. Se callan las interacciones, no es posible reconstruir los efectos del modo de preguntar sobre la respuesta, de la dinámica de la entrevista: pareciera que la presencia del juez y de la secretaria están borradas en esta selección de lo digno de ser escrito, y por ende instituido como relevante. Y están borrados porque son omnipresentes: el proceso judicial reclama una autoridad que es constitutiva de la palabra del interrogado: el sujeto interrogado, indagado en su aspecto psicológico, social, corporal, no es capaz de pronunciarse sino es por intermedio de un iniciado en la ceremonia judicial.

En el expediente se suceden un conjunto de testimonios de las mismas personas: Ana, su madre, su padre, las abuelas, el medio hermano. Estos sujetos son entrevistados varias veces en distintos momentos y por distintas personas. Cada vez que un suceso relevante ingresa al expediente, se sucede una nueva ronda de entrevistas: la búsqueda de la verdad del caso se construye como un rompecabezas cuya visión de conjunto corresponde al juez.

Es importante tener en cuenta que a los 20 días de iniciada la causa tanto Ana como su madre manifiestan que quieren volver a vivir juntas. La joven presenta reclamos de sentirse angustiada en la institución, reclamos que no surten el mismo efecto que su primer reclamo. Si bien el juzgado responde inicialmente a una demanda de la joven por ser internada, una vez invocada la intervención del juez de menores la libertad de Ana dependerá del diagnóstico judicial acerca de su situación. Todo el expediente puede ser leído a través de la siguiente pregunta: ¿es esta familia capaz de gestionar el riesgo de Ana? A pesar de los insistentes pedidos de madre e hija por volver a vivir juntas, tendrán que pasar varios meses para que esto se concrete ya que los psicólogos de la causa coinciden en las dificultades de la madre para contener a Ana y ponerle límites. Los límites a la libertad ambulatoria de Ana, a los controles sobre sus visitas y la permanente coacción sobre sus reclamos expresados en las audiencias y a veces por medios escritos, expresan el costado violento y coercitivo de la protección judicial. La violencia presente, actualizada en la intervención y en la propia palabra de la adolescente nunca es problematizada por los informes psicológicos: el informe pericial (tanto psicológico como social) elude a la institucionalización como un riesgo en sí mismo.

Otro aspecto interesante que emerge de la lectura del expediente refiere a la permanente apelación a la autoridad de la ciencia antes de tomar alguna decisión. Si definiéramos al expediente como un conjunto de imágenes y relatos a ser interpretada por el juez, entre la variedad de piezas a unir se encuentran textos sellados por la autoridad de la ciencia: el informe psicológico, el médico, el del trabajador social. Estos discursos participan de un doble carácter, ya que portan la sabiduría de la ciencia al tiempo que son empleados del poder judicial. Los informes de estos peritos ocupan en el expediente el carácter de insumos para las palabras del juez, parecen responder alguna pregunta que, como en el caso de los interrogatorios antes mencionado, nunca es escrita. En el expediente de Ana los informes psicológicos ocupan un lugar central, existen informes de una psicóloga del tribunal, otros de las psicólogas de cada uno de los institutos en los cuales estuvo internada, también de psicólogos de un centro de asistencia familiar al que acude la familia en pleno por disposición del tribunal. En todos estos informes aparecen como características comunes la omisión de un registro acerca de las metodologías de intervención o evaluación, enfoques teóricos utilizados, en suma una explicitación acerca de la posición del profesional interviniente en la producción de los datos. En el expediente judicial se demandan certezas al saber psicológico: el conocimiento científico como construcción provisoria, conjetural y colectiva no tiene espacio en este ritual de la verdad. Estos informes suelen terminar con una recomendación al juez en vistas al diagnóstico realizado que en general asume la forma de una descripción:

*“Ana se presenta a la entrevista con ansiedad, planteando el deseo de egresar; allí centra todo su discurso.... La madre por momentos se muestra confusa e indecisa con respecto a su hija, excusándose en que fue su madre quien crió a sus hijos, pues ella trabajaba. No existe diálogo con Ana. Si bien le gustaría que regresara al hogar, no se siente en condiciones de contenerla, controlarla.... Por todo lo expuesto se sugiere que la menor continúe internada y con los tratamientos psicológicos iniciados”*

El saber psicológico es legitimado como una palabra instituyente de certezas en el expediente, su función es mostrar la verdad al juez en aquellas dimensiones de lo humano que él no domina: estas verdades parciales aportan a la conformación del diagnóstico final, que en última instancia sólo depende del criterio del juez ya que estos “consejos” no obligan al juez a decidir en el

mismo sentido. Este expediente es claro testimonio del arbitrio judicial para sopesar estas recomendaciones. Todos los psicólogos se unen para emitir un informe en el cual recomiendan al juez prohibir las visitas de la pareja a Ana (su medio hermano) al instituto en el cual se encuentra internada, ya que aunque no existe ningún impedimento legal para esta relación, los profesionales la consideran antiética, por violar un consenso cultural. Además acuerdan en la necesidad de que Ana permanezca internada ya que su familia no aparece capacitada como para protegerla y controlarla. Sin embargo, el juez en ningún momento prohíbe estas visitas y finalmente tras 4 meses de internación decide su egreso junto a su madre.

El rápido repaso por este expediente permite inferir una serie de conclusiones respecto al cálculo y gestión del riesgo en sede judicial. Por un lado el efecto “trampa” de este dispositivo que aún en los casos en que su actuación es motivada por la demanda de los interesados, retiene a los menores de edad aún contra su voluntad y la de sus padres. La identificación de una situación riesgosa constituye la gran justificación de la internación. De este modo la internación aparece como el único instrumento disponible para atender situaciones de riesgo. Segundo, la incorporación del saber psicológico en el expediente en la forma de recomendaciones al juez, establece una relación peculiar entre saber jurídico y psicológico: el primero reclama al segundo una especie de certeza, una confirmación de sus procedimientos que sin embargo en nada parecen obligar al juez. Como ya se ha dicho las consideraciones teórico-metodológicas no figuran en el expediente (seguramente se conservan guardadas en las oficinas de los peritos). Tampoco se observa alguna discusión o diálogo entre puntos de vista disímiles, por ejemplo entre los distintos profesionales intervinientes. El expediente no parece ser el lugar en donde se ponga a discutir cuándo y cómo gestionar el riesgo de Ana, sino que el interrogante parece ser: dado que Ana está en riesgo a causa de “los desdibujados roles familiares” ¿cómo lograr que esta familia se adecue funcionalmente y la contenga? La impresión de estar frente a un problema de índole terapéutico, se confunde luego, con la defensa de cierto consenso cultural. Defensa que aglutina a los padres de Ana, a los peritos psicólogos y terapeutas de la familia:

“Frente a la situación de incesto planteada, se centralizó la audiencia en la necesidad de que el tribunal se expida sobre la problemática y la continuidad o no de las visitas de su hermano, los profesionales

firmantes, expresaron que de continuar favoreciéndose tal relación, nos inhibiríamos del tratamiento por considerar antiética la continuidad de la situación”

El desenlace final de la causa, en la cual el juez nunca prohíbe estas visitas refleja, por una lado el desplazamiento del riesgo desde el temor a un suicidio hacia el mantenimiento de una relación contraria a la norma cultural . Otra ética, sin embargo es la que prevalece ya que el juez decide un egreso de Ana con su madre. Egreso que será supervisado por casi 2 años a través de la visita del asistente social a la residencia de madre e hija. La relación con su medio hermano desaparece del expediente, salvo en un informe de la asistente social que refiere que no mantienen relación alguna. Es interesante también detenerse en el análisis de los significados que los propios demandantes de ayuda (Ana y su madre) asignan a la intervención de la justicia de menores. Para su madre el juez de menores parece ser una autoridad legítima para imponer límites a la conducta de su hija. No aparecen en el expediente demasiados indicios para inferir si la madre considera que su hija está transgrediendo la moral o la ley, sin embargo es sintomático como algunos de los actores institucionales involucrados en el expediente, consideran legítimo valerse de la autoridad judicial para validar consensos morales frente a los cuales la ley ha permanecido callada.<sup>17</sup>

Legalidad y moralidad dos ámbitos que parecen confundirse en la justicia de menores. La madre reclama de un tercero capaz de restaurar un orden quebrantado: apelación en la cual se inscribe una imagen del juez como autoridad moral y consejero. En el caso de la adolescente parece buscar amparo y comprensión en la intervención de la justicia, la internación es convocada como un derecho a encontrar ayuda, derecho que luego se revela como una obligación coactivamente garantizada. Todos estos significados inscritos en esta presentación espontánea ante un tribunal dan cuenta de ciertos significados compartidos que asemejan la relación entre estado y ciudadanos, con la relación entre un padre e hijo. Paternidad asumida en el seno de un dispositivo institucional cuyos mecanismos y técnicas lubrican y convalidan el despliegue del arbitrio personal.

---

<sup>17</sup> Es importante señalar que la ley argentina refiere únicamente a este tema al establecer la condición de hermanos como un impedimento para el matrimonio civil.

#### **IV.- Conclusiones.**

En este capítulo hemos trabajado con dos tipos de datos, por un lado discursos y por el otro con la descripción del funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales a partir del análisis del expediente judicial.

Los discursos analizados permiten discutir con ciertas caracterizaciones de los jueces de menores como una corporación unitaria, como un todo homogéneo. Por el contrario, los distintos discursos sobre el significado de “ser juez de menores” los coloca en distintas posiciones cognitivas y valorativas respecto a los problemas y necesidades de la protección de la infancia en riesgo. Por ejemplo, en el caso del discurso que hemos denominado “el juez como aplicador del derecho” la concepción del niño como sujeto de derechos, se expresa en la adopción de medidas judiciales de amparo en las cuales se reclama a las instituciones públicas (de salud, asistencia social) que efectivicen derechos. Medidas que no aparecen en los otros dos discursos analizados. También es notoria la diferencia entre la subestimación que el juez policía realiza de las medidas alternativas a la internación como el trabajo en red y con las familias y el lugar privilegiado que ocupan estas tecnologías en los otros dos discursos.

A partir de estos datos, la clasificación del niño en riesgo se ha revelado como una tarea eminentemente interpretativa que despliegan los jueces de menores, pero que como parte esencial de un dispositivo se construye a partir de ciertos constreñimientos y habilitaciones institucionales. Un dato clave que surge de las entrevistas, es el tema del acceso a la justicia de menores. Los casos que llegan a los juzgados de menores, son aquellos protagonizados por los niños y adolescentes más expuestos a la mirada del control social, fundamentalmente los pertenecientes a los sectores populares y a la clase media empobrecida. A pesar de haber registrado distintas representaciones sociales inscriptas en los tres discursos identificados, a la hora de cerrar este capítulo quisiera remarcar la vigencia y centralidad que sigue teniendo el imaginario del juez padre en la construcción de subjetividades: subjetividades de protegidos y de protectores. El imaginario del juez padre con sus dos caras la protección y el control, es constitutivo del proyecto Patronato de Menores, tal como fue concebido en las primeras décadas

del siglo XX. El análisis realizado, si bien nos inhibe de realizar afirmaciones temerarias acerca de la inmutabilidad de las prácticas y discursos en el fuero de menores, nos permite encontrar en el presente “las ruinas simbólicas del pasado”. (Castoriadis:1983; 41). Al intentar integrar el análisis de las entrevistas con el estudio del expediente, la tecnología judicial de protección a la infancia en riesgo se comprende la inercia que siguen ejerciendo las significaciones<sup>18</sup> sedimentadas por la pesada herencia del patronato de menores, y por la lógica de funcionamiento de estas instituciones. Castoriadis distingue entre lo instituido que son aquellos significados que ha quedado fijados, cristalizados en las instituciones y que organizan el ser y el deber ser social. La tecnología de interrogatorio en la construcción de las causas, la persistencia de la solución internativa, la invisibilización de la palabra del niño y el predominio de cierta racionalidad pericial, más que de construcción interdisciplinaria, son expresiones de la vigencia del imaginario del “juez padre”. Niños y familias que acuden por cuenta propia a “pedir ayuda” o que son conducidos por la policía ante alguna denuncia. Sujetos que se someten o son sometidos a las prescripciones judiciales, pero que rara vez, exigen el cumplimiento de derechos: más bien lo suplican confiando en la bondad de la autoridad paterna, no actúan como partes en un juicio asesoradas por un abogado y rara vez tienen la posibilidad de apelar estas decisiones, apelaciones que constituyen en el fuero una excepción. Por el lado de los “auxiliares del diagnóstico” como peritos psicólogos, asistentes sociales y médicos funcionan como una especie de cuerpo de consejeros encargados de aportar recomendaciones. Sin embargo, entre perito y juez existe una asimetría fundamental: sólo la voluntad del juez otorga entidad al dictamen pericial: no hay disputas entre puntos de vista, porque sólo un punto de vista tiene la capacidad performativa.

La presencia del juez de menores como padre todopoderoso capaz de otorgar certeza al riesgo de estos niños invisibiliza cuestiones tales como los parámetros a partir de los cuales decidir una internación, suspender la patria potestad a un padre, decidir el estado de adoptabilidad de un menor. Es importante no perder de vista que esta dimensión imaginaria no alude a un nivel psicológico de los sujetos, sino a significados sociales encarnados en la institución en sus mecanismos y prácticas cotidianas. Por ejemplo, si volvemos al expediente analizado, es claro

---

<sup>18</sup> Lo imaginario en la conceptualización de Castoriadis escapa a la lógica del reflejo y del instrumento y se vincula de manera compleja y conflictiva con los objetos “materiales” que contribuye a construir.

que la imagen del juez padre no es una invención de Ana y su madre, ni del propio juez, sino que constituye la matriz de significado que articula las relaciones sociales en el fuero.

No obstante la vitalidad del imaginario fundacional del Patronato de Menores, el análisis de los discursos también nos ha permitido conocer algunos discursos críticos de la imagen del juez-padre y nuevas tecnologías de gestión de la infancia en riesgo. Estos discursos parecen no haber podido consolidarse como un proyecto instituyente de un nuevo significado de la protección, y las diferencias parecen situarse más al nivel de un discurso teórico que a la constitución de prácticas alternativas. En el próximo capítulo nos dedicaremos al estudio de las instituciones de internación a fin de conocer los discursos sobre la protección inscriptos en la gestión cotidiana del riesgo infantil.

## **Capítulo 4: Como en tu propia casa.**

**Análisis de los discursos de los directores y personal de las instituciones de internación.**

## **I.-Introducción.**

En el capítulo anterior se exploró el proceso de construcción institucional de un diagnóstico de riesgo. Así, se accedió a una visión panorámica del tipo de hechos que llegan a la evaluación oficial y de los procedimientos a partir de los cuales son observados y analizados en el marco de la tecnología judicial de protección a la niñez en riesgo. En este capítulo se indaga en la gestión de estos casos de niños y adolescentes “en riesgo” que son derivados por un juez de menores hacia una institución internativa. Para ello, se analizarán los discursos de directores de estas instituciones y de personal de las mismas. Interesa conocer cómo narran su tarea cotidiana, cómo definen los objetivos institucionales y cómo evalúan su desempeño institucional.

Es importante volver a señalar que estas instituciones dependen de la Subsecretaría de la Minoridad (Ministerio de Trabajo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires) la cual se ocupa de su financiamiento y supervisión. Existen 2 tipos de instituciones: las estatales y las organizaciones no gubernamentales que tienen convenios con dicha Subsecretaría. Las primeras son dependencias estatales cuyos empleados son funcionarios y trabajadores del sector público y su funcionamiento se guía por las normas generales de la administración pública; las O.N.G.s, por el contrario, son organizaciones civiles o pertenecientes a comunidades religiosas que a partir de la firma de un convenio con el estado acuerdan asistir a los niños y adolescentes enviados por los jueces de menores, a cambio de una contraprestación monetaria. Es decir el estado provincial o bien gestiona por sí mismo el riesgo infantil o financia a instituciones de la sociedad civil.

La muestra con la que se ha trabajado para la realización de las entrevistas incluye una proporción similar de instituciones estatales y de O.N.G.s, sin embargo cabe afirmar que en la actualidad existen más chicos internados con causas asistenciales en organizaciones no gubernamentales que en las estatales<sup>19</sup>. Como se afirma en el capítulo 2 la incorporación de estas

---

<sup>19</sup> Si bien la Subsecretaría se comprometió a aportar estos datos que fueron pedidos mediante carta, nunca proporcionó esta información. Esta reticencia de las autoridades a presentar información aparece en la mayoría de las investigaciones dedicadas a este tema. Existen datos publicados para el año 1998 que hablan de 6.183 niños y adolescente asistenciales internados en O.N.G, frente a 893 en institutos oficiales. No obstante lo cual las autores del libro afirman respecto al 60% de las becas otorgadas a O.N.G se supone que cada beca representa 1 niño) las estadísticas no registran a qué cantidad de instituciones se destinaron. (Daroqui-Guemureman, La niñez ajusticiada, Del Puerto, Bs. As, 2001). En una publicación de Internet del año 2002, un funcionario de UNICEF refiere que ascienden a 12.000 los menores institucionalizados en la provincia de Buenos Aires.

organizaciones dentro de la asistencia a la infancia judicializada se transforma en una práctica masiva durante la década de 1990. Anteriormente existían asociación civiles que trabajaban con niños y adolescentes pero sin estar insertos dentro de un esquema organizacional dependiente del poder judicial y sin ayuda financiera estatal. Hoy por hoy una de las dependencias centrales de la Subsecretaría de la Minoridad es aquella destinada a las O.N.G.. Ante el impresionante aumento de las causas asistenciales la firma de convenios permite al estado gestionar de forma más económica la asistencia de cada niño, además de existir un fuerte consenso acerca de la conveniencia de una modalidad más parecida a la vida familiar (tal como la que desarrollan las O.N.Gs) para la crianza de los niños y adolescentes.

Antes de comenzar con el análisis se presenta un cuadro en el cual se ilustran algunas de las grandes diferencias en la modalidad organizativa que aparecen entre O.N.G.s y las instituciones estatales según los datos construidos a partir de las entrevistas.

#### Instituciones no Gubernamentales. Organización.

| <i>INSTITUCIONES</i>  | POBLACIÓN   | PERSONAL ENCARGADO DE LA CRIANZA.  | PERSONAL TÉCNICO.  | OTRO TIPO DE PERSONAL.                       |
|-----------------------|---|--|--|--|
| <i>Institución 1</i>  | 12 chicos de todas las edades y ambos sexos.  | Matrimonio a cargo   | No tienen personal técnico.  | Sin personal de ningún tipo.                 |
| <i>Institución 2</i>  | 45 chicos organizados en 3 casas de todas las edades y de ambos sexos.              | 1 matrimonios cada 20 chicos. Grupo de adolescentes que viven solos.           | Equipo integrado por 1 Asistente social y 1 psicólogo. Maestra de apoyo.                         | Personal directivo: director y Vicedirector. |
| <b>Institución 3.</b> | 25 chicos en 2 casas, los más chicos en 1 casa y los varones mayores de 16 en otra. | 1 referente en la casa de los más chicos. 1 en la de los varones adolescentes. | Equipo integrado por 1 asistente social y 1 psicólogo. Maestra de apoyo y 1 persona de limpieza. | Director.                                    |

**INSTITUCIONES ESTATALES. ORGANIZACIÓN.**

| INSTITUCIONES | POBLACIÓN   | PERSONAL ENCARGADO DE LA CRIANZA  | PERSONAL TÉCNICO.   | OTRO PERSONAL.                                    |
|---------------|---|---|---|---|
| Institución 1 | 12 niñas entre 10 y 19 años.                                | Personal rotativo en turnos de 12 horas. 3 Preceptores por turno. Cocineras, economas Chofer. | Equipo: 3 psicólogos, 1 Asistente social, médico y enfermera. Maestras de apoyo. Profesores de tareas manuales, educación física. | Director, vicedirector y personal administrativo. |
| Institución 2 | 32 niñas entre 6 y 14 años.                                 | Igual.  | 3 psicólogos y 2 Asistentes sociales. Médico y enfermera. Maestras de apoyo. Profesores.  | Idem  |
| Institución 3 | 15 madres adolescentes con sus hijos.(algunas embarazadas). | Igual   | Igual   | Idem  |

En estas 6 instituciones relevadas aparecen una serie de atributos distintivos según se trata de una estatal o de una organización no gubernamental. Las estatales tienen una población tipificada por sexo y edad y en función de ésta clasificación realizan su proyecto institucional. Es llamativo observar que las instituciones estatales relevadas trabajan con pequeños números de niños y/o adolescentes, una tendencia que parece estar consolidada y que interesa rastrear en el discurso de

los entrevistados los contextos de justificación de este pasaje de los “macro-institutos” <sup>20</sup> a las instituciones que intentan imitar el funcionamiento de una “casa de familia”. Todas estas instituciones estaban dirigidas por personas de experiencia en el área cuya antigüedad oscilaba entre los 15 y los 22 años de trabajo en la Subsecretaría y cuenta con personal dedicado a tareas específicas. Por el lado de las organizaciones no gubernamentales, se observa una mayor heterogeneidad, ya que una de ellas se asemeja a lo que se suele denominar “un pequeño hogar” con 12 niños a cargo de un matrimonio y ningún tipo de personal externo, esta experiencia contaba con tres años de funcionamiento. Luego, un hogar con 15 años de trabajo que funciona con referentes estables que viven con los chicos y un pequeño equipo técnico; 25 chicos se organizan en dos casas y el director funge en un doble rol: máxima autoridad en la esfera institucional y “padre” de los chicos. La última organización ocupa un espacio que otrora fue un gran “asilo” que albergaba 200 niños y una docena de ancianos, perteneciente a una organización religiosa, en la actualidad sólo ocupan 3 pequeñas casas entre las cuales se reparten 45 niños, en 2 de ellas un matrimonio actúa como referente. En la tercera viven solos un puñado de adolescentes. Esta institución cuenta con un pequeño equipo técnico y un cuadro directivo formado por un director y vice, ambos pertenecientes a la comunidad religiosa. Las grandes instalaciones del predio como talleres, salones, etc, se encuentran casi desocupados, constituyen el testimonio de una época que pasó: el apogeo de las macroinstituciones. Se verá en las páginas siguientes como esta tensión entre el pasado nefasto de las “macro” y las actuales “casa-hogar” ocupa un lugar privilegiado en el discurso de los entrevistados. Estas diferencias organizativas señaladas determinan diversos rituales cotidianos, distintas cadencias en las ceremonias del almuerzo o de las visitas familiares. Las narraciones de estos eventos constituyen matrices significativas centrales para entender cómo se construye la gestión de la infancia en riesgo al interior de estos dispositivos institucionales.

---

<sup>20</sup> Las macroinstituciones de principios y mediados de siglo trabajaban con poblaciones de alrededor de 200 chicos. Hasta hace 1 década era común el trabajo con alrededor de 40 o 50 niños por institución.

## **I.-Las significaciones de la institución.**

Cada una de las instituciones relevadas, como toda institución en general, se encuentra atravesada por las múltiples significaciones de los sujetos que allí viven y trabajan. Diferentes posiciones institucionales y diferentes tipos de instituciones atribuyen necesariamente distintos sentidos a la actividad de asistir a los niños. Si bien el corte entre instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales es capaz de ilustrar una serie de diferencias importantes asociadas a las características divergentes entre una actividad profesional pautada por horario y salario versus una actividad ocasional de tiempo completo, existen grandes matices aún dentro de cada tipo de organización.

En este apartado se dedicará especial atención a las nominaciones de los “casos” que se atienden en la institución y los objetivos a partir de los cuales los entrevistados encaran su tarea diaria. A partir del análisis de las 10 entrevistas realizadas se han identificado 3 tipos de casos que llegan a este tipo de instituciones:

- 1.- las internaciones por “motivos económicos”.
- 2.- las internaciones por “problemas de conducta”.
- 3.- las internaciones por motivos como abuso sexual y maltrato infantil.

Muchos de los entrevistados coinciden en señalar a las dos primeras categorías como internaciones “evitables”, “de gusto” que constituyen expresiones de la arbitrariedad judicial y de la falta de respuestas estatales a los problemas sociales:

“ingresan por diferentes problemas sociales hoy por hoy habrás visto el país como estamos, se están abarrotando las instituciones de chicos por el problema social que estamos viviendo. La falta de trabajo, la falta de contención desde el estado, porque sería más fácil o más rápido darle un trabajo a una familia que internar hoy por hoy” (Juan, director institución estatal).

### La internación por pobreza.

Es común la afirmación entre directivos y empleados que se interna por “pobreza”, “por problemas económicos”, denunciando el absurdo de estas situaciones. En todos los casos se considera fundamental la disminución de la pobreza y la vulnerabilidad social, ya que estas variables estarían directamente asociadas con el incremento en el número de niños y adolescentes que llegan a los tribunales de menores. Sin embargo, como se verá en las páginas siguientes existen diferentes miradas sobre estas situaciones que provienen de distintos posicionamientos frente a la problemática. Un hecho similar puede dar lugar a distintas interpretaciones a partir de las cuales se construyen escenas de la intervención totalmente diversas:

“Porque los tenemos internados muchísimo tiempo porque son pobres y andan dando vueltas en casa misérrimas. Porque en realidad nos encontramos con que el juez quiere que mágicamente se construyan una casa de dos pisos, que el padre consiga un trabajo estable tipo gerente. Vos decís, lo internaron, bárbaro y cuál es la posibilidad de externación, a partir de cuál situación ¿de un casa de dos pisos? (Ana, directora estatal)

- “El padre hizo todo lo que el juez le propuso, que amplie la casa, vivía en una villa pero tenía la posibilidad de ampliar la casa , él trabajaba de todo con tal de satisfacer los medios para poder llevarse a los chicos, él hizo todo lo que se le iba indicando y bueno cuando ya tenía todo, fue la trabajadora social hizo el informe y se lo llevo al juez y le dieron los chicos.” (Vicedirector O.N.G.)

La posibilidad de externación mediante el requisito de mejorar las condiciones de la vivienda , es relatada a partir de dos estilos contrapuestos. En el primer caso el tono irónico funciona como elemento de crítica a la racionalidad de una internación por pobreza. El “mágicamente” se entiende a partir de la inclusión del caso en un contexto social en el cual las posibilidades de conseguir un empleo o un subsidio a la vivienda son prácticamente inexistentes. Esta forma de encuadrar los casos esta íntimamente ligada al significado atribuido a la internación: como medida transitoria frente a la cual los actores institucionales deben posicionarse como facilitadores de una externación. Por el contrario, en la segunda entrevista citada el tono descriptivo presenta a un padre laborioso y preocupado por sus hijos que hace “todo lo que le proponen”. No se vislumbra ni una crítica como tampoco un acuerdo con el criterio del juez, pero el “final feliz” remite a una especie de moraleja: un padre trabajador y que sigue las indicaciones

del juez recupera a sus hijos. Este tipo de relato nos habla de un estilo de intervención institucional que no discute el diagnóstico judicial ni la lógica del dispositivo: cuidar y lograr el bienestar de los niños y adolescentes mientras estén internados se convierte en el objetivo institucional.

### *Las malas compañías.*

Este segundo grupo de casos son protagonizados exclusivamente por adolescentes y reúne una variada gama de situaciones que giran alrededor de las dificultades de los padres para poner límites a sus hijos:

“se interna la adolescencia, la rebeldía y que se les dificulte a los padres contener a una chica porque no le gustó el novio que tiene; porque empiezan a decir que tiene malas juntas que anda mucho en la calle; entonces los padres recurren a los juzgados como para buscar algún tipo de límite de autoridad que no pueden poner ellos y los juzgados les dan como respuesta una internación” (Ana, directora estatal)

En estos casos parece operar una suerte de internación preventiva ya que el déficit paterno para controlar a los adolescentes es cubierto por el juez para “evitar un mal mayor”. Muchos de los entrevistados aluden a este tipo de situaciones cuando hablan de “riesgo”. ¿Riesgo frente a qué? El daño potencial evocado en estos discursos incluye desde el ingreso en el mundo del delito, la drogadicción, hasta los embarazos precoces de las adolescentes. La presencia de los jóvenes en la calle constituye un riesgo tanto para ellos (“se pueden echar a perder) como para una sociedad temerosa. Estos miedos con los cuales acuden los padres a los juzgados de menores en muchos casos, son gestionados en un expediente bajo la rúbrica de “abandono material y moral” y “necesidad de protección”. Y conservan algún parecido de familia con aquella vieja legislación que habilitaba el encarcelamiento de los hijos a pedido de los padres por actos reiterados de inconducta. Sería interesante explorar los diversos sentidos con los cuales los padres acuden ante un juez de menores, pero pareciera que el control sobre la conducta de los menores de edad continúa siendo un significado vigente en el dispositivo. El territorio de la moralidad continua siendo habitado por el imaginario del contagio poblacional, típico de los discursos higienistas de fines del siglo XIX: el joven que alejado de la mirada del adulto e impulsado por las “malas

compañías” ingresa en el mundo del delito. Las demandas paternas hacia los juzgados provocan el ingreso de la vida privada de estas familias en la consideración de los funcionarios públicos. Así se inicia un proceso de diagnóstico de las capacidades familiares a fin de otorgar una “solución” al caso. Soluciones que abarcan desde la inclusión del grupo familiar en una terapia hasta la internación cuando la familia no cumple los requisitos necesarios, a criterio del juzgado, para gestionar el riesgo de sus hijos.

Ante este tipo de casos, los entrevistados se posicionan de diversa manera algunos expresan una actitud crítica, que en el trabajo institucional se expresa en un trabajo con la problemática familiar, a fin de conseguir un pronto egreso. En estos discursos el egreso solo será posible cuando la familia logre presentarse ante el tribunal como “una familia contenedora” y el adolescente como un “joven no peligroso”. De este modo es posible observar como hasta los discursos más críticos hacia las prácticas moralizantes de la justicia de menores terminan enredados en prácticas confirmatorias del imaginario del juez padre. Así, “si quieres que tu hijo vuelva a vivir contigo debes ir al psicólogo”, “si quieres recuperar tu libertad debes prometer obedecer los límites de tu padre y mejorar tus calificaciones en la escuela”. En otros discursos, por el contrario, se asume como uno de los casos típicos el de los adolescentes “que andan mucho en la calle”, o “se pelean con sus padres” La atención de estos adolescentes “desorientados” se asume como una función propia de las instituciones de “menores”:

“lo fundamental es poder orientar al chico y a la familia cuando se puede porque a veces hay como negación de la familia y no es fácil. Pero en principio cuando llegue a una madurez el chico y la familia él vuelva”. (Ester, vice-directora instituto estatal)

Estos sujetos se colocan en el papel de “guías” y tratan de indicar el “camino correcto”. De este modo se observa la vitalidad en las prácticas de los tribunales y de las instituciones de ciertos significados cristalizados en la ley del Patronato de Menores:

“Cuando actos reiterados de inconducta de menores de edad obliguen a sus padres, tutores y guardadores a recurrir a la autoridad para corregir, orientar y educar al menor” (artículo 10 inciso e, ley 10067 de la provincia de Buenos Aires).

Si bien aparece como un slogan la definición de la internación como un último recurso ante casos extremos, las entrevistas realizadas son testimonio de que esta significación de la internación “orientadora”, plagada de connotaciones moralizantes, continua circulando al interior del dispositivo. En las instituciones de internación, tanto estatales como en la O.N.G.s, la trasmisión de pautas de comportamiento, de valores éticos y morales (y en algunos casos religiosos) ocupan un lugar central en el discurso de los entrevistados. Con distintos acentos, desde ayudarlos a ser “hombres de bien” hasta “enseñarles cosas de la biblia”, el imaginario salvacionista, continua pensando a estos niños y jóvenes como necesitados de tutela moral. La libertad para elegir, la distancia entre los puntos de vista institucionales y los del adolescente o su familia, suelen ser descritos en términos de “falta de madurez”, “incapaz de contener al menor”. Se silencia en el discurso la posibilidad de un conflicto de intereses entre la institución y el adolescente. “Lo mejor para él” es el resultado de un proceso de clasificación institucional, en términos goofmanianos, la lógica del tratamiento subsume cada acto de la vida del sujeto dentro de un marco de observación.

En definitiva se trata de una versión moderada del “tratamiento institucional” en el cual los expertos diagnosticaban y pronosticaban a partir de la observación. La internación orientadora se sostiene el ideal reeducador inscrito en el discurso de los entrevistados.

### *Las internaciones realmente necesarias.*

El tercer grupo de motivos es el de los niños y adolescentes que ingresan al haber sido víctimas de abusos sexuales y/o maltrato físico o psicológico dentro del grupo familiar. En todas las entrevistas emerge la importancia que este tema ha alcanzado en los últimos años y que se registra en el aumento en el número de causas de niños víctimas de delito. En general existe coincidencia acerca de que este tipo de casos son los que exigen una medida tan extrema como la internación para resguardar la integridad física y psíquica de los niños ante la ausencia de una mejor alternativa. En la percepción de los entrevistados el aumento de los casos de niños víctimas de delitos sexuales es un fenómeno propio de los últimos años que continua en crecimiento. La complejidad de estas situaciones es gestionada en estas instituciones mediante la inclusión de los

niños en tratamientos psicológicos. La dificultad para tratar estos casos es referida por la mayoría de los entrevistados. Pareciera tratarse del “núcleo duro” de la internación, aquellos casos en los cuales no hay disenso frente al diagnóstico judicial.

Los entrevistados si bien casi en forma unánime describen a estos 3 tipos de casos como los que conforman la población atendida por sus instituciones, enfatizan de distinta manera cada uno de ellos. A partir de las distintas semantizaciones se han identificado dos grandes significaciones de la gestión de la niñez en riesgo. Interesa describir cómo la acentuación de tal o cual aspecto en la definición de la problemática que se atiende, construye distintas posiciones y acciones frente a la misma. Es importante no perder de vista que no se trata de una tipología de las maneras de ser director o empleado de estas instituciones, ya que un análisis de ese tipo requeriría una mayor cantidad de entrevistas. De lo que se trata es de identificar en la construcción del discurso la imbricación existente entre las formas de interpretar la protección de la infancia y las acciones institucionales emprendidas. Así aparecen dos grandes tematizaciones sobre la función de la institución:

- 1.- La institución como un puente hacia el “afuera”.
- 2.-La institucionalización reparadora.

### *La institución como un puente hacia el “afuera”.*

“si a la familia no la vuelve a poner en escena la institución el juzgado no la pone en escena, la corre y aparece la figura del juez como todopoderoso y dueño de esos chicos “( Ana, directora estatal)

En estos discursos se define la situación de los niños y adolescentes que llegan al hogar como la expresión de una situación social dramática, en el seno de la cual el rol del estado y, fundamentalmente, de la justicia de menores es fuertemente criticado por estos actores institucionales. El estado aparece como algo ajeno, nadie parece asumirse como parte de él en estos discursos. De este modo la definición del contexto ocupa un lugar central en la definición de la tarea institucional, ya que dado que la llegada de los niños a una institución es expresiva de la incapacidad del estado para intervenir eficazmente, el objetivo de trabajo apunta a remediar

esta incapacidad. El horizonte de trabajo es la externación del niño, a partir del removimiento de las causas que provocaron la internación. En primer lugar se busca la re-vinculación con la familia nuclear, si esto no es posible con la familia extensa y como último recurso aparece la adopción. La otra característica central de este discurso es la necesidad de construir una estrategia de trabajo para alcanzar el objetivo de externación lo más rápido posible, ya que la institucionalización es percibida como un daño.

Es decir, la tecnología interactiva que procura disminuir el riesgo o el peligro entraña en sí misma una consecuencia negativa para el niño. Más que cesar el riesgo, el dispositivo estaría exponiendo al niño a nuevas inseguridades, a nuevos estados de vulnerabilidad. La internación en este discurso es pensada como una última herramienta de trabajo que aún en los casos extremos debe tender a su transitoriedad. Esta forma de definir la problemática construye un estilo de intervención peculiar: estos referentes institucionales deben realizar un diagnóstico de riesgo y buscar una solución acorde al cumplimiento de su objetivo. Se postula como intermediario entre los intereses del niño-familia (con excepción de los casos de violencia y abuso sexual se observa la tendencia a equiparlos) y las decisiones del juez de menores. En este discurso se justifica la necesidad de realizar un diagnóstico porque los tribunales de menores no lo hacen:

“ Mirá los tribunales en realidad no evalúan nada. Lo único que hacen es decidir la internación a partir de lo que ellos entrevistaron o vieron. Eso, no nos lo informan a nosotros. O sea, no hay una fundamentación lo único que hacen es un oficio peladito: se solicita la internación de fulanita en un instituto por estar en riesgo material o moral, por situación de protección” (Ana, directora institución estatal).

La crítica a los jueces funge en este discurso, más que como una impugnación al sistema de protección a la infancia en riesgo en su totalidad, como un intento de diferenciación. En este discurso emerge una significación alternativa del trabajo de las instituciones, un trabajo que se describe como metódico, fundamentado en una evaluación seria de los hechos. El trabajo “hacia fuera” aparece como el slogan, capaz de incluir a los niños y adolescentes en una vida común y corriente como la de cualquier ciudadano. Una de las estrategias argumentativas identificadas en este discurso consiste en la construcción de una distancia entre los intereses del niño-familia (que están en el afuera) y los intereses del tribunal (que presionan hacia adentro). Cómo se verá más

adelante ésta constituye una característica distintiva fundamental respecto al discurso de la institucionalización reparadora. Permite avanzar en la problematización del mito fundacional del Patronato de Menores que garantiza en la imagen del juez padre, la homogeneización entre lo mejor para el niño y lo mejor para el estado. Frente a este discurso caben las siguientes reflexiones: ¿Cuáles son las posibilidades y límites de esta mutación institucional? ¿Hasta donde puede avanzar una dinámica de funcionamiento institucional que entraña en el futuro (aunque sea sólo como proyecto) la desaparición de la institución?

Es frecuente entre los entrevistados que adscriben a este tipo de discurso la cita de los “derechos de los niños”, “el interés superior del niño” como horizonte de trabajo. Sin embargo, estos conceptos lejos de remitir a un significado unívoco pueden ser interpretados en varios sentidos. En las entrevistas realizadas se han identificado por lo menos dos grandes campos semánticos vinculados a “los derechos de los niños” estrechamente relacionados con definirse a partir del “trabajo hacia fuera” o “hacia adentro”.

Un campo semántico define el contenido fundamental de los derechos del niño como el derecho a vivir con su familia, en su lugar de origen. Estos niños tienen derecho a una vida “normal” en el “afuera”. El sufrimiento, y el daño que la institucionalización provoca en los niños emerge en estos discursos, a pesar de lo “bien que los niños están acá”. La historia del niño, su pertenencia a una matriz familiar y cultural hacen que la mejor de las instituciones nunca deje de ser una “prótesis”. La actividad de estas instituciones, por eso mismo, se encuentra definida a partir del objetivo de pronto egreso. El otro campo semántico identificado es el que construye el derecho de los niños acentuando en la satisfacción de necesidades básicas, junto con el requisito de una familia “contenedora”. La labor institucional en estos discursos opera como una restitución por medio de la institucionalización de los derechos conculcados. El cumplimiento de estos derechos se vincula con la intervención del propio operador, la internación no vulnera los derechos de los niños debido a las características extraordinarias de la propia institución.

### La institucionalización reparadora.

A diferencia de los discursos anteriores, en éstos el acento está puesto en los casos de niños maltratados y abusados sexualmente por sus familias<sup>21</sup>. La razón de ser de la institución se constituye en el rescate de los niños de situaciones peligrosas y dañinas (aquí ya no se trata de riesgo sino de peligro y daño) y su puesta a resguardo en un medio contenedor. Por supuesto que en este discurso no se pone en tela de juicio el diagnóstico, la contundencia del sufrimiento de estos niños y adolescentes se impone. El objetivo entonces apunta a proteger, dar abrigo, alimentación y sobretodo afecto a estos niños. Si en los discursos anteriores se enfatizaba en el daño y el riesgo para los niños presente en la situación de internación, aquí la vida en el hogar se describe a partir de la imagen de una convivencia armónica:

“tratamos de recuperar todo lo bueno que tengan estos chicos..... Que todo el mal trago que hayan tenido que pasar, lo que le quede de vida a cada uno bueno que tengan un lugar diferente donde vivir.....lo que a mí me interesa es poder trabajar con los chicos y poder brindarles un lugar diferente, llámese sentarnos todos juntos en la mesa. Yo como con los chicos, duermo con los chicos” (Alicia, directora de una O.N.G.)

Dos atributos esenciales de la institucionalización reparadora aparece en esta cita. Por un lado una oposición radical entre “lo malo” de los lugares donde salieron y “lo bueno” de la vida en el hogar organiza este discurso donde los niños son víctimas y el narrador un “salvador”. Pero además la presencia del referente junto a los niños garantiza el bienestar, el énfasis puesto en el comer y dormir con ellos alude a la asociación entre la persona que habla y “lo mejor para los chicos”. Esta forma de definir la población con la cual trabajan construye un universo de intervención determinado: la identificación de los intereses de los chicos con la permanencia en la institución. Estos sujetos se atribuyen el carácter de representantes de los niños y esto en un doble sentido: por un lado convierten en presencia una ausencia y al mismo tiempo hablan en nombre de los niños. (Chartier:2001;78). Así, se presentifica al padre o a la madre ausente prodigando los cuidados de nutrición y contención. Al mismo tiempo hablan en nombre de los

niños, pelean por sus derechos en nombre propio porque el destino de ambos está ligado por esta especie de “pacto de representación”.

En este discurso se invisibiliza el riesgo de la propia internación y se enfatiza en la violencia ejercida dentro de la propia familia. Sin embargo, en un momento de la entrevista casi al pasar la entrevistada comenta que varios de los niños fueron violados en el “pequeño hogar “en el que estaban anteriormente por su director. De este modo se refuerza que el carácter reparacionista de la internación radica, en los atributos personales del salvador más que en una confianza generalizada en el sistema de pequeños hogares. El sentido de la intervención se focaliza en la experiencia personal entre el referente y los niños a cargo, no existe una reflexión sistemática sobre la problemática, que excede los límites de la intervención personal.

En el ejemplo que se expone a continuación se ilustra claramente como la definición e interpretación de la problemática produce efectos concretos en la intervención institucional. Definición que además de construirse en base a argumentos y teorías racionales emerge en el seno de un imaginario social de la protección a la infancia. En este ejemplo se confrontan las acciones emergentes de un discurso de la institución como “puente hacia fuera” con la de un director “reparacionista” frente a un caso similar: un niño abusado sexualmente por su padre. Como se ha señalado anteriormente el abuso sexual de los niños emerge con fuerza en todas las entrevistas como un motivo de ingreso a las instituciones que ha crecido en los últimos años. Además la falta de juzgamiento y sanción de los presuntos abusadores aparece como una constante que refuerza la victimización de estos niños que no pueden volver a sus hogares ante la permanencia del abusador.

### *De la definición a la acción.*

Las definiciones de la situación del niño realizadas en el marco de las instituciones de atención a la infancia en riesgo tienen claros límites y constreñimientos: la decisión del juez de menores. Como dice uno de lo entrevistados “la institución propone y el juez dispone”. Sin embargo como vimos en las páginas anteriores no todas las instituciones tienen como objetivo el análisis de la situación del niño y elaboración de un diagnóstico propio, sino que trabajan exclusivamente en la

contención y asistencia del niño. Como resultado existen directivos y personal para los cuales la internación es un instrumento transitorio hasta alcanzar una externación y otros para los cuales la internación es un fin en sí mismo, un remedio. En general existe coincidencia entre los entrevistados en presentar como “casos extremos” a los casos de abuso sexual y maltrato, como situaciones ante las cuales la internación aparece en principio como positiva. Pero las siguientes citas expresan diversas maneras de posicionarse ante un mismo hecho:

“ en general lo que aparece como respuesta cuando se ha trabajado bien esos casos es una adopción.....pero es una decisión para pensarla mucho. No porque le vayas a dejar ese padre abusivo pero no le quites la madre porque por ahí podes trabajar esa situación y podes rescatar a la madre, a la abuela, a la tía. Cuando haces un quite de patria potestad pierdes el vinculo con toda la familia. Digo es para evaluar mucho y muy bien en cada situación porque le sacas lo malo que tiene pero no le das nada a cambio. Le das una internación de 10 años y eso aniquila al más pintado.” (Ana, directora estatal)

Aquí la definición de la internación como algo “que aniquila” articula el trabajo institucional en vistas a una salida. La internación aún en la mejor de las instituciones no aparece como una opción válida. Por ello se debe trabajar primero con la familia a fin de evaluar las posibilidades de egreso y en casos extremos la adopción. La vida en la institución no es visualizada como una opción a largo plazo. Para justificar esta afirmación los entrevistados se apoyan en bibliografía y estadísticas (sobre todo los profesionales) y en la propia experiencia de trabajo.

“Ellos tienen que saber que en esta vida le tocó lo bueno y lo malo y lo bueno es que hayan podido salir de esos lugares donde estaban , quizás algún día tendrán que volver pero mientras ellos puedan esquivar de volver para estar mejor me parece fantástico...muchos de los jueces quieren que los chicos vuelvan a su lugar de origen pero yo no estoy de acuerdo, ellos no eligieron venir al mundo y si los padres de ellos fueron violados, abusados, maltratados, los chicos no tuvieron la culpa y si puedes rescatarlos de eso me parece que es lo mejor que puedo hacer.(Alicia. Directora de una O.N.G.)

En este discurso no aparece la posibilidad de pensar una alternativa a la institucionalización: la externación con la familia de origen se equipara con un regreso al abuso, al maltrato, no se baraja la posibilidad de incorporar a la familia extensa, ni de adopciones. El hogar-refugio les ofrece la posibilidad de una “buena vida” y no “lo malo que les pasó siempre”. Esta manera de definir las

historias de los chicos conduce a una equiparación entre el bienestar de los mismos y la permanencia en el hogar. La entrega y el compromiso personal de estos referentes los inhibe de pensar que la institucionalización pueda ocasionar algún daño a los niños. Así, se produce una equiparación entre la propia definición del rol y los derechos de los niños: el bienestar de los chicos se equipara con su permanencia en el hogar. Por ello, se desalienta la vuelta al hogar, aún en los casos que los niños expresan su deseo de volver:

“ me han tocado niños que me dicen hoy quiero ver a mi mamá aplastada como una cucaracha y llegan las fiestas de fin de año y me dicen me quiero ir a mi casa y yo les digo siempre que lo piensen bien antes de irse porque de que vale nuestro trabajo durante 2 o 3 años cuando después volvemos a lo mismo” (Alicia, directora de O.N.G.).

En este ejemplo se observa claramente como la significación atribuida a la tarea de proteger a la infancia determina el tipo de acciones que se realizarán. Pero además este ejemplo es expresivo de un dato que confirman la mayoría de las entrevistas: la ausencia de criterios de trabajo compartidos, de sistematización y comunicación de experiencias. En suma, la ausencia del estado (que envía a estos niños a estas instituciones) en la definición y supervisión de los objetivos de trabajo. Si bien se han presentado dos ejemplos extremos de gestiones opuestas frente a un caso similar, en general, existe una variedad de matices entre lo entrevistados entre estas dos posturas. Esta tensión podría sintetizarse en el dilema del pollo sin familia/ familia sin pollo:

“yo estoy convencida de que los niños están mejor con su familia que acá aunque acá tengan agua caliente y coman pollo y allá el pollo lo vean pasar volando. Pero de pronto te podés encontrar un director que con total convencimiento te diga yo quiero que los chicos coman pollo y que no pasen frío en su casa con los padres, es tan legítima una opinión como la otra. Pero bueno esta es una cuestión subjetiva” (Ana, directora instituto estatal).

Éste es otro elemento que aparece con fuerza en todas las entrevistas: los objetivos y la metodología de trabajo institucional están estrechamente ligados a la subjetividad del director. Éste dato está presente tanto en las instituciones estatales como en las no gubernamentales, con lo cual se refuerza la ausencia estatal que se señalaba más arriba. La asistencia de la infancia en

riesgo, decidida coercitivamente por un funcionario público como es un juez de menores, es luego gestionada según los parámetros “subjetivos” de la dirección de la institución. Si bien es hegemónico el discurso del trabajo “por la revinculación familiar”, las entrevistas realizadas son un ejemplo de las diversas interpretaciones y prácticas que pueden ser englobadas bajo este slogan. Si como se viene ilustrando la gestión de la infancia en riesgo es definida según los criterios personales de cada dirección no es porque la Subsecretaría de la Minoridad no tenga una posición explícita al respecto<sup>22</sup>, sino porque no existen mecanismos institucionales capaces de materializar en prácticas un significado compartido acerca del objetivo en el trabajo con la infancia en riesgo.

### La ausencia de estado.

Uno de los tópicos recurrentes en las entrevistas refiere a la ausencia de capacitación en el personal que trabaja con la infancia. De los 6 directores entrevistados, sólo 1 contaba con un título universitario. Por el lado de las O.N.G. sólo uno de los directores tenía experiencia de trabajo barrial previa antes de convertirse en director de una O.N.G. En la otra, un ex niño asistido por la comunidad religiosa cumplía funciones de director en la misma institución en la que él fue asistido. El tercer caso es el más sintomático ya que esta institución no recibe financiamiento público a pesar que la Subsecretaría envía a los niños derivados por los juzgados de menores y jamás ha recibido una visita o supervisión desde que está funcionando. Sus directivos se lo explican en la siguiente forma:

“D: yo creo que debo haber caído bien yo, porque alguna vez debería haber venido una supervisión o algo, nunca ha venido un juez.

P: ¿y de la subsecretaría?

D: tampoco, como no tengo becas, estoy esperando una supervisión porque pedí por favor si no son 10 becas, 3 o 5 para poder solventarme, yo siempre pido que me vengán a supervisar, que vengán a ver cómo viven los chicos, dónde, qué es lo que comen, pero no viene nadie.” (Alicia, directora O.N.G.).

Si existe una gran variedad de prácticas entre el continuo pollo-familia, es porque la falta de presencia estatal deja el espacio libre a las definiciones del personal de turno. Pero el pasaje

---

<sup>22</sup> Ver en el anexo la presentación de los programas de la Subsecretaría de la Minoridad.

desde lo “subjetivo” a la construcción “intersubjetiva” de un horizonte de trabajo con los niños y adolescentes institucionalizados parece ser un problema menor en la consideración de los entrevistados. Esta ausencia de estado tiene un claro límite en la figura del juez, árbitro de todas las decisiones en referencia a la vida de los niños y adolescentes. Las organizaciones no gubernamentales, al igual que las instituciones estatales trabajan a partir de la clasificación realizada en sede judicial y están subordinadas a las decisiones de los jueces de menores en el desarrollo del caso. Sin embargo, en uno de los casos el desacuerdo con el criterio judicial se traduce en una práctica subversiva del sentido de la protección estatal. Este caso constituye una excepción entre las demás instituciones porque esta O.N.G. subvierte la lógica del esquema estatal a partir de una significación distinta del trabajo institucional.

“ digamos cuando la situación es que llama la escuela o llama la iglesia y es una cosa que se resuelve en poco tiempo no lo hacemos pasar por tribunal, por ejemplo él (señala a un niño que juega en el patio) no pasó por tribunal y no va a pasar tampoco porque es cómo querer judicializar la pobreza” (Jorge, director de O.N.G.)

Si bien el financiamiento que otorga la Subsecretaría de la Minoridad exige como contraprestación el alojamiento de un menor judicializado, ésta institución a partir del significado atribuido a su tarea, se reapropia de los recursos y los utiliza en función de su propio diagnóstico: éste niño no debe ser judicializado por el sólo hecho de ser pobre. Aquí se repite una significación presente en el discurso de alguno de los jueces de menores entrevistados: a la judicialización subyace cierto carácter culpabilizador, estigmatizador. De este modo, a partir del carácter negativo atribuido al pasaje de ciertas situaciones por la evaluación del juez de menores se rechaza el criterio estatal y se asiste a la infancia según criterios propios vinculados a la propia demanda de los interesados o de instituciones como la iglesia o la escuela. Así, se observa como esta organización no gubernamental resiste, en alguna medida, la subordinación a la racionalidad del Patronato de Menores, de este modo su incorporación a la gestión estatal del riesgo introduce la posibilidad de pequeñas artimañas y distorsiones (Chartier:2001; 9) que vulneran la lógica del dispositivo. Sin embargo, el resto de las O.N.G.s relevadas muestran que estas prácticas de resistencia y resignificación, lejos de constituirse en la posición hegemónica entre estas instituciones, es sólo una forma entre muchas otras, de concebir la tarea de proteger a la infancia.

Así, este pequeño muestrario de entrevistas realizadas en las organizaciones no gubernamentales ha permitido problematizar el significado de la incorporación de las O.N.G.s en la asistencia de la infancia. Si este proceso ha sido conceptualizado como un cambio de carácter progresista en el respeto de los derechos de los niños, pareciera necesario relativizar esta afirmación. En primer lugar sería oportuno distinguir analíticamente dentro del término organizaciones de la sociedad civil (casi un sinónimo de O.N.G) el conjunto de actores heterogéneos y contradictorios entre sí que componen “la sociedad civil”.

De este modo, aparece la posibilidad de pensar que no toda organización de la sociedad civil es portadora de la democracia y de un concepto progresista de trabajo con la infancia en riesgo. Si bien es cierto que las O.N.G.s pioneras en el trabajo con los niños fueron capaces de instalar en la esfera pública la crítica a las instituciones totales y la violación recurrente por parte de los tribunales de menores a los derechos del niño, las entrevistas realizadas permiten construir una imagen no homogénea de las mismas. Este trabajo se constituye en un ejemplo de la oscuridad analítica del concepto “O.N.G.” y concluye en que su inserción en la tecnología Patronato de Menores, más que implicar automáticamente la democratización del sistema, aumenta la complejidad de prácticas y significados contradictorios. En este pequeño número de instituciones relevadas observamos que las “O.N.G.s” aglutinan muy diversas experiencias que van desde el cuestionamiento del carácter estigmatizante de la protección judicial hasta el reforzamiento de prácticas caritativas.

## **II.-El ingreso en la civilización.**

En las entrevistas analizadas hay tópicos que se cuean entre las preguntas planteadas, referencias, anécdotas recurrentes que los entrevistados introducen en la narración. Uno de estos temas que irrumpe subrepticamente en el relato es el de la enseñanza e incorporación de hábitos de higiene y de normas de comportamiento por parte de los niños. Estas instituciones se transforman en el lugar de residencia de los niños y adolescentes, las personas encargadas de cuidarlos se convierten en los adultos encargados de pautar sus actividades cotidianas. Desde el

momento en que son designados como “necesitados de internación” y luego conducidos hacia su destino institucional se produce una ruptura con su cotidianeidad anterior. Son incorporados a un “régimen de vida” en casas provistas de determinadas condiciones materiales que en la mayoría de los casos suelen contrastar con las casas de las cuales provienen estos chicos. Para los referentes institucionales entrevistados la enseñanza de hábitos de higiene y comportamiento ocupa un lugar central en la actividad de proteger a los niños. Así los discursos de la limpieza y del orden emergen como una dimensión fundamental en la tarea cotidiana: inscribir al niño o al adolescente en el mundo de las casas con regaderas y escaleras, de las comidas con cubiertos, de la ropa y las manos limpias. Se ha identificado una poderosa representación social en estas construcciones narrativas a la que hemos llamado “ingreso en la civilización”. Aparecen dos modalidades de esta incorporación del “otro”; en la primera se construye un narrador adulto que se posiciona frente a un niño pequeño y le enseña a tomar los cubiertos y a cuidar de su ropa. Una directora o empleada que suple a la madre ausente en la mediación entre el niño y el mundo de la cultura:

“cuidar de los chicos no es lavarles la cara, las manos para comer sino enseñarles a sentarse en la mesa, a comer bien, a comportarse, un montón de cosas trae aparejado todo esto, no es solamente el rol de directora que estés detrás de un escritorio lees una causa y la archivas, no, no, no, lo mío no es así”

(Alicia, directora de O.N.G).

En este fragmento citado el rol de directora se construye en oposición a otras directoras evocadas negativamente en la imagen del funcionario que lee expedientes detrás de un escritorio. La pregunta ante la cual se responde de este modo interroga por la definición del propio rol de directora que se define como una madre eficiente que no sólo higieniza a sus hijos sino que los instruye en las habilidades sociales necesarias. Un rol de este tipo se define en el discurso a partir de la consideración de los niños asistidos como carentes de educación o provenientes de familias negligentes. Reparar esta falta o suplir al ausente se constituye en una tarea prioritaria porque habilita a estos niños a formar parte del mundo de la gente educada, limpia, en suma del nosotros construido en la narración. En otro pasaje de la entrevista esta idea es reforzada:

“Esta tarea no pasa solamente por la alimentación de estos chicos sino también por la contención y el amor que uno les pueda dar es muy importante para ellos, acá llegaron chicos que parecían animales cuando venían. No sabían lo que era un cepillo de dientes, no saber lo que es el agua caliente” (Ana, directora de O.N.G.).

Ayudarlos a dejar de ser “como animales” aprender a cepillarse los dientes o conocer el agua caliente en la regadera es muy importante para estos chicos y se incluye dentro de la contención y del amor que junto con la alimentación aparecen como ejes de la asistencia a la infancia y adolescencia en riesgo. Pero hay otra clave de lectura a partir de la cual interpretar este “ ingreso en la civilización” y se relaciona con el aumento de la pobreza en los últimos años y sus repercusiones en la vida familiar:

“P: Recién decías que hubo un cambio en los últimos años respecto a cómo llegan los chicos al hogar....

R: los chicos están llegando con muchísima violencia, con mucho hambre, antes llegaban pobres sí, pero no pasados de hambre, no con violencia. Ahora existe una violencia dentro de la casa el padre, la madre se pegan entre ellos, les pegan a los niños. El hambre que tienen, uno contaba acá que comían de vez en cuando y cuando comían carne era un pedazo para cada uno y si no se iban turnando para comer primero los más chiquitos, después comían los padres y así..... cosas que no saben, acá han venido chicos que no saben usar los cubiertos iban al baño y le tenían miedo a la regadera, ni hablar de la escalera iban en cuatro patas, chicos que no sabían lo que era un baño, hay pibes que hubo que enseñarles todo, absolutamente todo” (Jorge, Director O.N.G.).

Hubo que enseñarles lo que eran los cubiertos, las escaleras y las regaderas fundamentalmente porque son pobres y provienen de casas carentes de baños adecuados y de los cubiertos para comer. La llegada al hogar opera como el restablecimiento de estos pobres en la comunidad del acceso a la mesa bien servida, de los baños con agua caliente. De este modo la declaración del estado de riesgo o peligro por vía judicial y el posterior ingreso a una institución internativa funciona como un medio de ingresar a estos niños pobres en las condiciones materiales de vida definidas como “necesidades básicas” y de socializarlos en los hábitos de comportamiento típicos de la clase media argentina. Al integrar estas dos interpretaciones se comprende como la descripción de estos niños como “animales” “que caminan en cuatro patas” son contruidos como los “otros” que es necesario incluir en una comunidad de civilización a partir del ingreso a la

institución. La etiqueta de “en riesgo”, “víctima”, constituye un vehículo de acceso a ciertos derechos (vivienda, alimentación, salud) que sólo se materializan en realidades a partir de la exclusión de otros (derecho a vivir en familia, permanecer en su comunidad). El estado garantiza estos derechos a partir de la apertura de un expediente judicial, la internación abre la puerta al ejercicio de derechos a través de una victimización de estos niños:

“hace un par de años que un niño estuviera en un hogar era lo peor y la cosa se revirtió ahora lo mejor es estar en un hogar para un chico pero esto no tendría que ser así, si tiene que estar en un hogar es porque algo está fallando” (Jorge, director O.N.G.)

En algunos discursos emerge una sensación de malestar por la función que cumplen las instituciones que dirigen: primero judicializar, clasificar como riesgoso para después garantizar el derecho a la vivienda, y a alimentación a estos niños y adolescentes. Sin embargo a pesar del tono crítico de algunos de estos discursos, las representaciones sociales asociadas al “ingreso a la civilización” insufla de sentido a las prácticas de estos sujetos al comprobar día a día lo “bien que están los chicos acá”. Esta imagen del antes y del después (antes animal, ahora niño educado; antes hambriento ahora gordito) parece operar como un refuerzo positivo en la tarea de asistir. Tarea siempre amenazada por la existencia de algunas “historias negras” de las instituciones “de menores”.

### **III.- Trabajar en “menores”.**

En las instituciones relevadas se han encontrado dos tipos de auto-nominaciones en relación al rol cumplido en la asistencia de la infancia en riesgo: los “vocacionales” y los “profesionales”. Los últimos constituyen una rotunda minoría entre los 10 entrevistados. La vocación que en la mayoría de los casos se asocia con el amor a los niños y sobretudo a los “niños de menores” constituye una marca de estos trabajadores que consideran que cumplen la función de madres o padres en la tarea cotidiana con los niños. En estrecha relación con los dos campos semánticos identificados arriba (“la institución hacia fuera”- “la institucionalización reparadora”) algunos referentes expresan “somos como la familia que no tienen” mientras otros “intentamos que no se sienta la falta de la familia, pero por más que se parezca a una familia los chicos siguen

reclamando a su familia”. A pesar de las distintas posiciones construidas frente a la problemática de la niñez en riesgo, los entrevistados comparten una caracterización del propio lugar de trabajo como un buen lugar en el cual los chicos “se sienten a gusto”. En general, la propia institución se define como un “caso especial” dentro del amplio espectro de las instituciones de menores, especialidad que se explica por las características extraordinarias de la dirección o del personal. Ya que no existen líneas de trabajo comunes, la personalidad del director se constituye como la variable explicativa:

“P: ¿y la Subsecretaría de Minoridad plantea líneas comunes de trabajo para las instituciones?

R: No, no hay un proyecto, cada institución arma su propio proyecto, no hay nadie que diga bueno vamos a trabajar todas las instituciones de esta manera” (Jorge, director estatal).

De los 6 directores entrevistados sólo uno de ellos tenía un título universitario (trabajadora social) y fue la única que definió su trabajo como una tarea profesional. El resto construye su rol a partir del par conceptual: amor-orientación. A la hora de definir las rutinas cotidianas y la metodología de trabajo es unánime la definición “como en cualquier casa”. El intento por asemejar la vida en la institución con una vida “común y corriente” se ha traducido en el gran cambio que han sufrido las macroinstituciones estatales en los últimos años. Menos chicos por instituto, menos personal, dismantlar las escuelas internas y que los niños interactúen con el “afuera”. Los hogares de las O.N.G.s son tomados como ejemplo por su capacidad de imitar un ambiente familiar: la gran diferencia que aún se mantiene está dada porque en las instituciones estatales el personal rota mientras que en las O.N.G.s los niños viven con los mismos referentes. Para los encargados de éstas últimas dedicarse a trabajar con los niños forma parte de una trayectoria personal de vocación religiosa o de militancia social. En el caso de los empleados y directivos de las instituciones estatales, en cambio, se trata de un empleo en el sector público al que se llega casi de forma azarosa y que luego, con el correr de los años, adquiere la dimensión de vocación.

Todos los entrevistados expresan sentirse a gusto en su trabajo a pesar de la imagen negativa que los institutos de menores tienen en el imaginario social. Los empleados de los institutos estatales refieren permanentemente en su discurso a lo que “se pensaba que era menores”, “el agujero negro que eran las instituciones”, conjurando la imagen negativa hacia un pasado lejano. El corte

entre el pasado y el presente está dado por dos hechos fundamentales: el desmantelamiento de lo macro y el trabajo institucional enfocado en el egreso.

“ Antes por lo general el chico ingresaba y capaz que hasta los 21 años el chico no salía de la institución. Ahora yo pienso que acá se trabaja para que el chico permanezca el menor tiempo posible que pueda ser devuelto a su casa con su familia, como tiene que ser, más por el niño porque es el niño el que sufre” (Cecilia, preceptora, estatal)

Estos dos hechos sumados a una mayor apertura hacia “el afuera” y la disminución del autoritarismo en la relación niño-adulto aparecen como los cambios más positivos en el sistema. En general los entrevistados desplazan los comentarios negativos hacia otras instituciones (fundamentalmente las penales) y comentan que se han enterado de los casos de maltrato y abuso “como todos, por los periódicos”. La idea de que la propia es una tarea “hermosa” y de los aspectos más idílicos de la vida del hogar se oponen a “lo que la gente piensa de los institutos de menores”.

“de hecho cuando yo digo donde trabajo, me dicen cómo podes trabajar en un lugar así y a mí me parece hermoso” ( Luisa, Vice estatal).

El estigma que atraviesa a los niños y adolescentes institucionalizados parece envolver a la gente que trabaja con ellos. La proximidad física con estas infancias riesgosas parece ser una marca socialmente incómoda. El desplazamiento de la referencia negativa hacia el pasado o hacia otras instituciones (las penales, “las que salen en los diarios”) aparece como una estrategia discursiva común.

#### **IV: “Todo para que se sientan bien”.**

Cómo se ha visto, en general, los directivos y el personal encargado del cuidado de los niños y adolescentes construyen una mirada positiva sobre el desempeño de sus instituciones enfatizando en el trabajo cotidiano para lograr el bienestar de los niños. La institución intenta parecerse a una casa y se intenta evitar la cosificación de los niños a partir de medidas como la inclusión en actividades deportivas y culturales en forma individual, la asistencia a diferentes escuelas y la

escucha atenta de las opiniones de los niños y adolescentes. La lucha por el respeto de la singularidad de cada niño es referida por los entrevistados como uno de los principales desafíos de la institución. Sin embargo, a pesar de esto, la institución no deja de articularse como un dispositivo de protección-control encargada del fin superior de conducir al niño hacia un “futuro mejor”. Cada caso se encuentra sometido a una superposición de miradas, permisos y supervisiones que asfixian la cotidianeidad. El propósito declarado de “insertarlos en la sociedad como un ciudadano más” se entrapa en la dinámica institucional que para reconocerlos primero los excluye. Una vice-directora que trabaja con niñas adolescentes refiere que las chicas extrañan la libertad que tiene cualquier adolescente por ejemplo para ir a bailar, intentando subsanar esa falta desde la institución organizan una salida:

“V: las ha llevado la directora, primero la directora va, ve el lugar, habla con el dueño, se hace un trabajo previo, una vez que se acordó, las llevamos, las dejamos, una vez que el dueño vea quienes son las nenas nuestras. Yo se que a ellas les encantaría otro tipo de cosas como hacen la mayoría de los chicos que salen a bailar y vuelven a cualquier hora.

P: ¿y eso no es posible?

V: es demasiada responsabilidad porque nosotros le tenemos que pedir autorización al juez para que las nenas vayan a un baile y siempre esta la posibilidad de que pueda pasar algo” (vice estatal)

A pesar de las buenas intenciones expresadas en la organización montada para que las chicas vayan a bailar es innegable que la estructura de jerarquías y responsabilidades atenta contra el derecho de las adolescentes institucionalizados. Ir a un local bailable previa identificación como “chicas de instituto” frente al dueño del local, revela una lógica de la gestión del riesgo que excede la protección ante una situación familiar conflictiva. Estas chicas se convierten en sujetos vulnerables en cada uno de sus contactos con el “afuera”. Sin desconocer los derechos y las demandas de sus internas y con el objetivo de ampliar sus interacciones extra-institucionales estas funcionarias reproducen el etiquetamiento y el estigma: el habitus institucional se impone con total voracidad. El habitus de “director de instituto” permite jugar con una infinidad de acciones que están inscritas dentro de las posibilidades y las exigencias objetivas para una institución de adolescentes asistenciales del año 2004 en la Argentina, pero las coerciones y las exigencias del

juego se le imponen precisamente porque posee el sentido del juego y está preparada para percibirlos y cumplirlas.(Bourdieu;70)

De esta manera a pesar de los profundos cambios introducidos en las prácticas institucionales la relación entre adulto tutor- menor tutelado (aunque este último tenga 18 años y sea madre) sigue garantizada por la figura omnímoda del juez de menores que, desde las sombras, constituye el fundamento último de la autoridad institucional. Las restricciones a la libertad de estos niños y adolescentes suelen ser narrados como los límites “que pone toda mamá”, pero la sanción a una eventual transgresión de estos límites (a diferencia de toda mamá”) puede llegar a dirimirse en un tribunal de menores. Esta tensión entre la judicialización de la vida cotidiana y la retórica de “como en cualquier casa” atraviesa todos los discursos de la gestión de la infancia en riesgo. La construcción de una esfera pública opera en el dispositivo a partir de la judicialización de los vínculos de los niños, tanto los familiares como los que construirá con los referentes institucionales. Luego, estos territorios de la gestión estatal, como son las instituciones de asistencia, intentan asimilarse a una casa, invisibilizando los rastros de la mirada judicial en la vida de los niños. El ingreso del estado en la vida de esta infancia protegida continua marcando los cuerpos asistidos bajo el signo del estigma. Sin embargo es posible percibir el estado de lucha en el que se encuentra el campo, aún en las cotidianidades, no es necesario leer los proyectos en pugna. Cada institución puede ser leída como un campo de batalla:

“ hay pibas que ellas mismas encuentran su salida, yo te digo porque ha sucedido que se comunican directamente con el tribunal. Acá ellas vienen (en la oficina) llaman ellas directamente al juez, si quieren en presencia mía, si quieren solas toman clases con el equipo. He tenido muchas experiencias de este tipo que la adolescente sola se ha solucionado su futuro” (Jorge, director estatal).

En el seno de las instituciones de encierro esta tensión entre protección y autonomía adquiere el carácter de una batalla solapada entre diversos discursos de la protección en disputa. Por un lado la imagen del niño en riesgo como un ciudadano empuja por trascender los márgenes de la vida en la institución: el discurso del “afuera” como eje de la vida del niño organiza estos relatos. En este discurso se acentúa más que la necesidad de protección- control, la necesidad de ayuda

estatal. El menor como sujeto activo, con capacidades constituye el protagonista capaz de intervenir en la definición de aquellos aspectos en los cuales necesita ayuda. En el caso de los niños pequeños esta atribución de capacidades recae en la familia. En este discurso la dependencia de los niños de la institución aparece como un problema fomentado por los adultos integrantes del dispositivo, que atenta contra las posibilidades de una vida autónoma exitosa. Sin embargo en la misma institución coexiste un discurso que percibe a la dependencia como una “disposición natural” de estos niños y adolescentes necesitados de orientación y guía constituye el foco de los que hacen todo “para proteger”:

“Están muy acostumbradas a nosotras, a que nosotras las sirvamos en un montón de cosas. Todo es dame, dame, nosotros bueno si a ellas las dejas solas hacen lo que quieren. Nosotras no le podemos permitir que andan con los remedios porque ellas se acuerdan un día, otro no se acuerdan, entonces nosotras tenemos esas cosas con llaves acá. Como bueno, nosotros somos más o menos como los padres que no tienen, entonces nosotros estamos exigiendo, exigiendo, para que ellas mañana .....se sostengan solas. (*preceptora, materno estatal*).

Este último fragmento construye a estas madres-adolescentes como incapaces de recordar la medicación de sus hijos, la necesidad de “estar ahí” exigiendo para que “mañana se sostengan solas”, prolonga ese mañana hasta el momento en que se adquiriera, casi mágicamente, una capacidad para la cual no se las prepara. La lógica de las “instituciones totales” de Goofman resuena en estos relatos. El futuro, el mañana orienta este discurso que podría resumirse en la siguiente frase: proteger hoy para que mañana sean gente de bien. El futuro de los niños como horizonte de trabajo constituye otra de las poderosas imágenes inscritas en el discurso de los entrevistados. Intervenir en sus vidas privadas y en la de su familia se justifica en nombre de un “futuro mejor”. Desde las distintas posiciones de “protector” se construyen diversos sentidos de esta tensión hacia el futuro, sin embargo la preparación para el trabajo y el “futuro del país” funcionan como representaciones sociales capaces de aceitar el funcionamiento de la tecnología internativa.

“ Esas cosas son parte de nuestra obligación como institución mientras los chicos están con nosotros, de ir logrando que incorporen como valor el respeto, el buen trato, el ser responsables en las cosas de la escuela para el día de mañana ser responsables en las cosas laborales, sino aprendés a sostener la obligación de la escuela, mucho menos vas a sostener el día de mañana el trabajo”( Ana, directora estatal).

La sujeción de estos cuerpos para conducirlos hacia “la maternidad responsable”, “el adolescente preparado para el trabajo”, “el niño limpio y educado” opera a partir de una combinación de ciertos mecanismos disciplinarios y de una tecnología mayor de identificación y administración del riesgo de los niños. La fijación coercitiva en ciertos espacios institucionales por un tiempo siempre incierto e incontrolable para el menor y su familia (disciplina) se inserta en una tecnología de prevención y gestión de los riesgos a los cuales están expuestos los niños y cuya desatención genera riesgos a la sociedad.

## **V.- Conclusiones.**

Nuevamente, como en el capítulo anterior, el análisis nos devuelve la imagen de un dispositivo atravesado por tensiones que cruzan la gestión de la infancia. Los discursos oficiales que entronizan al niño como sujeto de derechos y definen los objetivos de trabajo a partir de la revinculación familiar, pierden densidad semántica en alguno de estos discursos y directamente se diluyen en otros. Por otro lado el discurso de la vuelta a la comunidad y de la participación de la sociedad civil en la gestión de las políticas públicas, se revela como todo un problema de construcción de significados y prácticas, más que como una solución instantánea. Una pequeña mirada por el universo de las significaciones fundamentales de las O.N.G.s: ilustró un conjunto que engloba desde prácticas anti-autoritarias y reflexivas que disputan el criterio de la nominación judicial hasta recicladas imágenes de la caridad decimonónica.

De este modo es necesario problematizar y discutir ciertas nociones comunes en el discurso de la incorporación de la sociedad civil al estado y fundamentalmente aquellos nociones que construyen el concepto de sociedad civil como un significante capaz de aglutinar los significados positivos de democracia y participación. Más bien, la investigación realizada muestra a las

organizaciones de la sociedad civil incorporadas en la trama estatal de la gestión del riesgo infantil como un complejo mundo habitado por diversas concepciones y prácticas. Organizaciones que trabajando en la asistencia de casos concretas interpelan al estado y denuncian la avasallante violación de los derechos humanos que expresa cada niño institucionalizado. También instituciones basadas en intenciones salvacionistas que pretenden convertir a sus hogares en territorios de cura y reparación en la vida de los niños desprotegidos. Las buenas intenciones presentes en los referentes entrevistados se inscriben en distintas prácticas y discursos: la militancia social, la filantropía y vocación religiosa son convocados en esta oferta institucional inserta en la gestión estatal del riesgo.

Al mismo tiempo la falta de capacitación y de experiencia exigida por el estado para trabajar en la problemática, la ausencia, ya no de definiciones, sino al menos de discusiones, respecto al sentido y a los objetivos del trabajo con la infancia, hablan de un estado ausente. Tanto en las organizaciones no gubernamentales como en las instituciones estatales los entrevistados destacan la ausencia de criterios comunes para abordar, por ejemplo, cuestiones tan delicadas como la maternidad de las chicas “especiales”. ¿Deben permanecer con su hijos? ¿Se deben desvincular y dar los niños en adopción? La soledad angustiante de estos diagnósticos emerge en las entrevistas como una cuestión personal que cada institución define de acuerdo a su punto de vista “subjetivo”.

## **V.- Conclusiones.**

### *Acerca de los alcances de la investigación.*

El diseño teórico y metodológico utilizado en esta investigación habilita ciertas miradas y limita otras. El análisis de las entrevistas realizadas a los jueces de menores y a los referentes de las instituciones de internación ha permitido conocer las representaciones sociales inscritas en los discursos de la protección de la infancia en riesgo. De este modo, se ha avanzado en el conocimiento de la manera en que estos sujetos, en tanto actores institucionales, perciben y conceptualizan su universo de intervención y su propio rol en la misma. Así, es posible acceder a ciertas tramas de significado que estructuran las dinámicas institucionales y que otorgan sentidos a las prácticas. Sentidos que suelen volverse inaccesibles a través de la sola lectura de normas y proyectos institucionales. El estudio de los discursos ha revelado, que pese a la extensión y legitimidad alcanzada por la crítica al Patronato de Menores, mantienen su vigencia ciertas significaciones claves de esta doctrina como la potencia de la solución internativa y su metáfora resocializadora y la imagen del juez padre que orienta, educa y corrige.

Como contrapartida, los límites de este tipo de investigación están dados porque sus resultados no aspiran a ser generalizables a la población de estudio. Sin embargo, si tenemos en cuenta que sólo en el año 2002, 10.750 niños y adolescentes iniciaron una causa en un juzgado de menores del Departamento Judicial La Plata, se entiende el impacto de cada uno de estos discursos en la vida de miles de niños en situación de “riesgo”. La interpretación del juez se ha revelado como un aspecto vital de las prácticas de la justicia de menores, sellando con su impronta el modo de clasificar y luego, gestionar, el riesgo infantil. La investigación ha permitido identificar una tensión que recorre el dispositivo de atención a la infancia en riesgo. Por un lado la avasallante y todopoderosa decisión del juez de menores atraviesa la vida de cada uno de los niños y adolescentes encausados. La tecnología judicial habilita el despliegue interpretativo en nombre de subsanar el riesgo sin demasiados límites legales para internar o externar. El juez de menores no se encuentra obligado por los informes periciales y la revisión de su actuación por un tribunal superior constituye una rara excepción en el fuero. También las instituciones de internación laten al ritmo de la palabra legítima del juez: los padres pueden visitar a sus hijos si el juez lo permite, los niños y adolescentes necesitan autorización del juez para pasar las fiestas con su familia, salir

de noche, ser operados o comenzar a trabajar. El cuerpo y el alma del niño esta interdicto por la mirada del juez padre. Pero a contraluz de esta sobrepresencia del juez que invade en cuerpo y alma a los causantes, se vislumbra la privatización de la gestión de la infancia en riesgo. Privatización que deviene en la ausencia del estado para definir una política institucional, para trazar los objetivos y luego supervisar su cumplimiento.

### *El problema del diagnóstico de riesgo*

Si la pregunta ¿cómo se construye un diagnóstico de riesgo? constituye una preocupación central en esta tesis, este problema no tiene igual relevancia en la consideración de los sujetos entrevistados. En el caso de los jueces, la realización de un diagnóstico de la situación parece ser asimilada a una “observación de los hechos”: la estructura de la percepción judicial es naturalizada en estos discursos y no se suele tener en cuenta el impacto de la propia intervención en la situación “observada”. Aún en los informes periciales que se han analizado impera este estilo descriptivo, a la manera de una inspección ocular que registra lo que “encuentra” y en la cual no se pueden encontrar los rastros del sujeto o los sujetos que investigan. No aparecen patrones comunes de evaluación entre los jueces entrevistados, más bien cada uno posee una clave de interpretación. Sin embargo, en todos los casos la relación entre juez y equipo técnico es presentada como armónica y de elaboración conjunta de la decisiones, el trabajo interdisciplinario aparece como un slogans recurrente entre los entrevistados. Ahora bien, sería necesario indagar hasta que punto la asimetría entre la opinión del juez y la opinión de los peritos, consagrada en el carácter consultivo (y no obligatorio) de los informes periciales, es compatible con la definición de un saber interdisciplinario.

La construcción de informes en el marco de la tecnología Patronato de Menores, como en toda tecnología de tipo judicial se encuentra atravesada por la lógica del interrogatorio. Hijos, padres, vecinos, abuelos son “citados” para hablar de los mismos hechos, combinando la búsqueda judicial de la verdad, con la entrevista psico-social encaminada a encontrar una solución al caso. Al tiempo que se busca la verdad mediante el contraste de “versiones” se diagnostica la capacidad de ese grupo familiar para gestionar la situación riesgosa del niño. La definición de las

situaciones como “casos” constituye una impronta de la justicia de menores: todo pedido, demanda o denuncia se recorta en una causa judicial cuyo titular es el o los menores de edad involucrados. El análisis de las entrevistas y del expediente estudiado remiten a la falta de discusión, explicitación y muchos menos sistematización de los criterios de trabajo. Tampoco existe alguna instancia de reflexión y de análisis capaces de problematizar el impacto de la intervención judicial en el caso en estudio. Ligado a este último punto, otra tensión que divide a los discursos analizados refiere a la visibilización-invisibilización de los propios riesgos que la intervención provoca en los niños y adolescentes.

Ahora bien, como se sostuvo al comienzo de esta investigación toda definición de una “situación de riesgo” involucra valoraciones morales y políticas, valoraciones que en el caso estudiado parecen ser naturalizadas por los entrevistados. Los criterios con los cuales “se mira la situación” constituyen grandes implícitos libres de todo examen y discusión. La integridad física y moral del menor de edad parece ser un criterio compartido por los entrevistados, aunque con esta etiqueta se mantiene la amplitud y vaguedad del “peligro material o moral” que prescribe la ley del Patronato de Menores. Como lo ilustra el capítulo 3, el juez policía evalúa el riesgo del niño en función del riesgo para la sociedad, su horizonte de trabajo es el mantenimiento del orden. Por eso las infancias errantes, las familias en situación de vulnerabilidad y con mayor razón los niños infractores reclaman la tutela de un juez. El juez bombero se posiciona en el lugar de la reparación, las situaciones que evalúa requieren la presencia de un juez para organizar la solución adecuada. En ninguno de estos dos discursos se vislumbra un conflicto de intereses entre niño y estado: la lógica de la protección y de la educación los asimila. Si bien ambos definen los problemas que atienden como sociales, la tramitación de la causa reduce la complejidad de estas situaciones a una única pregunta por las capacidades y aptitudes familiares. Opera un proceso de individualización de lo social que asimila los problemas centrales de la población atendida a la falta de “competencias” (Duschatzky:2000;45). Individualización de lo social que en el caso del Patronato de Menores arrastra además un efecto de culpabilización, que puede llevar en los casos extremos a la pérdida del derecho a criar a los hijos.

Estos dos discursos el de la reparación y el de la criminalización, constituyen improntas inscritas en la racionalidad del dispositivo. La tecnología judicial de protección de la infancia habilita y

expande la potencia performativa de estos discursos de la protección vía segregación. Por más que el discurso de los derechos y las garantías, propio del juez garantista constituye la retórica oficial de los programas y proyectos de la Subsecretaría del Menor, y se exprese en ciertas experiencias alternativas y en algunas gestiones de los casos, la vitalidad de la solución internativa queda expresada en las entrevistas. El año de realización de las entrevistas (2003) fue descrito por los referentes de las instituciones como de “desborde”, ya que todas las instituciones relevadas informaban estar trabajando con una cantidad mayor de niños y adolescentes de los que tenían capacidad para asistir. Este fenómeno puede ser explicado fácilmente por el aumento en el número de casos que llegan a los tribunales de menores derivado del impacto de la crisis económica en la vida de los niños y adolescentes. Sin desconocer la importancia de estas variables, un aporte de este trabajo al estudio del Patronato de Menores, consiste en el señalamiento de la necesidad de comenzar a problematizar “como se observa lo que se observa”, en el fuero. Si se tiene en cuenta que las consecuencias sociales de las crisis económica y social van a seguir reclamando de políticas públicas, los jueces bomberos y policías van a diagnosticar cada vez mayor cantidad de casos “de vida o muerte” y se volverá una necesidad imperiosa la ampliación de la oferta internativa.<sup>23</sup> Así la retórica de “la internación es mala pero no existen otras alternativas debido a la crisis social” se convierte en un discurso que inhibe el cambio, a pesar de estar de acuerdo con sus principios valorativos. Reforzando esta lógica, las prácticas alternativas a la internación como el trabajo de revinculación familiar, es descrito en estos discursos como altamente dependiente del “ingenio”, “la creatividad”, “la buena voluntad”. La falta de recursos institucionales<sup>24</sup>, coloca a las medidas alternativas a la institucionalización en una situación de extrema precariedad.

Otro aporte de esta investigación apunta a señalar la necesidad de estudiar y discutir el lugar que ocupan las disciplinas científicas en el fuero de menores. Los informes periciales ofician como certificaciones selladas con la legitimidad de la ciencia, sin embargo y a la manera de una hipótesis, parecieran no estar aportando en la construcción de los casos aquello capaz de distinguir a una afirmación como científica: la posibilidad de someter a examen y comunicación

---

<sup>23</sup> Es importante destacar que la mayoría de los jueces entrevistados considera necesaria la existencia de más y mejores espacios de internación.

<sup>24</sup> Es necesario volver a mencionar que la Subsecretaría de la Minoridad gasta aproximadamente el 90 % de su presupuesto en el circuito internativo

sus propias condiciones de producción. ¿cuáles son las condiciones de producción de estos saberes? ¿Qué papel cumplen en las decisiones del juzgado? Todas estas preguntas merecen ser seriamente consideradas en la búsqueda de dotar de nuevos significados a la protección de la infancia en riesgo. Con respecto a la gestión de los casos parecen coexistir contradictoriamente la vigilancia y control de los comportamientos del niño y su familia, con el trabajo en redes sociales y en el acompañamiento. Los alcances y límites de esta última modalidad de trabajo en el marco de la justicia de menores, constituyen temas pocos explorados por la literatura y que requieren de urgente atención.

### *La infancia en riesgo en la época de la privatización de los riesgos sociales.*

Si recuperamos lo dicho en el segundo capítulo, se vuelve necesario analizar los resultados de la investigación en el marco del proceso de privatización de lo social que caracteriza a las políticas sociales de la Argentina contemporánea. Si en estas nuevas prácticas de la integración social cada cual es invitado a gestionar su propio riesgo, emerge un nuevo concepto de ciudadanía en el cual los sujetos del riesgo, más que sujetos de derechos, son concebidos como “víctimas”. Siguiendo a Rosanvallon (1995 ) cabe afirmar que al no poderse esperar gran cosa en tanto ciudadano o titular de derechos, es preciso erigirse en víctima para obtener una mejora en la propia situación. Sin embargo, es necesario evitar caer en la tentación de adherir fácilmente a este tipo de análisis surgidos al calor de la experiencia de los estados de bienestar europeos. El Patronato de Menores desde sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX es instituido en el seno de un proyecto social y político de integración social segregacionista y autoritario. Como vimos en páginas anteriores, la internación de las infancias errantes y riesgosas se constituyó como tecnología disciplinaria en el seno de una gubernamentalidad que se pensaba a sí misma como portadora de la civilización y las luces, frente a una población bárbara que había que reformar.

También pudimos observar el avance del biopoder basado en la extensión y profundización de las cuestiones de interés público como la educación y la salud de la población y el carácter residual (más no su eliminación) que adquirieron los mecanismos disciplinarios en las políticas hacia la infancia durante mediados del siglo XX. Por el contrario, la década del 90' fue caracterizada por

un movimiento de signo inverso en el cual se reconfigura la relación entre estado y sociedad civil y se devuelve coactivamente a los individuos el manejo de los riesgos. De este modo se vislumbra que el Patronato de Menores se mantuvo como una tecnología de disciplinamiento a pesar de los profundos cambios operados en las políticas sociales. ¿Cuáles son las características distintivas del Patronato de Menores en este momento histórico? Por un lado, aparece como una política de asistencia a la infancia y adolescencia que incrementa cada año el número de sus “clientes”. En este proceso, a pesar de la situación de lucha en la que se encuentra el campo y de ciertos discursos críticos que emergen entre los jueces de menores, la tecnología judicial de gestión del riesgo, impone su racionalidad transformando en “casos judiciales” una heterogeneidad de demandas y situaciones sociales. El efecto de “judicialización de lo social” aparece como una de las respuestas privilegiadas por el estado, bajo el signo de la victimización-culpabilización. El Patronato de Menores, que “siempre estuvo allí” es reciclado en el control-protección de una población infantil que es nominada bajo el signo del “riesgo”.

En este nuevo estilo de intervención, la privatización de lo social, emerge como una paradoja. La combinación de nuevas tecnologías como la participación de las o.n.g.s, y el trabajo comunitario, construidas a partir de discursos que reivindican las potencialidades de los sujetos y denuncian el autoritarismo, son refuncionalizadas al interior de la tecnología judicial. En este proceso, se configuran nuevas modalidades de privatización del riesgo: el estado se deslinda de parte de sus obligaciones, aunque no abandona su potestad represiva. Se construyen nuevos territorios de la polarización social, en los cuales las prestaciones estatales se constituyen como certificados de discapacidad. De este modo se consolida un proceso de patologización de los problemas sociales.

Una distinción analítica que puede ser relevante a la hora de democratizar la gestión del riesgo infantil, es aquella que señala la necesidad de distinguir entre la dimensión técnica y la dimensión política que implica todo diagnóstico de riesgo. En la dimensión política se juega nada menos que la definición de quienes son designados por la sociedad como los encargados de realizar la clasificación oficial y en base a que parámetros valorativos se construirá la definición de riesgo o peligro. Es claro que el dispositivo institucional define al riesgo de acuerdo a las tecnologías que posee para medirlo y gestionarlo. Los niños que viven a la orilla de un arroyo contaminado por desechos industriales se podría afirmar que están en riesgo, pero la intervención en este tipo de

situaciones no ha constituido históricamente una modalidad de actuación predominante entre los tribunales de menores. Una instancia estatal dedicada a evaluar y gestionar el riesgo de los niños, se enfrenta todo el tiempo a elecciones entre derechos. Por ejemplo en cada internación que decide un juez de menores existe una valoración moral que ordena el orden de prioridades de los derechos: por ejemplo es preferible vulnerar su derecho a vivir en familia y limitar su libertad para proteger su derecho a la educación y a no trabajar. Si bien existen casos más claros que otros (por ejemplo el derecho a la vida aparece como condición de posibilidad de todos los demás) una discusión pública entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo infantil puede ser capaz de articular nuevos significados sociales y nuevas prácticas. Las entrevistas han descrito que en los casos analizados estas valoraciones morales, lejos de responder a la voluntad solitaria de un juez se inscriben en ciertos imaginarios sociales de mantenimiento del orden público mediante la interdicción y la protección de seres incapaces.

La dimensión técnica de la construcción de diagnósticos de riesgo reclama un estado que defina políticas públicas y tenga la voluntad y la capacidad de supervisión. Esto último, no implica una pretensión por prescribir y agotar el sentido de la gestión del riesgo infantil, anulando a los actores y limitando sus experiencias. Respecto a este punto la capacitación de los operadores que trabajan con la infancia aparece como una prioridad junto con la sistematización, comunicación y discusión de las intervenciones realizadas, problematizando el papel de la institución en la definición de la problemática.

### *Nuevas preguntas para un viejo problema.*

A la hora de cerrar esta tesis y a la luz de los resultados obtenidos, quisiera presentar una serie de reflexiones que abren la puerta a nuevas investigaciones y fundamentalmente, a la posibilidad de introducir nuevos enfoques teóricos para estudiar el Patronato de Menores.

Como se señaló en el primer capítulo, la consideración de la tecnología de evaluación y gestión del riesgo infantil en términos de aparato de control social constituye una tradición de importancia fundamental en la literatura argentina y latinoamericana, del mismo modo que la

focalización en las leyes que sostienen esta trama institucional. De este modo se ha consolidado una importante bibliografía y una corriente de opinión acerca de los puntos más controvertidos de estos cuerpos normativos y se ha avanzado en la identificación de aquellos aspectos necesitados de debate y reforma. Esta tesis ha trabajado en otra dirección, que se pretende capaz de completar y complementar a los estudios anteriores. La pregunta por las representaciones sociales inscriptas en los discursos institucionales, junto con el análisis de algunos de los mecanismos de evaluación y gestión del dispositivo, nos ha permitido explorar las construcciones de sentido que estructuran y que son estructuradas al interior de esta tecnología. Esta información nos ha permitido conocer una complejidad de discursos y de prácticas que remiten a significaciones sociales del amparo y de la tutela, de la filantropía y la militancia, que no pueden ser reducidas a la lógica disciplinaria del control social. Ahora bien, los resultados de esta investigación también permiten concluir en la inserción de estas representaciones sociales al interior de una tecnología judicial y en su resignificación en términos de privatización del riesgo.

Sin embargo, este estudio también nos advierte sobre la necesidad de prestar mayor atención a los aspectos simbólicos y emocionales, a ciertas sociabilidad presente en los discursos de la protección a la infancia, a ciertas relaciones sociales basadas en representaciones sociales del lugar de los niños y los adolescentes en la sociedad. La teoría social desde sus tempranos orígenes ha reflexionado acerca del papel de las instituciones coactivas, fundamentalmente el derecho. Emile Durkheim ha abordado el papel de la penalidad como vehículo y expresión de la conciencia colectiva, en uno de los primeros intentos desde la sociología por pensar a las prácticas penales en sintonía con las construcciones significativas del mundo social. Los análisis marxistas a partir del concepto de ideología han intentando pensar a las instituciones como mediaciones entre la estructura social y las conciencias. El análisis weberiano se interroga por el proceso de racionalización de instituciones como el derecho y analiza sus condiciones históricas de posibilidad. Esta apresurada e incompleta revisión tiene el único objeto de situar la propuesta de estudiar al Patronato de Menores como un objeto cultural en el marco de una tradición sociológica consolidada. Sin embargo, la especificidad del abordaje aquí propuesto sostiene la indisolubilidad de lo material y lo cultural, la íntima imbricación entre tecnología y representaciones sociales, aunque no su confusión e indistinción. Esta nueva línea de trabajo por ejemplo, debería poder aportarnos descripciones acerca de los procesos de socialización de los

jueces de menores y demás funcionarios de importancia en el dispositivo. Debería analizar las teorías y significaciones centrales en los informes periciales. Debería trabajar en el estudio de la imbricación entre mecanismos disciplinarios y sentido común.

Otro punto de debate que abre esta investigación se refiere a la ya comentada imagen de la oposición entre paradigmas. A partir del trabajo de campo se encuentran argumentos para sostener que más que procesos de ruptura y cambio paradigmático, es posible referir procesos de relectura y refuncionalización de conceptos claves como sujetos de derecho y derechos del niño en el marco de la tecnología Patronato de Menores. Por ejemplo, esta investigación testimonia la legitimidad que el discurso de los derechos del Niño ha alcanzado entre los entrevistados, tanto entre jueces como entre referentes institucionales. No obstante entre consenso inicial, significaciones rivales se disputan el sentido legítimo de esta nominación. Algunas posiciones, fundamentalmente las próximas a los discursos del juez policía y el juez bombero, consideran que garantizar los derechos de los niños no requiere la reforma legislativa y que el decreto-ley 10.067 puede ser interpretado a la luz de la Convención. En este campo semántico los derechos del niño están asociados a instituciones capaces de cumplir con el objetivo de educación de los niños y adolescentes, tanto en la materia penal como asistencial. Con mayores cantidades y más capacitados recursos humanos para trabajar en la problemática. En suma los derechos del niño están asociados a la cristalizar en realidades las promesas incumplidas del Patronato de Menores y su imaginario de la integración vía segregación. Por el contrario, otro campo semántico identificado asocia el concepto de niño como sujeto de derechos en consonancia con el respeto de los derechos individuales. El derecho aparece como límite a la injerencia estatal en la vida de los niños y su familia y reclama garantías procesales para evitar los riesgos de una intervención estatal de contenido moralizante y fiscalizadora de la vida privada de las familias. En este discurso ni la definición de una situación como urgencia y el carácter de víctima inhiben de la diferenciación entre derechos individuales y políticas de estado.

De este modo, la metáfora de los dos paradigmas en pugna podría estar oscureciendo la asimetría fundamental existentes entre estos discursos. El discurso del Patronato tiene una “complicidad ontológica” con el ser “natural” de las prácticas institucionales con lo que es y siempre ha sido así,(Bourdieu:) por el contrario el discurso de los derechos y garantías debe luchar contra las

inercias institucionales en su lucha por instituir unas nuevas prácticas en las que el niño emerja como sujeto de derechos. El peligro de la imagen de “dos paradigmas” es la tentación de interpretar cada práctica innovadora que es introducida en el dispositivo como una “avance” en la consolidación de un nuevo modelo, antes de analizar sus efectos concretos. En atención a la conceptualización de Kuhn<sup>25</sup> un paradigma en crisis, pero paradigma al fin, es capaz de refuncionalizar ciertas teorías, presentar nuevas soluciones a viejos problemas. El caso de la incorporación de las O.N.G.s en la oferta interactiva de la Subsecretaría del Menor, quizás pueda ser interpretado en estos términos.

Esta lectura no pretende desacreditar los intentos de reforma, la lucha de las O.N.G.s que buscan democratizar al Patronato de Menores ni minimizar los cambios en el dispositivo que han impactado positivamente en la vida de los niños y adolescentes institucionalizados. Cada niño que ha dejado de habitar los pabellones de los macro-institutos, por ejemplo, justifican los esfuerzos cotidianos de los agentes del cambio. De lo que se trata, por el contrario es de aportar una mirada sobre el campo de batalla, a fin de afinar la estrategia.

---

<sup>25</sup> El concepto de paradigma de común se define como una completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por los miembros de una comunidad dada. (Kuhn:1975;269)

## **Bibliografía consultada.**

- BOURDIEU, P. , Cosas dichas, GEDISA, Barcelona, 1996.
- , Sociología y Cultura, GRIJALBO, México, 1990.
- , Los usos sociales de la ciencia, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2000.
- BOURDIEU-GUNTHER; La fuerza del derecho, Ediciones Uniandes, Santafé de Bogotá, 2000.
- FOUCAULT, M.; Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Madrid, 1992.
- \_\_\_\_\_, Saber y Verdad, Ediciones de LA PIQUETA, Madrid, 1991
- , Estética, ética y hermenéutica. PAIDOS, Buenos Aires, 1999.
- , Estrategias del poder. PAIDOS, Buenos Aires, 1999.
- , Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica, México, 2002.
- , Los anormales. Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
- DREYFUS-RABINOW; Michel Foucault: más allá de la hermenéutica y del estructuralismo, UNAM, México, 1988.
- KOSIKI, E; “Discurso jurídico y discurso psicoanalítico. El derecho como texto sin sujeto” en LEGENDRE y otros, El discurso jurídico, HACHETTE, Buenos Aires, 1982.
- MARÍ, E; “Moi, Pierre Riviere y el mito de la uniformidad semántica en las ciencias jurídicas y sociales”, en El discurso jurídico, HACHETTE, Buenos Aires, 1982.
- DUSCHATZKY y otros, Tutelados y asistidos, PAIDOS, Buenos Aires, 2000.
- COVERT, R; Derecho, narración y violencia, GEDISA, Barcelona, 2002.
- GARCIA MENDEZ y otros, Ser Niño en América Latina, GALERMA, Buenos Aires, 1991.
- GARCIA MENDEZ, E; Autoritarismo y Control social. Hammurabi, Buenos Aires, 1987.
- LOPEZ-LINAZA; Psicologías, discursos y poder, VISOR, Madrid, 1996.
- PLATT, A; Los salvadores del niño, SIGLO XXI, México, 1988.

- ROSE NICOLAS; Government, authority and expertise in advanced liberalism. Economy and society. Volumen 25, Número 3, Agosto 1996. Pág. 327-356.
- , The death of the social? Re-figuring the territory of government.
- DAROQUI; La niñez ajusticiada, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001.
- HABERMAS, J; La inclusión del otro. Paidós.1999. España.
- CASTORIADIS, C; "El imaginario social", en Colombo Eduardo, comp., Altamira, Montevideo, 1993.

La institución imaginaria de la sociedad. Volumen 1 y 2. Tusquets Editores, Barcelona, 1989.

- GAYOL Y KESSLER; Violencias, Delitos y Justicias, Manantial, Buenos Aires, 2002.
- GIBERTI, E.; Políticas y niñez, Losada, Buenos Aires, 1997.
- EROLES y otros; Políticas públicas de infancia, Espacio editorial, Buenos Aires, 2001.
- GOFFMAN, Erving; Internados, Amorrortu, Buenos Aires, 1972.
- CHARTIER, Roger; Escribir las prácticas, Manantial, Buenos Aires, 1996.
- , El mundo como representación. GEDISA, España, 1999.
- MAINGUENEAU, Dominique; Introducción a los métodos de análisis del discurso, HACHETTE, Buenos Aires, 1980, pp. 7-25.
- HAIDAR, Julieta; Las materialidades discursivas: un problema interdisciplinario, en Revista Alfa, Sao Paulo, 1992.
- ARIÉS, P; El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. TAURUS, México, 1998.
- OSZLAK, O.: "El mito del estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina" en Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales (Buenos Aires) Vol. 42, N 168, enero-marzo 2002.(pp.519-543).

- DE LEONARDIS, O.; "El mercado social, la calidad social y las calidad de las instituciones sociales". Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales. (Buenos Aires) Vol. 41, n161, abril-junio 2001.(pp. 3-16).
- DOMÉNECH, E.; "Texto, cotexto y contexto del patronato de menores" ,Universidad Nacional de La Plata, 2002.
- ANTONINI, P; "Una Historia con final Abierto" en Revista La Pulseada, julio 2003. La Plata.
- GRASSI, HINTZE, NEUFELD; "Políticas sociales: crisis y ajuste estructural .Espacio Editorial. Buenos Aires, 1994.
- MOREIRA, M; "Antropología del control social", Editorial Antropofagia, Bs. As. 2001.
- GINGOLD, L.; "Memoria, moral y derecho: el caso de Ingeniero Budge (1987-1994)" FLACSO- Juan Pablos editor, México, 1997.
- DEL OLMO, R; "América Latina y su criminología", Siglo XXI, México, 1981.
- MARÍ, E; "La problemática del castigo", HACHETTE, Buenos Aires, 1983.
- ENRIQUEZ, E; "Les jeux du pouvoir et du dossier dans l entreprise". ADAGP. París, 1997.
- ROSANVALLON, P; La nueva cuestión social. MANANTIAL. Buenos Aires, 1995.
- ABRIC, J; "Prácticas y Representaciones sociales".
- ALEXANDER, J; "Sociología cultural". ANTHOPOS. México, 1999.
- DOUGLAS, M. y WILDAVSKY, A; "Risk and Culture. An essay on the selection of technical and environmental dangers". UCLA. Los Angeles 1982.
- "La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales."  
Paidós. Barcelona, 1992.
- TARACENA, E; "Le théâtre et les jeunes de la rue á México" en Sud Nord, Número 4-1995.
- LUPTON, D. (Ed.) ,Risk and sociocultural theory. Cambridge. Introducción, cap.7.

- CASTEL, R. en The Foucault Effect. Studies in governmentality. Hemel Hempsted. Harver Wheatsheaf, 1991.
- SANICOLA, L; "Redes sociales y menores en riesgo". Lumen-Humanitas. Buenos Aires, 1996.
- VAN DIJK, T; "Ideología: una aproximación multidisciplinaria", GEDISA, Barcelona, 2000.
- , "El discurso como interacción social", GEDISA, Barcelona, 2000.
- LOURAU, R; "Análisis institucional y siconálisis". Nueva Imagen, México, 1979.
- TODOROV, T; "La conquista de América". Siglo XXI, México,
- SOLIS QUIROGA; "Los menores inadaptados", Gráficos del Dpto. del D.F, México, 1936.
- GUY, D; "Mujer, familia y niñez: las imágenes de lo oculto" en Gutman-Thomas Reese (Ed.) en Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital. EUDEBA, Bs. As., 1999.
- CORBIN, A; "Las estrategias de desodorización" en EL Perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX, FCE, México.
- GRUNER, E; El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible de lo trágico). Piados, Buenos Aires, 2002.
- ANTAKI, C; BILLIG, M; EDWARDS, D; POTTER, J. El análisis del discurso implica analizar: crítica a seis atajos analíticos. Atenea Digital, 3. Disponible en <http://Natalia.uab.es/atenea/num3/antaki.pdf>.
- CACERES NIETO, E; Lenguaje y Derecho. UNAM, México, 2000.
- , New times or same old story? Risk, reflexivity and social control in child protection.
- ZiZek, S; El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI Editores, México 2001.
- ; "El espectro de la ideología" en Ideología: un mapa de la cuestión. F.C.E, México, 2003.
- Hersfeld, M; The social production of indifference. University Chicago Press, Chicago, 1993.
- Moore, B; La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. UNAM, México, 1989.

- Diccionario de Filosofía Herder.
- ROUDINESCO y PLON; Diccionario de Psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1998.
- DONZELOT, J; La policía de las familias, Editorial Pretextos, Valencia, 1979.
- MINUJIN –COSENTINO; Cuesta Abajo: Los nuevos pobres: efecto de la crisis en la sociedad argentina, Buenos Aires, Losada, 1992.
- INSAURRALDE, N; Tesis para optar al grado de Licenciado en Sociología, Departamento de Sociología, FHCE, UNLP, 2003.
- ZAFFARONI y otros; El proceso penal. Sistema Penal y Derechos Humanos, Porrúa, México, 2000.
- KING, M: “Comparing Legal Cultures in the Quest for Law’s Identity” en NELKEN, D; Comparing Legal Cultures, Dartmouth, 1997.
- MEIKSINS WOOD, E; Democracia contra capitalismo, Siglo XXI, México, 2000.
- GARLAND, D; Castigo y la sociedad moderna, Siglo XXI, México, 1999.
- RABOTNIKOF-VELASCO-YTURBE; La tenacidad de la política, UNAM, México, 1995.
- QUIROGA-VILLAVICENCIO-VERMEREN; Filosofías de la ciudadanía, Homosapiens Ediciones, Rosario, 1999.

#### **TEXTOS LEGALES CONSULTADOS.**

- Convención sobre los Derechos del Niño, A.G. res. 44/25, anexo, 44 U.N. GAOR. Supp. (No.49)p. 167, ONU Doc. A/44/49 (1989) entrada en vigor 2 de septiembre de 1990.
- Decreto- ley 10.067. Sancionada el 25 de octubre de 1983.
- Ley de Protección integral de los derechos del Niño y adolescente de la provincia de Buenos Aires. 12.067, año 2000.
- Proyecto de ley Senador Corbatta.